



RETO
SEGURIDAD
CIUDADANA
SIGLO
21

JORGE WOODBRIDGE GONZÁLEZ





363.3
W882r

Woodbridge González, Jorge.
Reto Seguridad Ciudadana Siglo 21
1a Edición. Colección Costa Rica: Reto Siglo 21
Alajuela, Costa Rica. 2025
206 pp. Ediciones JWG.

ISBN: 978-9930-00-504-0

1. SEGURIDAD CIUDADANA - ENSAYOS
2. POLÍTICAS SOCIALES Y SEGURIDAD

Libro de conversaciones - Programa Reto Siglo 21.
Autor: Jorge Woodbridge González



STUDIO HOTEL
******Boutique*

Agradecimiento especial a Studio Hotel, Santa Ana



Diseño, diagramación y concepto editorial:
Juan Diego Otalvaro Ortega - jd@theroversquest.org
theroversquest.org



Grabación y Filmación de Entrevistas:
Amanda Agüero - framefilmscr@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin la autorización del autor.

Reservados todos los derechos. Se autoriza la reproducción y difusión de los contenidos de este libro para fines educativos u otros no comerciales, siempre que se reconozcan los créditos de la obra en las citas y referencias.



Reto Seguridad Ciudadana Siglo 21

Por: Jorge Woodbridge González

NOTA EDITORIAL

En un país que alguna vez fue ejemplo de paz, la violencia avanza como una sombra que amenaza con oscurecer la identidad costarricense. Reto Seguridad Ciudadana Siglo 21 plantea un recorrido honesto y necesario por los desafíos que enfrenta Costa Rica ante el narcotráfico, la inseguridad y la fragilidad de sus instituciones.

A partir de voces diversas —expertos, ciudadanos y protagonistas de primera línea—, este libro analiza las raíces del problema y propone caminos para recuperar la confianza, reconstruir la cohesión social y fortalecer al Estado. No se trata de nostalgias ni de diagnósticos vacíos, sino de una invitación a decidir qué futuro queremos escribir: uno marcado por el miedo o uno guiado por la esperanza y la valentía de reinventarnos.

Como noveno tomo de la colección Reto Siglo 21, esta obra busca inspirar reflexión y acción, recordándonos que la seguridad no es solo ausencia de violencia, sino la posibilidad de vivir con dignidad, justicia y libertad.



ÍNDICE GENERAL

6	Nota editorial
12	Presentación

16	Capítulo 1
	Costa Rica en una encrucijada: La Ilusión de un País de Paz y las Grietas que Emergen

28	Capítulo 2
	El Rostro de la Inseguridad Cotidiana: De la Percepción al Miedo: Lo que Revela la Encuesta Nacional de Seguridad

40	Capítulo 3
	Un Enemigo sin Fronteras: La Transformación del Narco en Costa Rica, de Bodega a Centro de Operaciones

54	Capítulo 4
	El Rostro Olvidado de la Justicia: La Crisis Penitenciaria y el Costo de Mirar hacia otro Lado

68	Capítulo 5
	La Aspirina Nacional: El Fracaso de una Política Criminal sin Política Social

80	Capítulo 6
	El Rostro Humano de la Frontera: De la Solidaridad a los Nuevos Retos Migratorios

92 *Capítulo 7*

Entre la Mora y la Desconfianza:
El Poder Judicial como Pilar Democrático...
en Desgaste

104 *Capítulo 8*

Justicia Atrapada en el Pasado:
La Encrucijada de la Justicia Costarricense

116 *Capítulo 9*

La Voz de los Derechos en Costa Rica:
Sala IV, la Guardiana Silenciosa

128 *Capítulo 10*

El Muro Resquebrajado:
La Fragilidad de la Policía en la Lucha
por la Seguridad

140 *Capítulo 11*

Una Hoja de Ruta en Duda:
La Historia Cíclica de la Seguridad
Costarricense

152 *Capítulo 12*

El Semillero de Violencia:
Justicia Social y Desigualdad:
Raíces del Problema

172 *Capítulo 13*

Fundaciones y ONGs:
Pequeños Faros en la Oscuridad

184 *Capítulo 14*

La Escuela como Primera Trinchera de
Seguridad:
Educación, Cultura y Comunidad como
Barreras al Crimen

194 *Conclusión*

Un Nuevo Pacto Social
por la Seguridad y la
Justicia:
El país que Somos y el
País que Podemos Ser

*“No somos el país que fuimos,
pero tampoco el que tememos ser.
Estamos justo en el instante de
volver a escribir nuestra historia.”*

Costa Rica está en un punto de inflexión. Por décadas nos contamos al mundo como la excepción centroamericana: un país sin ejército, con escuelas antes que cuarteles, con médicos antes que generales, con paz como identidad nacional. Ese relato nos dio orgullo, confianza y sentido de pertenencia. Pero hoy, las cifras de violencia, el miedo en los barrios y la fragilidad de nuestras instituciones nos obligan a reconocer una verdad incómoda: la narrativa de “oasis de paz” ya no alcanza para explicar la realidad.

PRESENTACIÓN

Donde termina el miedo y empieza la vida

Este libro nace de esa tensión. No es un compendio de estadísticas frías ni un ejercicio académico desconectado de la vida cotidiana. Es, más bien, un intento por escuchar voces y recoger experiencias de distintos rincones del país: desde los jueces que lidian con una justicia lenta y saturada, hasta los jóvenes que viven a diario la presión del narco en sus barrios; desde las madres que reclaman oportunidades para sus hijos, hasta los expertos que insisten en que aún hay rutas posibles.

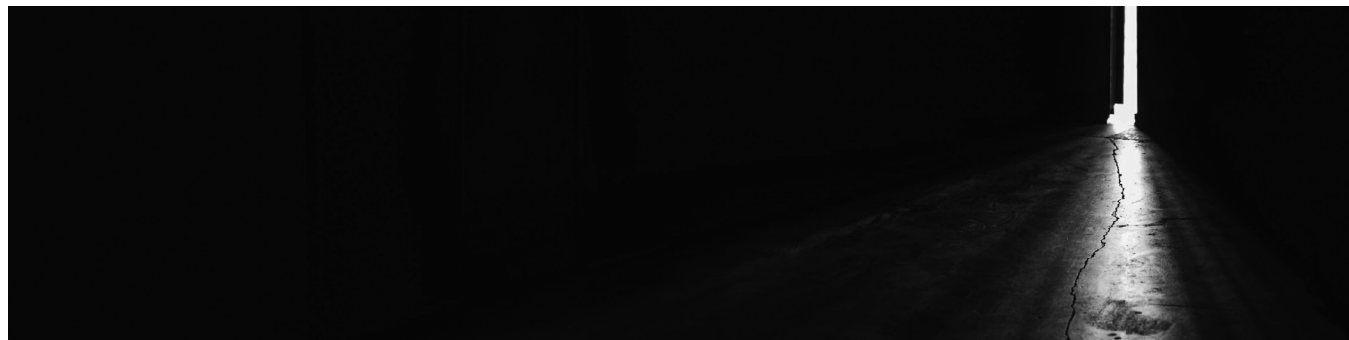
El propósito es claro: ofrecer un retrato honesto del país que somos y, al mismo tiempo, abrir caminos hacia el país que podemos ser. No se trata de nostalgia por una Costa Rica idealizada, sino de la convicción de que todavía podemos reinventarnos, como lo hicimos en otros momentos críticos de nuestra historia. Aquí se cruzan diagnósticos, testimonios y propuestas, pero sobre todo se busca lo más urgente: recuperar la confianza, reconstruir la cohesión social y trazar un nuevo pacto por la seguridad y la justicia.

Este editorial no pretende responder todas las preguntas, sino invitar a la lectura con una actitud crítica y propositiva. Porque de lo que se trata, al final, es de decidir si permitimos que la violencia nos arrebate lo que nos distingue o si, por el contrario, tenemos la valentía de imaginar y construir una Costa Rica más justa, segura y humana.

*“La seguridad no se hereda ni se
improvisa: se construye cada día con
confianza, justicia y un Estado que no le dé
la espalda a su gente.”*




Jorge Woodbridge González



Capítulo 1

Costa Rica en una encrucijada

**La ilusión de un país de paz
y las grietas que emergen.**



*“Costa Rica es una nación de
familias;
si perdemos la paz y la democracia,
perdemos lo que nos distingue en el
mundo.”*

Rogelio Pardo, ex Secretario de Defensa de EEUU

Siempre crecí oyendo, como la mayoría de los ticos, que éramos un país distinto. Un oasis de paz en medio de un vecindario convulso. Mientras en Centroamérica ardían las guerras civiles en los setentas y ochentas, aquí nos jactamos de que habíamos abolido el ejército en 1948 y que, gracias a esa decisión visionaria, podíamos invertir más en escuelas que en fusiles, más en hospitales que en tanques. Esa narrativa, repetida en las aulas, en los discursos oficiales y hasta en la forma en que nos presentamos ante el mundo, fue creando un mito: el mito de una Costa Rica pacífica, casi inmune a los males de la región.

Pero hoy, cuando salgo de mi casa y leo los titulares que hablan de balaceras en barrios que antes solo se conocían por su equipo de fútbol o por la feria del agricultor, me pregunto si esa ilusión no se nos está desmoronando entre las manos. En el 2023 alcanzamos una cifra récord de homicidios: 907 asesinatos en un solo año, lo que significó una tasa de 17,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de nuestra historia contemporánea y una de las más graves de América Latina. Eso no es un espejismo, eso son datos fríos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Para un país que hace apenas dos décadas se pavoneaba de tener tasas de homicidio de 6 o 7 por cada 100 mil, el salto es brutal.

Yo me acuerdo de un reportaje de los noventa donde se decía que Costa Rica era uno de los países más seguros de América. Hoy, organismos como Insight Crime nos ponen al lado de naciones como Ecuador y Honduras, que también han caído en las garras del crimen organizado. Y lo más duro, es que ya no hablamos de historias lejanas: hablamos de las esquinas de nuestras ciudades, de barrios donde tenemos que aprender a tirarnos al piso cuando se escuchan los balazos, de familias que no pueden salir tranquilas porque en cualquier momento pasa un carro con sicarios.

Claro que el mito de la paz tenía bases reales. La abolición del ejército fue un hito. Fue la jugada maestra de José Figueres Ferrer, don Pepe, quien entendió que después de la guerra civil del 48 lo que este país necesitaba no eran más fusiles, sino más pupitres. Esa decisión permitió que durante décadas Costa Rica invirtiera más del 7% del PIB en educación, algo que nos colocó muy por encima de nuestros vecinos. También fortaleció la Caja Costarricense de Seguro Social, ese monstruo burocrático que tanto criticamos, pero que al mismo tiempo nos ha salvado la vida a miles. Gracias a esas apuestas sociales, nos vendíamos al mundo como la “Suiza centroamericana”.

Sin embargo, lo que no vimos fue que, mientras cantábamos el himno con orgullo de que no había ejército, sí había un ejército silencioso que iba creciendo: el del narcotráfico y el crimen organizado. Según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), desde la década del 2000 Costa Rica empezó a ser un corredor cada vez más codiciado por los carteles internacionales. Nuestra ubicación geográfica, en medio de Suramérica productora y Norteamérica consumidora, nos convirtió en una especie de puente dorado. Y los puertos de Limón y Caldera, que tanto aportan a la economía, se volvieron puertas de entrada y salida para toneladas de cocaína. En 2022 se decomisaron en el país más de 71 toneladas de droga, un récord histórico que revela no sólo la eficiencia de las autoridades, sino la magnitud del monstruo que enfrentamos.

Lo paradójico es que mientras aumentaban los decomisos, también aumentaban las balas en las calles. En barrios como La Carpio, Desamparados o Limón, el microtráfico se convirtió en el pan de cada

día. El OIJ calcula que más de la mitad de los homicidios en los últimos tres años están directamente ligados a disputas por territorios de venta de droga. Y lo más doloroso: son muchachos de 15, 16 años los que terminan tirando del gatillo o recibiendo la bala. ¿Cómo no pensar entonces que el tejido social se nos está resquebrajando?

A veces pienso que vivimos en una especie de doble realidad. Por un lado, seguimos siendo el país que abolió el ejército, que tiene tribunales constitucionales que garantizan los derechos humanos, que exporta energía renovable y que recibe premios internacionales por su democracia. Pero por otro, también somos el país donde el 65% de la gente, según la Encuesta Nacional de Seguridad 2022, dice sentirse insegura en su propio barrio; donde mil colones no alcanza ni para el fresco porque el costo de vida se dispara mientras las oportunidades escasean; donde cada día surgen noticias de corrupción que erosionan la confianza en las instituciones.

Ese contraste entre la ilusión y la realidad es, creo yo, la gran grieta que enfrentamos. Nos cuesta aceptar que ya no somos inmunes, que la violencia de la región nos alcanzó. Y sin embargo, no hemos perdido del todo esa vocación civilista que nos distingue. La prueba está en que, a pesar de las cifras, seguimos rechazando la idea de un ejército y buscamos salidas desde la educación, desde la comunidad, desde el fortalecimiento institucional. Esa es la batalla cultural que estamos librando.

Por eso este libro arranca aquí, reconociendo esa tensión entre el mito y la realidad. Porque no se trata de renegar de nuestra historia ni de negar lo que hemos logrado, sino de aceptar que estamos en una encrucijada. Y que si no asumimos el problema con la seriedad que merece, si seguimos creyendo que “eso le pasa solo a los narcos”, terminaremos perdiendo lo mejor de lo que somos.

SEGURIDAD, JUSTICIA Y COHESIÓN SOCIAL COMO PILARES EN Tensión

Cuando me siento a conversar con la gente en la calle, en la feria del agricultor o en la soda de la esquina, siempre surge el mismo tema: la inseguridad. No importa si

estoy en San José, en Liberia o en Limón, en todas partes la gente siente que la violencia ya no es un asunto lejano, sino que está metida en su vida cotidiana. Y eso me hace pensar que la seguridad, la justicia y la cohesión social son como tres patas de un trípode: si una se quiebra, las otras tambalean. El problema es que en Costa Rica, hoy por hoy, esas tres patas están bajo una tensión brutal.

Me acuerdo que hace unos años, un muchacho me contó que había dejado de salir de noche porque ya no se sentía seguro en su propio barrio, en Pavas. *“Antes uno veía patrullas, ahora solo ve búnkeres”*, me dijo. Esa frase me quedó retumbando. Y la respaldan los números: el Programa Estado de la Nación señalaba en 2023 que más del 50% de los homicidios del país estaban directamente relacionados con el microtráfico, y que la violencia asociada a estas disputas se había expandido hacia zonas que antes eran consideradas tranquilas. Ya no hablamos solo de los barrios marginales, sino también de comunidades de clase media donde aparecen ventas de droga disfrazadas de pulperías o bares.

La seguridad se resiente no sólo por la violencia visible, sino también por la percepción. La Encuesta Nacional de Hogares 2022, realizada por el INEC, reveló que un 64% de los costarricenses consideraba que la inseguridad había aumentado en los últimos doce meses. Y lo más grave: un 40% dijo haber cambiado sus rutinas diarias por temor a ser víctima de un delito. Eso quiere decir que la inseguridad ya no es una estadística: es un factor que modifica cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo educamos a nuestros hijos. Es un fantasma que está condicionando nuestras decisiones más íntimas.

Ahora bien, ¿qué pasa con la justicia? Aquí está el otro gran pilar que se nos está debilitando. Nuestro sistema judicial, que durante décadas fue motivo de orgullo, hoy enfrenta una de las mayores crisis de su historia.

La mora judicial se ha convertido en un monstruo. El Informe Estado de la Justicia 2022 reportaba que en materia penal el tiempo promedio de resolución de un caso supera los 900 días, casi tres años. Y en el área civil, ni se diga: hay procesos que duran más de 10 años en resolverse. Yo he conocido personas que murieron sin ver resuelta su causa en tribunales. Eso no es justicia, eso es un castigo adicional para quienes buscan amparo en el sistema.

El problema no es solo la lentitud, sino también la confianza. Según el Latinobarómetro 2021, apenas un 25% de los costarricenses decía confiar en el Poder Judicial. Y esa desconfianza se amplifica cuando vemos casos de corrupción, filtraciones de información a bandas criminales o decisiones judiciales que liberan a detenidos por narcotráfico por fallas en la cadena de custodia. Recuerdo un caso en Limón, en 2023, donde a un narco lo soltaron porque no se documentó bien el allanamiento. La gente en el barrio no entendió nada: “¿cómo lo agarran con las manos en la masa y lo sueltan?”. Ese tipo de vacíos erosiona la credibilidad en las instituciones y refuerza la idea de que la justicia es débil, lenta y, en algunos casos, cómplice.

Y aquí es donde entra el tercer pilar: la cohesión social. Costa Rica siempre se ha enorgullecido de su paz social, de esa capacidad de sentarnos a dialogar y buscar consensos, como en los famosos pactos sociales de los años ochenta. Pero hoy, esa cohesión está fracturada. Lo vemos en las calles, en las protestas, en el aumento de la polarización política. El Estado de la Nación 2021 ya advertía que más del 60% de los costarricenses sentían que el país estaba más dividido que en años anteriores. Y esa división se refleja también en la forma en que percibimos la seguridad: para algunos, la solución es copiar modelos autoritarios como el de Nayib Bukele en El Salvador; para otros, la respuesta está en fortalecer la educación y la prevención.

El problema es que mientras discutimos qué modelo seguir, los jóvenes siguen cayendo en las garras del crimen organizado. Según el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el consumo de drogas entre adolescentes costarricenses aumentó en un 15% entre 2017 y 2022.

Y la mayoría de esos consumidores tiene entre 12 y 17 años. Eso significa que estamos perdiendo a una generación entera frente al narcotráfico. Y si a eso le sumamos que, según el Ministerio de Educación Pública (MEP), la deserción escolar en secundaria supera el 30%, el panorama es desolador. Jóvenes sin educación, sin empleo y con acceso fácil a drogas: la receta perfecta para que las pandillas los recluten.

Entonces, ¿qué hacemos? La tentación es pensar que la solución está en más patrullas, más cárceles y más mano dura. Pero los datos muestran que eso no es suficiente. En Panamá, que tiene el doble de policías que nosotros, la tasa de homicidios en 2022 fue de 11 por cada 100 mil habitantes, apenas un poco menor a la nuestra. Y en México, donde el gasto militar es astronómico, el problema de la violencia sigue fuera de control. La seguridad no se resuelve solo con uniformes y armas, se resuelve con cohesión social, con oportunidades, con un sistema judicial que funcione.

Recuerdo que en el 2007 participé en un foro en Washington donde se discutía la seguridad en América Latina. Un experto dijo algo que nunca se me olvidó:

“La seguridad no es solo la ausencia de violencia, es la presencia de justicia”.

Esa frase resume lo que necesitamos entender en Costa Rica. Porque mientras no tengamos un sistema judicial ágil y confiable, mientras no logremos cerrar las brechas sociales que hacen que la juventud vea más atractivo trabajar para un narco que terminar el colegio, la seguridad seguirá siendo un espejismo.

Costa Rica está en una encrucijada. Si fortalecemos estos tres pilares — seguridad, justicia y cohesión social— podemos recuperar el rumbo y demostrar que la abolición del ejército no fue solo un gesto simbólico, sino una apuesta real por un modelo distinto de desarrollo. Pero si seguimos

dejando que se nos agrieten esos pilares, corremos el riesgo de que este trípode se venga abajo. Y ahí sí, ni la historia, ni los discursos, ni la imagen internacional podrán salvarnos.

Desde que empecé este proyecto, tuve claro que no se trataba de escribir un diagnóstico frío lleno de estadísticas y tecnicismos, de esos que terminan guardados en

EL PROPÓSITO DE ESTE LIBRO: ESCUCHAR VOCES Y TRAZAR RUTAS POSIBLES

un cajón o en un PDF que nadie lee. Lo que quería, más bien, era abrir un espacio para escuchar, para registrar voces distintas, para darle forma a un retrato colectivo de este país que hoy se siente confundido y agobiado. En cada entrevista que sostuve, en cada conversación con académicos, exmagistrados, expertos en seguridad o vecinos de comunidades golpeadas por la violencia, confirmé que lo que nos falta no son datos, sino rutas posibles. Y esas rutas solo se construyen cuando se integran perspectivas diversas.

Costa Rica siempre se ha contado a sí misma la historia de ser un país excepcional: sin ejército, con tradición democrática, con instituciones fuertes y con un sistema educativo que, por décadas, fue la envidia de la región. Y es cierto: los indicadores lo confirmaban. En el Índice de Democracia de The Economist de 2010, aparecíamos como una “democracia plena” junto a países europeos. La pobreza bajó de un 30% en los años ochenta a un 20% en los noventa, gracias a las reformas y a las transferencias sociales. La esperanza de vida superó los 80 años, más que en Estados Unidos en algunos momentos.

Pero esa historia que tanto nos repetimos comenzó a mostrar grietas. Hoy, según datos del INEC 2023, un 23% de los hogares vive en pobreza, el desempleo ronda el 11% y el 40% de los trabajadores está en la informalidad. En educación, pasamos de tener una matrícula casi universal en secundaria a una deserción del 30% en algunos niveles. Y en seguridad, como hemos visto, alcanzamos en 2023 la tasa de homicidios más alta en la historia: 17,2 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio de Seguridad Pública. El relato de país modelo empieza a

chocar con la realidad de las calles, y eso genera frustración, enojo y, sobre todo, desconfianza.

Entonces, ¿para qué un libro más sobre la crisis? La respuesta es sencilla: porque necesitamos escuchar. Escuchar no solo a quienes tienen títulos académicos o cargos públicos, sino también a los que viven la inseguridad en carne propia, a los que sufren la burocracia del sistema de justicia, a los que ven cómo sus hijos abandonan el colegio porque ya no le encuentran sentido.

En este libro, las voces de los entrevistados en el programa Reto siglo 21, se entrelazan con la mía, no porque yo quiera imponer una narrativa, sino porque juntos podemos construir un espejo donde el país se vea reflejado.

Recuerdo una frase de la expresidenta de la Sala Constitucional, Virginia Calzada, ex presidenta de la Sala Constitucional durante nuestra conversación: *“La gente no sabía qué era la Sala IV, pero sí sentía que tenía derechos”*. Ese testimonio me hizo pensar que los grandes cambios en este país no vinieron de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, del empoderamiento ciudadano.

Lo mismo me dijo Rodolfo Brenes, abogado penalista, cuando hablaba de prevención del delito: *“Si queremos enderezar a un joven, no basta con meterlo a la cárcel, hay que darle oportunidades”*. Y Verny Montoya, sociólogo y profesor universitario, insistía en que el Estado tiene que cambiar la narrativa, dejar de amplificar la violencia y comenzar a hablar de

paz. Son voces que, aunque distintas, coinciden en algo esencial:

Costa Rica necesita reencontrar un rumbo.

El propósito de este libro, entonces, es doble. Primero, hacer un inventario honesto de nuestras fracturas, sin maquillarlas, sin discursos triunfalistas que ya no convencen a nadie. Y segundo, poner sobre la mesa rutas posibles, basadas en evidencias, en experiencias internacionales, pero también en nuestra propia historia. Porque no se trata de copiar modelos extranjeros al pie de la letra. Como me decía un colega en un foro en México:

“Costa Rica no puede ser El Salvador, ni quiere serlo; pero tampoco puede seguir siendo la Suiza que ya no existe”. Se trata de buscar un modelo propio, adaptado a nuestra realidad.

Las rutas existen, aunque a veces se pierdan entre la maraña del populismo y la polarización. Por ejemplo, el Estado de la Justicia 2022 recomendaba una reforma profunda al aparato judicial para reducir la mora y agilizar procesos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha insistido en la necesidad de modernizar los sistemas policiales con inteligencia y prevención comunitaria. La OCDE, en sus reportes sobre Costa

Rica, ha señalado que la desigualdad es uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible. Es decir, ya tenemos las pistas, lo que falta es voluntad política y social para convertirlas en acción.

Pero más allá de las cifras, hay un elemento que considero vital: la construcción de confianza. En Costa Rica, según el Latinobarómetro 2021, apenas el 14% de la población confía en los partidos políticos, y sólo un 22% en el Congreso. Sin confianza, ninguna ruta es posible, porque cada propuesta se percibe como una maniobra más de poder. Por eso, este libro apuesta a recuperar la conversación, a reconstruir puentes. Lo que quiero es que cuando alguien lo lea, sienta que aquí se plasmaron las preocupaciones reales del país, no solo las agendas de quienes están en el poder.

Pienso en las futuras generaciones, en esos jóvenes que hoy están en la escuela o en el colegio, muchos de ellos con la tentación del dinero fácil del narco a la vuelta de la esquina. ¿Qué país les vamos a dejar? ¿Uno en el que la violencia sea la norma, en el que la justicia llegue tarde y en el que las oportunidades sean sólo para unos pocos? ¿O un país que, con todas sus imperfecciones, se atreve a replantearse y a trazar un nuevo camino?

El propósito del libro, entonces, es servir de brújula en medio de la tormenta. No una brújula que señala un único norte, sino una que abre varios caminos posibles. Que cada lector pueda encontrar en estas páginas una invitación a pensar, a debatir, a no quedarse con la resignación de que “ya nada se puede hacer”. Porque si algo nos ha enseñado la historia costarricense es que, en los momentos más críticos, hemos sabido reinventarnos. Lo hicimos en los años cuarenta con la abolición del ejército, lo hicimos en los ochenta con el ajuste estructural y los pactos sociales, y lo podemos volver a hacer ahora.


Este libro es, en el fondo, un acto de esperanza. Una esperanza que no niega los datos duros, que no ignora la violencia en las calles ni la crisis en las instituciones, pero que tampoco se deja arrastrar por el derrotismo. Escuchar voces, trazar rutas posibles, ese es el compromiso. Porque Costa Rica todavía puede ser el país que soñamos, siempre y cuando tengamos el coraje de reconocer nuestras grietas y la creatividad de imaginar nuevos caminos.



Capítulo 2

El Rostro de la Inseguridad Cotidiana

**De la Percepción al Miedo:
Lo que Revela
la Encuesta Nacional de Seguridad.**



“El problema de la criminalidad no es solo el número de homicidios, sino cómo desarma la convivencia. Ahí tenemos un país que se empieza a fracturar”.

Rodolfo Brenes Vargas, Abogado Penalista

Hace unos meses, caminaba por el centro de San José después de una entrevista y me encontré con un viejo amigo, taxista de toda la vida. Nos pusimos a conversar en la acera, y lo primero que me dijo, sin que yo le preguntara nada, fue: *“Mae, ya uno sale con miedo. No sabés si el pasajero que sube es cliente o un bicho raro que lo que quiere es asaltarte”*. Esa frase me golpeó más que cualquier estadística, porque retrata lo que hoy vive mucha gente en Costa Rica: la inseguridad no es solo un número, es un estado permanente de alerta, una sensación que cala en lo más íntimo de nuestras rutinas.

Para entenderlo mejor, hay que mirar los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad 2022, realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional. Los resultados fueron contundentes: el 78% de los costarricenses siente que la inseguridad ha aumentado en el país, y un 65% considera que su barrio ya no es tan seguro como hace cinco años. Este tipo de percepción no es menor, porque cuando la mayoría de la población cree que está en riesgo, aunque no haya sido víctima directa de un delito, se modifica la manera en que usamos los espacios públicos, cómo educamos a nuestros hijos y hasta cómo interactuamos con los vecinos.

La encuesta también reveló que el 37% de los hogares reportó haber sido víctima de algún delito en el último año, siendo el robo a viviendas y los asaltos en la vía pública los más frecuentes. Pero lo que más me llama la atención es que, incluso entre quienes no fueron víctimas directas, el miedo se instaló en la vida cotidiana. La gente deja de salir de noche, evita caminar sola, cambia rutas de transporte. Y ese miedo, al repetirse y multiplicarse, termina erosionando la confianza social que ha sido una de las mayores fortalezas de Costa Rica.

Si miramos las cifras regionales, la comparación también asusta. El Barómetro de las Américas 2021 indicó que Costa Rica, históricamente percibida como uno de los países más seguros de la región, hoy tiene niveles de miedo ciudadano similares a los de países como Panamá o República Dominicana, que durante años tuvieron tasas delictivas mucho más altas. Y aunque seguimos estando por debajo de Honduras o El Salvador en violencia letal, la percepción de inseguridad crece más rápido que las estadísticas mismas. Es como si el miedo nos estuviera ganando la partida incluso antes que el crimen organizado.

Un dato revelador del Informe Estado de la Nación 2023 es que el 49% de las personas que se sienten inseguras nunca denunciaron los delitos sufridos. Las razones son conocidas: desconfianza en el sistema, falta de tiempo, miedo a represalias. Eso significa que, en la práctica, la estadística oficial de criminalidad refleja solo la punta del iceberg, mientras que la vida cotidiana está marcada por una inseguridad mucho más extendida. Aquí aparece un círculo vicioso: la gente no denuncia porque no confía en las instituciones, y las instituciones no pueden mejorar porque carecen de información precisa.

En los barrios, esa sensación se traduce en lo que los sociólogos llaman “microclimas de miedo”. Basta con entrar a comunidades como Pavas, Desamparados o Limón centro para escuchar historias repetidas: el búnker que abre a plena luz del día, el tiroteo que obliga a las familias a tirarse al suelo, los negocios que cierran más temprano para no exponerse. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha documentado que cuando la percepción de inseguridad alcanza niveles

altos, las comunidades tienden a fragmentarse, se pierde el sentido de confianza entre vecinos y la cohesión social se debilita. Y en Costa Rica, un país que durante décadas se enorgulleció de sus redes comunitarias, eso representa un golpe profundo.

No se trata solo de que la gente tenga miedo a la violencia. Se trata de que el miedo condiciona decisiones clave: si una madre prefiere que su hijo no estudie en un colegio nocturno para evitar que lo asalten, ese miedo está afectando la educación. Si una pequeña empresa deja de abrir en horarios nocturnos por temor a un atraco, ese miedo está impactando la economía. Y si un grupo de jóvenes decide no usar los parques por temor a las pandillas, ese miedo está modificando el uso de los espacios públicos y, con ello, la vida comunitaria.

En este contexto, lo que revela la encuesta no es simplemente una percepción distorsionada, sino un diagnóstico social: estamos transitando de la percepción al miedo, y del miedo a cambios concretos en la forma de vivir. Y aquí aparece un punto delicado: el miedo es terreno fértil para el populismo punitivo. Ya lo vimos en la región: en El Salvador, Nayib Bukele ha capitalizado el miedo ciudadano para legitimar políticas represivas, con cárceles masivas y suspensión de derechos. Y aunque mucha gente aplaude, porque el miedo cede ante la fuerza bruta, lo cierto es que ese modelo erosiona a largo plazo las bases democráticas.

Yo no quiero ver a Costa Rica caer en esa trampa. Prefiero pensar en la advertencia que me hizo Verny Montoya en su entrevista:

“El Estado tiene que cambiar la narrativa, dejar de amplificar la violencia y construir un discurso de paz”.

Porque si seguimos alimentando el miedo como capital político, lo único que lograremos es perpetuar el ciclo de violencia y desconfianza.

La Encuesta Nacional de Seguridad nos está gritando que el país cambió, que la gente ya no se siente tranquila en la esquina de la pulpería, en el bus o en el parque. Y eso, más que un dato, es un llamado a revisar cómo estamos construyendo nuestras políticas públicas, cómo estamos educando, cómo estamos comunicando desde los liderazgos. No se trata de negar la realidad del crimen, sino de entender que la inseguridad cotidiana no solo se mide en homicidios o robos, sino en la capacidad de un país para vivir sin miedo.

Al final del día, cuando pienso en aquella conversación con el taxista en San José, me doy cuenta de que lo que él me estaba diciendo era mucho más que una queja personal. Era, en realidad, la voz de miles de costarricenses que sienten que han perdido un derecho fundamental: el de caminar tranquilos en su propio país. Y recuperar ese derecho será uno de los mayores retos de nuestra generación.

BARRIOS MARCADOS POR EL NARCO Y LA VIOLENCIA

Una tarde, en medio de un recorrido por Limón, me encontré frente a una realidad que muchos conocen, pero pocos quieren mirar de frente.

Caminaba por un barrio cercano al centro, acompañado por un líder comunal que lleva años trabajando con jóvenes en riesgo. Al llegar a la esquina de una calle polvorienta, me señaló con la cabeza una casa sin pintar, con las ventanas cubiertas por cortinas negras. *“Ese es un búnker, don Jorge. Aquí cualquiera puede comprar piedra, coca o marihuana. Funciona veinticuatro horas al día. Nadie lo cierra. Y todos lo saben”.*

Esa imagen me quedó grabada, porque simboliza el punto de quiebre en el que se encuentran muchos barrios costarricenses. Cuando un búnker opera a plena luz del día, con la anuencia o resignación de la comunidad, significa que el narcotráfico no sólo penetró el territorio, sino que también comenzó a dictar las reglas de convivencia. Ya no es la escuela, la iglesia o la pulpería el centro de referencia del barrio, sino la economía ilícita que impone sus códigos.

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Desarrollo Humano 2023 advierte que el narcotráfico en América Latina se ha convertido en el principal motor de economías ilegales que cooptan comunidades enteras, generando un círculo de dependencia económica y social. En Costa Rica, esa advertencia ya dejó de ser teórica. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó que, solo en 2023, se dismantelaron 170 búnkeres en diferentes provincias, la mayoría en San José, Limón y Puntarenas. Sin embargo, los mismos informes reconocen que por cada búnker cerrado, otros dos o tres vuelven a operar en semanas, bajo la lógica del “efecto cucaracha”: se cierra un punto, pero la red se re-acomoda y sigue funcionando.

Tania Molina, Criminóloga dijo:

“El narcomenudeo es la gasolina de la violencia: la pelea por búnkers y pandillas criollas recluta a más de 4.000 jóvenes.”

El impacto más duro no son solo los números de decomisos, sino la vida cotidiana que se transforma. En barrios como La Carpio, Los Cuadros o León XIII, conversar con las familias revela una misma historia: niños que crecen viendo armas como si fueran juguetes, adolescentes reclutados para hacer “mandados” a cambio de 20 o 30 mil colones, madres que deben escoger entre denunciar y arriesgarse a represalias o guardar silencio y convivir con el miedo. El Estado de la Nación 2022 documentó que, en comunidades donde operan estructuras de narcomenudeo, la tasa de deserción escolar puede llegar hasta un 35%, casi el doble de la media nacional. La ecuación es sencilla: un joven que deja el colegio encuentra en la economía del narco una opción inmediata de ingreso, aunque sea a costa de su libertad o su vida.

Recuerdo una entrevista con Verny Montoya, donde él me decía con crudeza:

“Nuestras juventudes se están convirtiendo en el mercado cautivo del crimen organizado. Ahí están los consumidores, los distribuidores, los sicarios y, lamentablemente, las víctimas”.

Esa frase es devastadora, porque desnuda el verdadero drama: el narcotráfico no solo vende drogas, vende una identidad, un sentido de pertenencia, un modelo aspiracional que seduce a los jóvenes más desprotegidos. Y en barrios con poco acceso a empleo formal, con escuelas en deterioro y con familias fragmentadas, esa oferta se convierte en la única que parece tener futuro.

El Banco Mundial, en un informe sobre seguridad en Centroamérica (2021), destacó que los costos económicos de la violencia alcanzan hasta un 3% del PIB en algunos países de la región, incluyendo Costa Rica. Pero más allá de la macroeconomía, los costos humanos son imposibles de medir. Cada sicariato registrado en la prensa –y fueron más de 330 homicidios ligados al crimen organizado en 2023, según el OIJ– deja detrás familias quebradas, comunidades en duelo y una sociedad que se habitúa a la normalización de la muerte violenta.

En el 2022, Costa Rica alcanzó la cifra histórica de 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta desde que se tienen registros modernos. Y lo más alarmante: cerca del 65% de esos homicidios estuvieron directamente vinculados con ajustes de cuentas por narcotráfico. Esto significa que los barrios más golpeados ya no son escenarios de violencia ocasional, sino campos de batalla por el control del menudeo. Limón, Puntarenas y la zona sur se han convertido en corredores estratégicos para las rutas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, lo que multiplica la disputa territorial entre bandas locales y transnacionales.

Hace poco, conversando con un grupo de jóvenes en Desamparados, uno de ellos me dijo algo que me persigue: *“Aquí lo normal es escuchar*

balaceras de noche, don Jorge. Si no se oyen, más bien uno se preocupa". Esa naturalización de la violencia es quizá la mayor derrota que puede tener un país que, durante décadas, se enorgulleció de ser un oasis de paz en Centroamérica.

Y sin embargo, lo que más escuchamos en el discurso político es la receta fácil: más cárcel, más policías, más represión.

El Estado de la Justicia 2022 fue claro al señalar que la mora judicial en casos de delincuencia organizada supera los tres años en promedio, lo cual significa que muchas veces la sanción llega tarde o nunca. Mientras tanto, los barrios siguen sitiados, las familias siguen atrapadas entre el miedo y la resignación, y los niños crecen en un ambiente donde el narco es tan visible como la escuela, pero mucho más atractivo.

Si uno compara la situación con lo que ocurre en otros países, la advertencia es clara. En México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública documentó cómo los cárteles empezaron controlando barrios marginales y terminaron cooptando instituciones locales enteras. En Honduras y El Salvador, las maras comenzaron como pandillas juveniles en comunidades pobres y evolucionaron en ejércitos armados que desafían al Estado. Costa Rica todavía tiene margen de maniobra, pero la ruta está trazada: si no actuamos de manera integral, nuestros barrios más vulnerables se convertirán en territorios perdidos.

Lo más doloroso es que muchos costarricenses ya sienten que eso pasó. Cuando entrevisté a líderes comunales en Pavas, me dijeron que en algunas zonas *"la policía entra solo acompañada y en operativos grandes, porque de otra forma no se atreven"*. Esa percepción de ausencia estatal alimenta la idea de que quien manda en el barrio no es el gobierno, sino el narco. Y cuando el ciudadano común internaliza esa lógica, se rompe la confianza en la democracia misma.

El problema no es solo policial o judicial, aunque ambos sistemas estén colapsados. Es estructural. Lo dijo Rodolfo Brenes en su análisis: *"Si queremos combatir el narcomenudeo, no basta con meter a los muchachos a la cárcel. Hay que romper el ciclo de la drogadicción, darles oportunidades de empleo, re-integrarlos a la educación"*.

Por eso, hablar de barrios marcados por el narco y la violencia no es solo hablar de delincuencia. Es hablar del futuro de Costa Rica. Cada niño que deja la escuela para hacer mandados de droga, cada familia que normaliza escuchar balaceras, cada comerciante que paga “vacuna” para que lo dejen trabajar, representa una derrota para el modelo de convivencia que tanto nos costó construir.

Mientras escribo estas líneas, recuerdo aquella casa de cortinas negras en Limón. El líder comunal me decía con un dejo de impotencia: *“Ese búnker lo cierran hoy y mañana abre otro a tres cuadras. Pero si lográramos que los muchachos tuvieran un equipo de fútbol, una beca, un trabajo, tal vez ese ciclo se rompe”*. Su voz mezclaba esperanza y cansancio, como si supiera que la batalla es desigual, pero aún así se resiste a rendirse. Esa es, al final, la lucha que tenemos que dar como sociedad: recuperar nuestros barrios, no solo con patrullas y cárceles, sino con oportunidades reales que le quiten terreno al narco.

LA VIDA DIARIA ENTRE GALLOS, BIRRAS Y LA DESCONFIANZA HACIA LAS INSTITUCIONES

Una tarde de domingo, sentado en un parque de barrio en Desamparados, vi a un grupo de muchachos compartiendo unos gallos de chicharrón y unas cervezas bien frías, entre risas y bromas. Parecía una escena común, de esas que siempre han definido nuestra

cultura popular: la tortilla, el fresco de cas, la conversación sin prisa. Pero de repente, uno de ellos señaló hacia la esquina y dijo en voz baja: *“Mae, ahí anda la patrulla. Mejor escondamos lo que llevamos”*. No hablaban de drogas ni de armas, solo de un par de birras, pero la reacción fue automática, casi instintiva: la policía es percibida no como aliada, sino como amenaza.

Esa anécdota resume un sentir extendido: en la vida cotidiana del tico, entre gallos y birras, la desconfianza hacia las instituciones se ha colado como un ingrediente más. Ya no se trata solo del miedo a la delincuencia, sino de una erosión lenta de la confianza en quienes deberían garantizar seguridad y justicia. La Encuesta Nacional de Seguridad 2022, realizada por el INEC y el Ministerio de Seguridad Pública, reveló que el 70% de los

costarricenses cree que la inseguridad ha aumentado en los últimos cinco años y que más de la mitad no confía en que la policía pueda resolver un delito. Peor aún: un 58% considera que denunciar un crimen “no sirve para nada”, porque el sistema judicial es lento, ineficaz o corrupto.

Ese desencanto no es menor. Según el Latinobarómetro 2023, Costa Rica pasó de ser uno de los países con mayor confianza en sus instituciones a estar por debajo de la media regional en apenas una década. En 2010, más del 60% de los costarricenses decía confiar en el Poder Judicial; hoy, ese porcentaje apenas ronda el 32%. Y cuando la confianza en la justicia se desploma, la gente busca sus propias formas de protección: rejas más altas, cámaras de seguridad, barrios cerrados, o peor aún, la aceptación silenciosa de la ley del más fuerte.

Durante una visita a un barrio en Alajuelita, una vecina me dijo algo que me golpeó fuerte: *“Don Jorge, aquí nosotros no denunciemos porque sabemos que el que roba está de vuelta en la calle a los dos días. Y si se entera que fuimos nosotros los que hablamos, nos manda a callar para siempre”*. Esa lógica perversa convierte al silencio en la primera línea de defensa ciudadana, debilitando aún más al Estado y fortaleciendo al crimen.

El Estado de la Justicia 2022 es contundente en este punto: la mora judicial en casos penales alcanza en promedio los 36 meses, y en algunos delitos relacionados con crimen organizado puede extenderse hasta cinco años. Es decir, una víctima que denuncia puede pasar media década esperando una resolución. Mientras tanto, el delincuente sigue operando. Esa distancia entre el tiempo de la víctima y el tiempo de la justicia explica por qué tanta gente decide no acudir al sistema.

Y la vida cotidiana refleja esa realidad. Cuando uno conversa con taxistas, pulperos o trabajadores de construcción, se repite la misma queja: *“Aquí nadie nos cuida, mae, tenemos que cuidarnos solos”*. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha advertido en múltiples informes que la desconfianza institucional es uno de los factores que más alimenta la violencia en América Latina. En países donde la gente

no confía en denunciar, el crimen se invisibiliza y, al mismo tiempo, se reproduce sin control. Costa Rica, que durante décadas se ufano de ser diferente, ya está recorriendo ese camino.

Hay un detalle interesante que me marcó en una entrevista con Virginia Calzada, ex presidenta de la Sala Constitucional. Ella me dijo: *“Mucha gente critica que los jueces suelten a detenidos, pero pocas veces entienden que el problema comienza desde el arresto mismo, cuando la policía no recaba pruebas bien o se violan garantías constitucionales. Eso obliga al juez a liberar”*.

Esa explicación revela otra grieta: no es solo falta de confianza, sino desconocimiento ciudadano. El pueblo percibe que hay impunidad, pero pocas veces comprende que muchas fallas ocurren en la cadena de investigación, no únicamente en el juzgado. Sin embargo, la consecuencia es la misma: más desconfianza, más frustración, más distancia entre la gente y las instituciones.

En paralelo, la vida cultural del barrio se resiente. Los gallos compartidos, que siempre han sido símbolo de unión, ahora se consumen con la vista puesta en la esquina por si aparece una moto sospechosa. Las birras de un domingo ya no saben igual si uno tiene que estar calculando la hora de meterse a la casa antes de que oscurezca. El Informe Estado de la Nación 2022 lo expresó con claridad: la inseguridad no solo se mide en cifras de homicidios, sino en la pérdida de calidad de vida y en la alteración de las rutinas más simples de los ciudadanos.

Recuerdo otro momento, en Limón, cuando un grupo de jóvenes me contó que ya no jugaban fútbol en la cancha del barrio porque *“esa hora la mandan los de la banda”*. Entonces optaban por reunirse en la casa de un compañero, con las ventanas cerradas, para comer y tomar algo. Ese encierro voluntario es la metáfora perfecta de cómo la violencia y la desconfianza cercan la vida comunitaria. Lo que antes era espacio público ahora es territorio privatizado por el miedo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe sobre crimen en América Latina (2021), advierte que la inseguridad tiene

un costo emocional que pocas veces se mide: ansiedad, depresión, rupturas comunitarias, pérdida de cohesión social. Y en Costa Rica ya lo estamos viviendo. El Colegio de Psicólogos reportó en 2023 que los casos relacionados con ansiedad por inseguridad crecieron en un 28% en comparación con cinco años atrás. La violencia dejó de ser un problema externo para convertirse en una sombra que acompaña cada decisión personal: desde qué ruta tomar para volver a casa hasta si conviene o no denunciar un robo.

Ese es, al final, el retrato de la vida diaria entre gallos y birras. Un país que se acostumbró a conversar en parques, en sodas, en canchas, ahora lo hace entre susurros, con la sospecha de que cualquier extraño puede ser un bicho raro vinculado al narco o un soplón. Un país donde la tortilla sigue siendo redonda, pero la mesa donde se comparte se achica cada vez más por la inseguridad. Sin embargo, no todo está perdido. En algunos barrios, he visto cómo la comunidad misma intenta recuperar la confianza a través de pequeños gestos: redes de WhatsApp vecinales, comités de seguridad, ferias comunales que invitan a compartir de nuevo en espacios públicos. Son intentos modestos, sí, pero valiosos, porque recuerdan que la confianza no se construye sólo desde arriba, en oficinas judiciales o ministeriales, sino también desde abajo, en la cotidianeidad del gallo y la birra.


El reto para Costa Rica es enorme: recuperar la confianza en las instituciones mientras se devuelve la seguridad a la vida cotidiana. Y eso no se logra con discursos populistas ni con promesas de cárceles más grandes. Se logra con un sistema judicial ágil, con policías bien formados y con comunidades fortalecidas. Porque al final, un país que no puede comer un gallo tranquilo en la acera de su casa sin miedo, es un país que está perdiendo su alma.



Capítulo 3

Un Enemigo sin Fronteras

**La transformación del narco
en Costa Rica, de bodega
a centro de operaciones.**



‘Hoy en día el crimen organizado es de carácter internacional, excede la jurisdicción nacional, son organizaciones muy flexibles con mucho financiamiento y con capacidad de reclutar talento en todas las áreas profesionales. No podemos seguir en una postura reactiva.’

Robert Bacon, Analista de Inteligencia Criminal

Recuerdo cuando era carajillo, en los años setenta, que mi tata me decía orgulloso: “Jorge, aquí lo más bravo que pasa es que se roben una gallina en el barrio”. Y en gran medida tenía razón. Costa Rica se veía a sí misma como una isla de paz en medio de una Centroamérica que hervía en guerras civiles y dictaduras militares. Éramos “la Suiza de Centroamérica”, con una policía sin armas largas y con un ejército abolido que era la envidia del vecindario.

Pero lo que no sabíamos era que ese país apacible, con sus montañas verdes y sus puertos estratégicos, estaba destinado a convertirse en pieza clave del ajedrez del narcotráfico internacional. En los años ochenta, mientras Colombia ardía con los carteles de Medellín y Cali, y México se consolidaba como un corredor fundamental para la cocaína rumbo a Estados Unidos, Costa Rica aparecía apenas como una “bodega”: un lugar de paso, de almacenamiento temporal. Aquí llegaban cargamentos desde Suramérica que se guardaban unos días en fincas aisladas, en contenedores o hasta en bodegas bananeras, para luego salir en lanchas rápidas hacia el norte.

Esa función de bodega parecía menor, pero sembró las semillas de lo que hoy vivimos. El Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de Naciones Unidas señala que la ruta del Pacífico oriental, que bordea desde Ecuador hasta México, se ha convertido en la principal autopista de la cocaína en el mundo. Y adivinen cuál es el punto intermedio perfecto en esa ruta: los más de 1.200 kilómetros de costa que tiene Costa Rica, con puertos como Caldera y Limón que mueven miles de contenedores diarios y que son imposibles de revisar todos.

En el 2000, se hablaba de Costa Rica como “país de tránsito”. Hoy, según datos del Observatorio Costarricense sobre Drogas (2023), ya no somos solo tránsito: se estima que al menos el 8% de la cocaína que pasa por nuestro territorio se queda aquí para consumo interno o reventa local. Eso explica por qué, junto a los contenedores incautados, han crecido los “búncers” en barrios como Pavas, Desamparados o Limón. Los mismos informes del Ministerio de Seguridad Pública registraron en 2022 más de 300 búnkers identificados, muchos de ellos a pocos metros de escuelas y colegios.

Lo que empezó como bodegas aisladas se transformó en verdaderos centros de operaciones. Hoy las organizaciones criminales no solo guardan droga, sino que lavan dinero, compran terrenos, controlan rutas logísticas y hasta financian negocios aparentemente legales. Un informe del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reveló que en 2021 se movieron más de 500 millones de dólares en operaciones sospechosas vinculadas a blanqueo de capitales.

Y lo más grave: buena parte de ese dinero entra en el sistema bancario formal o se invierte en bienes raíces, inflando mercados y distorsionando la economía.

Lo vi claro en una visita a Guanacaste. Allí, un empresario local me confesó que le habían ofrecido comprarle su hotelito de

“Ya no estamos hablando de drogas y la gente que está en las calles, estamos hablando ahora de empresarios, bancarios, dueños de empresas... incluso pastores o alcaldes. El dinero ilícito necesita ocho sectores de valor estratégico para operar: comercio, sector financiero, logística, sector público, policía, militares, políticos y más. Si no seguimos la plata, nunca vamos a ver la verdadera estructura.” dice Robert Bacon, Analista de Inteligencia Criminal

playa en efectivo, con maletas llenas de dólares. *“Don Jorge, me dieron el doble de lo que vale. ¿Cómo dice uno que no?”*, me preguntó. Ese es el dilema silencioso que muchos viven: la plata del narco se mete en la economía como agua que se filtra en la tierra, y no hay muro que la detenga si el Estado no está preparado.

Y aquí hay un punto clave: mientras en México y Colombia el narco se asocia con carteles gigantescos y visibles, en Costa Rica el modelo es más atomizado, más flexible. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo llama “franquicia criminal”: pequeños grupos locales que trabajan como satélites para organizaciones más grandes. No son carteles tradicionales, pero cumplen funciones específicas: almacenar, distribuir, cobrar, intimidar. El resultado es que la violencia se vuelve más caótica, menos centralizada, y más difícil de combatir.

El 2022 cerró con 656 homicidios en Costa Rica, la cifra más alta en nuestra historia, y el 65% de esos asesinatos estuvieron ligados a disputas entre bandas del narcotráfico según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Lo más alarmante es la forma: sicariato, ajustes de cuentas, ejecuciones a plena luz del día. Escenas que antes asociábamos con Tegucigalpa o San Pedro Sula, ahora ocurren en San José o en San Carlos.

Un policía veterano, con más de 20 años en el servicio, me lo dijo sin rodeos: *“Antes peleábamos contra ladrones de carros, hoy peleamos contra ejércitos de muchachos con AK-47 financiados por narcos que ni sabemos dónde están”*. Y es cierto: el narco en Costa Rica dejó de ser un invitado incómodo para convertirse en anfitrión en varias regiones. Controla territorios, recluta jóvenes, impone reglas.

‘El crimen organizado de hoy es transnacional, digital y franquiciado: Costa Rica no estaba preparada para esa mutación.’

Tania Molina, Criminóloga

El Banco Mundial, en un informe sobre seguridad en Centroamérica, advierte que los países que no enfrentan a tiempo la consolidación de grupos criminales terminan pagando un precio altísimo en cohesión social y gobernabilidad. Y ese es el riesgo que enfrentamos: que Costa Rica deje de ser una democracia estable para convertirse en un territorio disputado por mafias transnacionales.

Pero quizás lo más doloroso es ver cómo el narco se ha normalizado en la vida cotidiana. En Limón, un chiquillo de apenas 13 años me dijo con naturalidad: *“Yo quiero ser gatillero, don Jorge, porque ahí se gana bien y uno no tiene que estudiar tanto”*. Ese sueño torcido, que compite con la ilusión de ser futbolista o ingeniero, refleja hasta qué punto el crimen organizado se metió en nuestra cultura juvenil.

Así, en pocas décadas, pasamos de ser un país que servía como simple bodega de paso a un verdadero centro de operaciones del narcotráfico. Y lo peor es que esta transformación ocurrió mientras mirábamos para otro lado, entretenidos en discusiones políticas estériles y confiados en que “eso aquí nunca pasaría”.

Hoy sabemos que pasó. Que Costa Rica ya no es inmune. Que el enemigo dejó de estar al otro lado de la frontera y ahora vive en nuestras calles, financia negocios en nuestras ciudades y recluta a nuestros niños en los barrios.

El desafío que tenemos por delante no es menor: o recuperamos el control de nuestro territorio y de nuestras instituciones, o el país terminará convertido en un tablero más de una guerra que no tiene fronteras.

A veces me pregunto, ¿cuándo fue que dejamos de ver al narco como una amenaza lejana y empezamos a sentirlo como parte del vecindario?

Creo que la respuesta está en cómo el dinero ilícito se fue metiendo poco a poco en nuestras comunidades, como la humedad que empieza con una manchita en la pared y de pronto termina carcomiendo toda la casa. Lo más preocupante es que la plata

EL PODER DEL DINERO ILÍCITO Y SU INFILTRACIÓN EN COMUNIDADES

del narco no llega con pistolas en la mano, sino con sonrisas, regalos y favores. Y eso, muchas veces, resulta más peligroso que las balaceras.

Recuerdo un viaje a Limón en 2019, cuando conversé con un líder comunal que me dijo: *“Don Jorge, aquí cuando la municipalidad tarda meses en arreglar un parque, aparece un ‘bienhechor’ que pone los columpios nuevos. Y todo el mundo sabe de dónde salió la plata, pero nadie pregunta”*. Esa anécdota resume bien cómo opera la infiltración: el narco suple las carencias del Estado, gana simpatías y poco a poco compra lealtades.

No hablo de casos aislados. El Programa Estado de la Nación (2023) señala que en varios cantones costeros, la inversión estatal por habitante ha disminuido en los últimos diez años, mientras que los indicadores de pobreza y desempleo se mantienen altos. Ese vacío ha sido ocupado por estructuras criminales que ofrecen empleo, financian fiestas patronales, pagan útiles escolares o hasta subsidian equipos de fútbol barrial. Es lo que algunos académicos llaman “narco-filantropía”.

“Si no se aborda ya, Costa Rica quedará a 18 o 24 meses de convertirse en un Ecuador dominado por carteles.”

Rogelio Pardo,
ex Secretario de Defensa de EEUU

El Observatorio Costarricense sobre Drogas (OCD) estima que solo en 2022 se movieron más de 1.200 millones de dólares en ganancias ligadas al narcotráfico en el país. No toda esa plata se envía fuera: una parte significativa se queda circulando en nuestras comunidades. ¿Cómo lo notamos? En barrios donde la mayoría sobrevive con salarios mínimos, de repente aparecen casas lujosas, carros último modelo y negocios que florecen sin una lógica aparente.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que en América Latina el lavado de dinero puede representar hasta el 3% del PIB de un país. En el caso de Costa Rica, si aplicamos esa estimación, estamos hablando de casi \$2.000 millones anuales en capital ilícito que se cuela en la economía formal e informal. Eso no solo distorsiona el mercado inmobiliario —donde casas y terrenos se compran al contado—, sino que también introduce una lógica perversa en las comunidades: la de que el éxito se mide por lo rápido que se obtiene la plata, no por el esfuerzo honesto.

En una entrevista que hice para este libro, un joven de Pavas me confesó: *“Don Jorge, yo trabajaba en construcción, 8 horas al sol por 350 mil al mes. Un mae del barrio me ofreció 200 mil solo por llevar un paquete en moto de un lado a otro. Dígame usted, ¿qué hago?”*. Esa es la trampa: cuando el narco se convierte en la opción más rentable y accesible, la moral queda en segundo plano.

Y lo más grave es cómo ese dinero empieza a permear estructuras legítimas. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó en 2021 más de 500 casos de operaciones sospechosas detectadas en bancos, cooperativas y financieras. La plata ilícita busca legitimarse a través de empresas pantalla, negocios familiares o actividades aparentemente inofensivas como bares, pulperías o talleres mecánicos. El resultado es que, sin darnos cuenta, terminamos tomando un fresco en una soda financiada con dinero del narco o comprando repuestos en un taller que sirve para lavar capitales.

En Guanacaste, un empresario turístico me dijo en confianza que varias propiedades frente al mar habían sido compradas al contado por supuestos inversionistas extranjeros. Con el tiempo se supo que algunos de esos compradores estaban ligados a redes de tráfico internacional. Así, el dinero ilícito no solo afecta comunidades pobres, sino que también penetra mercados de alto nivel, inflando precios y creando burbujas.

El Informe Estado de la Justicia 2022 advierte que la infiltración económica del crimen organizado debilita la confianza en las instituciones, porque

genera la percepción de que “todos están comprados”. Esa percepción, aunque no siempre sea cierta, alimenta un clima de desconfianza que erosiona la cohesión social. Cuando un vecino ve que otro progresa de la noche a la mañana, sin una explicación clara, surgen sospechas y resentimientos. Y cuando la policía o los jueces no logran explicar por qué ciertos casos nunca prosperan, la gente asume que hubo plata de por medio.

Una encuesta de CID-Gallup en 2022 mostró que el 63% de los costarricenses cree que la corrupción está relacionada con el narcotráfico, y un 56% opina que las instituciones públicas han sido infiltradas por el crimen organizado. Aunque esas percepciones no siempre tienen pruebas concretas, son un reflejo de la desconfianza que genera ver al dinero ilícito actuar con tanta libertad.

Y aquí está lo más doloroso: muchas comunidades, al sentir el abandono del Estado, terminan aceptando la ayuda del narco como una tabla de salvación. Es cierto, esa plata compra uniformes de fútbol, pinta escuelas o repara calles. Pero detrás de cada donación hay una factura implícita: lealtad, silencio y complicidad. Poco a poco, se construye un sistema paralelo de poder, donde las reglas ya no las dicta el municipio o el Ministerio, sino el grupo criminal que financia el barrio.

Un ejemplo claro lo escuché en un barrio de San Carlos. Una señora me dijo: *“Aquí no se roba entre vecinos porque el jefe del grupo no lo permite. Si alguien roba, lo castigan ellos mismos. Y en cierto modo, eso nos da seguridad”*. Este testimonio refleja la paradoja: en lugares donde el Estado no logra garantizar orden, el narco se convierte en juez, policía y benefactor.

La infiltración no solo se da en lo económico. También toca lo cultural y lo simbólico. En barrios donde los jóvenes crecen viendo que los “narquitos” son los que financian fiestas, regalan birras en las canchas o pagan conciertos, el narco se convierte en referente de éxito y de prestigio. Ya no es solo un negocio clandestino: es un estilo de vida que se celebra en la música, en las redes sociales y en la moda. Como decía un sociólogo de la UCR, *“el narco dejó de ser invisible para convertirse en aspiracional”*.

El Banco Mundial lo advierte: cuando los grupos criminales asumen funciones sociales y de control, se consolida lo que llaman “captura comunitaria”. Y revertir esa captura es extremadamente difícil, porque ya no se trata sólo de reprimir delincuentes, sino de desmontar estructuras de legitimidad construidas con base en favores y dinero.

Costa Rica está en esa encrucijada. La plata ilícita está aquí, circulando en nuestras comunidades, comprando silencios, influyendo en mercados y moldeando culturas. Y lo más grave es que, mientras sigamos sin cerrar las brechas de pobreza y sin garantizar oportunidades reales, el narco seguirá encontrando terreno fértil para sembrar sus billetes y cosechar lealtades.

Porque al final, lo que el narco vende no es solo droga. Vende soluciones inmediatas a necesidades reales. Y mientras el Estado llegue tarde, sucio de burocracia y de promesas incumplidas, la gente seguirá aceptando la mano tendida, aunque sepan que viene manchada de sangre.

ENTRE LA REPRESIÓN Y LA PREVENCIÓN: ¿QUÉ MODELO NECESITAMOS?

Una de las preguntas que más me hacen en las charlas y entrevistas es la misma que me hago yo cada noche: ¿qué modelo necesitamos para enfrentar este monstruo del

crimen organizado? ¿Seguimos apostando a la represión, con más policías, cárceles y operativos espectaculares, o nos arriesgamos a construir una estrategia preventiva que invierta en educación, oportunidades y cohesión social? El dilema no es sencillo, porque la gente quiere resultados inmediatos. Y cuando la violencia estalla en las calles, lo primero que se pide es mano dura. Pero la historia, tanto la nuestra como la de otros países, nos demuestra que esa receta tiene efectos limitados y, muchas veces, contraproducentes.

Recuerdo la entrevista que le hice a Rodolfo Brenes, profesor de derecho procesal penal. Él me decía con absoluta claridad:

“Aumentar las penas y meter más gente a la cárcel no soluciona nada. Lo que necesitamos es un sistema que sancione de forma eficaz y pedagógica, que le enseñe al joven infractor que hay otra manera de vivir”.

El modelo represivo, el de “más cárcel y más patrullas”, ha sido probado una y otra vez en América Latina. Basta ver El Salvador con su “mega cárcel para 40.000 reos”

o México con la militarización de la seguridad pública. Sí, en el corto plazo generan la percepción de orden. Pero en el largo plazo, la violencia se recicla, los carteles se adaptan y la sociedad termina pagando un precio altísimo en derechos humanos.

¿Queremos parecernos a eso? Yo, como costarricense, no.

Costa Rica, a pesar de sus problemas, todavía tiene margen para pensar distinto. Nuestra tasa de homicidios en 2023 fue de 17,2 por cada 100 mil habitantes, según datos del OIJ. Alta, preocupante, pero aún lejos de Honduras con más de 35 por cada 100 mil, o de México con casi 30. La tentación de copiar modelos de mano dura está ahí, sobre todo porque en un año electoral se vende decir “vamos a acabar con los narcos”. Pero si algo nos enseñó la abolición del ejército en 1948 es que este país puede

Y lo cierto es que hoy nuestro sistema no cumple ni con la prevención ni con la sanción efectiva. Según el Informe Estado de la Justicia 2022, la mora judicial en procesos penales supera el 60% de los casos, y la reincidencia carcelaria ronda el 47%. En otras palabras, casi la mitad de los que entran a la cárcel vuelven a delinquir.

“La inteligencia es crucial porque no se trata de arrestar al muchacho pobre con un arma en la calle; se trata de investigar las estructuras que facilitan la comercialización. Si no cambiamos el chip, vamos a seguir persiguiendo eslabones débiles y nunca debilitamos al verdadero poder criminal.”
Agrega Robert Bacon, Analista de Inteligencia Criminal.

escoger rutas distintas, más humanas y más efectivas a largo plazo.

El problema es que hablar de prevención suena a discurso vacío para mucha gente. “¿De qué me sirve que me prometan más educación si me están asaltando hoy en la parada de bus?”, me dijo una señora en Desamparados. Y tiene razón. La prevención es una inversión de largo plazo que no resuelve el miedo inmediato. Pero ahí es donde el liderazgo político debe ser valiente, para combinar respuestas rápidas y visibles con estrategias estructurales que ataquen las causas de la criminalidad.

Un ejemplo inspirador lo encontramos en Medellín, Colombia. Durante los años noventa, fue una de las ciudades más violentas del mundo, con tasas de homicidios que superaron los 300 por cada 100 mil habitantes. Hoy esa cifra se ha reducido drásticamente gracias a una combinación de represión inteligente —con investigación policial sofisticada y cooperación internacional— y programas sociales de gran escala. Se construyeron bibliotecas, parques, centros culturales y sistemas de transporte que conectan a los barrios más pobres con el centro. La inversión en cultura y educación fue tan importante como la acción policial. Medellín entendió que no se podía ganar la guerra solo con balas.

En Costa Rica tenemos ejemplos pequeños, pero valiosos. El programa Sembremos Seguridad, del Ministerio de Seguridad Pública, logró reducir en un 20% los delitos contra la propiedad en comunidades donde se aplicó, según datos de 2021. La clave fue el enfoque preventivo: involucrar a la comunidad, coordinar con escuelas, iglesias, municipalidades y empresas locales. No era solo patrullar, era tejer redes de confianza. Lo mismo pasa con proyectos de ONGs como Boy With a Ball o las escuelas deportivas apoyadas por el ICODER, que han demostrado que un balón puede ser más poderoso que un arma a la hora de alejar a los jóvenes del crimen. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo marginales. El presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública en 2023 fue de unos \$540 mil millones, mientras que el de programas preventivos comunitarios no alcanzó ni el 5% de esa cifra. Estamos gastando la mayor parte de los recursos en apagar incendios y muy poco en evitar que empiecen. El Banco Mundial lo ha dicho claro: cada dólar invertido en prevención social puede ahorrar

hasta 7 dólares en costos futuros de represión y encarcelamiento. Pero seguimos eligiendo lo más fácil políticamente: prometer más policías, más carros, más cámaras.

La prevención también tiene que ir acompañada de un sistema judicial ágil y confiable. Hoy tenemos un cuello de botella monumental. Según el Informe Estado de la Justicia 2025, un caso penal puede tardar en promedio tres años y medio en resolverse. Eso significa que un joven detenido por un “cadenazo” puede pasar años entrando y saliendo sin una sanción clara ni una alternativa real de reinserción. ¿Qué aprende? Que delinquir no tiene consecuencias inmediatas. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que termine atrapado en redes criminales más grandes.

No se trata de escoger entre represión o prevención, sino de diseñar un modelo equilibrado. Necesitamos represión inteligente, enfocada en las cabezas del crimen organizado, no en llenar cárceles de jóvenes pobres que se pueden rehabilitar. Y necesitamos prevención robusta, con educación de calidad, oportunidades de empleo y políticas sociales que devuelvan esperanza. Como me decía Verny Montoya, sociólogo y profesor universitario:

Y tiene razón, la prevención no sale en titulares, pero salva generaciones enteras.

Yo estoy convencido de que Costa Rica no debe renunciar a su vocación de país civilista y democrático. No podemos permitir que el miedo nos lleve a entregar

libertades a cambio de una falsa sensación de seguridad. La represión sin prevención es como tapar un hueco en el techo mientras la lluvia sigue cayendo: tarde o temprano, la casa se inunda. Lo que necesitamos es reparar la estructura completa, aunque tome más tiempo, aunque no dé votos inmediatos.

“El problema no es que al Estado no le alcance, es que no le da la gana. Prefiere el espectáculo represivo porque da créditos políticos”.

Este libro busca justamente abrir esa conversación. ¿Qué modelo queremos? ¿El de las cárceles repletas y las comunidades militarizadas, o el de la inversión en educación, cultura y cohesión social? La respuesta, al final, no está en los discursos políticos ni en los titulares de prensa. Está en cada decisión que tomamos como sociedad: en si exigimos soluciones fáciles y rápidas, o si nos atrevemos a pedir cambios profundos, aunque tarden en dar frutos.


Costa Rica está frente a un espejo incómodo. Podemos ver reflejado el camino de países vecinos que apostaron todo a la represión y hoy siguen atrapados en un ciclo de violencia. O podemos elegir una ruta distinta, más difícil, pero más fiel a nuestra historia: la ruta de la prevención, la justicia efectiva y la esperanza compartida.



Capítulo 4

El Rostro Olvidado de la Justicia

**La Crisis Penitenciaria
y el Costo de Mirar hacia otro Lado.**



*“Costa Rica ocupa la quinceava tasa
de encarcelamiento más alta del
mundo... la solución a todo se ha
convertido en la cárcel.”*

Lauren Díaz, Directora Ejecutiva de la Fundación Nueva Oportunidad

Cuando cierro los ojos y pienso en el sistema penitenciario costarricense, la imagen que me viene a la mente no es la de justicia ni de reinserción, sino la de hacinamiento, desesperanza y abandono. Es como si hubiéramos convertido a las cárceles en bodegas humanas, donde amontonamos a los que fallaron, sin darles una verdadera opción de regresar a la sociedad transformados. Es una realidad incómoda que preferimos ignorar, pero que grita desde los pasillos saturados de La Reforma, San Sebastián o Pococí.

Hace unos meses visité La Reforma. Recuerdo caminar por los pabellones y ver a cinco, seis hombres compartiendo una celda diseñada para dos. Las literas se habían multiplicado de manera improvisada, y algunos dormían en el suelo sobre colchones delgados y húmedos. El ruido era ensordecedor, una mezcla de gritos, radios a todo volumen y el retumbar metálico de puertas cerrándose. En ese ambiente, cualquier intento de rehabilitación suena a ilusión. Porque, ¿cómo hablar de reinserción cuando lo básico —el espacio, la higiene, la dignidad— está ausente?

Los números respaldan lo que vi con mis propios ojos. Según el Informe del Estado de la Justicia 2025, Costa Rica tiene una población penitenciaria que supera los 16.500 privados de libertad, cuando la capacidad instalada apenas ronda los 13.000 cupos. Eso significa un hacinamiento promedio del 27%, pero en algunos centros como San Sebastián, esa cifra se dispara por encima del 70%. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en múltiples ocasiones que el hacinamiento carcelario es una forma de trato cruel e inhumano, y en nuestro país esa advertencia resuena con fuerza.

No siempre fue así. Durante los años noventa, Costa Rica se enorgullecía de tener un sistema penitenciario relativamente ordenado en comparación con otros países de la región. Pero la combinación de un aumento sostenido en la criminalidad, leyes más duras y una infraestructura rezagada nos llevó a esta crisis. Entre 2010 y 2023, la población carcelaria creció en más de un 50%, mientras que la inversión en infraestructura penitenciaria apenas alcanzó un 15% de incremento real. Dicho de otro modo: metimos a más gente en un espacio que no creció al mismo ritmo.

Lauren Díaz mencionó, “En Costa Rica más de 16.000 personas están privadas de libertad con un hacinamiento penitenciario que asciende al 29%. Cada persona por año nos cuesta alrededor de 17 mil dólares. Paradójicamente nos saldría más barato pagarles una carrera universitaria completa que tenerles encerradas.”

El problema no es solo de números, es de prioridades. El sistema penitenciario ha sido, históricamente, “un rostro olvidado” del aparato de justicia. No tiene el glamour mediático de los juicios, ni la atención política que genera la policía. La cárcel es el último eslabón de la cadena, y por eso ha sido tratada como un depósito olvidado. Mientras en la Asamblea Legislativa se discuten reformas para aumentar las penas, casi nadie pregunta si tenemos espacio, personal y recursos para recibir a esa nueva oleada de condenados. La lógica parece ser: “primero metamos más gente presa, después vemos qué hacemos con ellos”.

Cuando uno conversa con los privados de libertad, se da cuenta de lo profundo de esa deshumanización. Recuerdo las palabras de un joven en San Sebastián, condenado por robo agravado: *“Aquí adentro lo único que uno aprende es a ser más duro. Si salgo, salgo peor. Porque aquí no hay trabajo, no hay estudio, no hay nada. Solo tiempo para pensar en cómo sobrevivir”*. Ese testimonio encierra una verdad brutal: nuestras cárceles no están funcionando como centros de rehabilitación, sino como universidades del crimen.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha advertido que en América Latina más del 40% de los privados de libertad reinciden en menos de tres años. Costa Rica no escapa a esa tendencia. Y es lógico: si los liberamos después de años de encierro en condiciones inhumanas, sin haber recibido formación, apoyo psicológico o laboral, ¿qué opciones reales tienen al salir? En la práctica, los estamos condenando a volver al ciclo del delito.

El hacinamiento, además, pone en jaque la seguridad del propio sistema. Los motines, las fugas y los episodios de violencia se multiplican en espacios donde la tensión es permanente. En 2022, el Ministerio de Justicia reportó más de 200 incidentes de violencia intracarcelaria, desde riñas hasta ataques contra custodios. Cada uno de esos episodios es un recordatorio de que la presión dentro de los muros tarde o temprano explota, y cuando lo hace, las consecuencias alcanzan también a la sociedad.

Lo más doloroso es que las soluciones planteadas hasta ahora han sido cortoplacistas. Cada cierto tiempo se anuncia la construcción de un nuevo módulo, o la habilitación de más camas en un centro existente. Son parches que alivian momentáneamente la presión, pero que no resuelven el problema estructural. Mientras sigamos aumentando las penas sin invertir en alternativas a la prisión —como medidas cautelares efectivas, trabajo comunal supervisado o programas de rehabilitación en libertad— el hacinamiento seguirá creciendo como una bola de nieve.

Cuando pienso en el papel del Estado en todo esto, no puedo evitar sentir que hemos fallado como sociedad. Hemos fallado en dar oportunidades antes de que un joven cruce la línea del delito, y hemos fallado en tratarlos con dignidad cuando ya lo hicieron. La ausencia del Estado no solo se ve en los barrios donde el narco recluta a los adolescentes, también se ve en las cárceles donde los dejamos pudrirse sin esperanza. Y esa ausencia nos cuesta caro. Porque cada preso que reincide no es solo un fracaso individual, es un fracaso colectivo.

El hacinamiento no es un problema de ellos, es un problema de todos. Porque detrás de cada celda sobrepoblada hay un reflejo de nuestras prioridades torcidas. Gastamos millones en seguridad reactiva, pero escatimamos en rehabilitación. Celebramos cada operativo policial, pero ignoramos que al final del camino no tenemos un sistema capaz de reinsertar a los que atrapamos. Es como si estuviéramos llenando un balde agujereado: por más que metamos agua, siempre se vacía.

Podemos seguir tratándonos como un país que solo sabe castigar, o podemos empezar a ver nuestras cárceles como una extensión de la sociedad que queremos construir. Una sociedad donde la dignidad no se pierde al cometer un error, y donde la justicia no se confunda con venganza. El hacinamiento es el síntoma más visible de un Estado ausente, y enfrentarlo requiere más que construir más cárceles: requiere repensar qué significa, en serio, justicia en una democracia como la nuestra.

**LA CÁRCEL COMO
CASTIGO, NO COMO
OPORTUNIDAD:
VOCES DESDE ADENTRO**

Hace poco me encontré con un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja como abogado defensor. En medio de un café en San Pedro me contó algo que se me quedó grabado: *“Jorge, cada*

vez que entro a una cárcel siento que estoy entrando a un país distinto, uno con reglas propias, donde la esperanza dejó de existir hace rato”. Esa frase me retumbó porque, aunque yo había estado en varias visitas institucionales, escucharlo de alguien que vive esos pasillos a diario me hizo entender que la cárcel en Costa Rica se ha convertido más en un castigo perpetuo que en una oportunidad de transformación.

Cuando entro en esos espacios y converso con los privados de libertad, las historias se repiten. Jóvenes que cayeron por narcomenudeo, hombres adultos que crecieron en barrios donde la violencia era la regla y no la excepción, mujeres que terminaron traficando droga por necesidad económica. Sus relatos comparten un hilo común: ninguno siente que la cárcel sea un lugar donde pueda rehacer su vida. Al contrario, perciben que el sistema los moldea para salir más resentidos y con menos opciones que cuando entraron.

Un ejemplo claro fue el testimonio de Carlos, un muchacho de 24 años recluido en San Rafael de Alajuela por robo agravado. Me dijo con una sinceridad brutal: *“Aquí uno aprende a sobrevivir, no a cambiar. Si yo salgo mañana, no sé en qué voy a trabajar, porque nadie me va a dar chance. Y mientras tanto, lo que aprendo es a ser más duro, más violento”.* Ese círculo vicioso no es una casualidad, es un reflejo de un modelo que sigue viendo la cárcel solo como castigo.

Según el Informe del Estado de la Justicia 2025, apenas un 17% de la población penitenciaria accede a programas formales de educación o capacitación laboral. El resto pasa la mayor parte del tiempo sin actividades estructuradas, lo que genera ociosidad, tensiones y violencia. En contraste, países como Noruega o Finlandia, donde la tasa de reincidencia es inferior al 20%, invierten fuertemente en la reinserción, al punto que más del 70%

de los reclusos participa en actividades educativas o laborales dentro de las prisiones. En Costa Rica, seguimos atrapados en la lógica del encierro, sin entender que privar de libertad no debería ser sinónimo de privar de futuro.

En la entrevista con Lauren Díaz, ella confirma:

Recuerdo también a Marta, una mujer de 32 años condenada por introducir droga a un centro penal. Madre de dos niños pequeños, su historia refleja cómo el sistema penal golpea con más fuerza a las mujeres en situación de vulnerabilidad. “Yo no soy narcotraficante”, me dijo llorando, “yo solo necesitaba plata para darles de comer a mis hijos. Y ahora estoy aquí, sin verlos, sin saber cómo van a crecer. ¿De qué sirve esto?”. La voz de Marta es la de muchas mujeres que representan ya casi un 10% de la población penitenciaria, un porcentaje que ha crecido de manera sostenida en la última década, según datos del Ministerio de Justicia y Paz.

Lo más doloroso es que, aun cuando existen programas de reinserción, los recursos son insuficientes. El Programa de Atención Integral (PAI), que busca dar formación técnica y apoyo psicológico, llega solo a una fracción de los internos. En 2023, el presupuesto para la Dirección General de Adaptación Social fue de poco más de ₡51 mil millones, una cifra que representa menos del 0,5% del gasto público nacional. ¿Cómo

“Una vez que una persona ingresa al sistema penitenciario pierde su capacidad de elegir y el protagonismo de sus vidas. Las cárceles en las condiciones actuales no tienen posibilidades reales de promover opciones de inserción social, porque ni siquiera alcanzamos a brindar un hospedaje digno.”

vamos a hablar de segundas oportunidades si el Estado invierte más en custodiar que en rehabilitar?

He conversado con custodios penitenciarios que también se sienten atrapados. Uno de ellos me dijo en confianza: *“Nosotros no somos psicólogos, no somos maestros, somos policías adentro de la cárcel. Pero el sistema nos exige controlar a cientos de hombres con muy poco personal. A veces me toca a mí solo vigilar a 80 internos”*. Esa desproporción es alarmante: la relación promedio es de un custodio por cada 24 privados de libertad, muy por encima de lo recomendado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que señala que la seguridad y la rehabilitación requieren un trato más personalizado.

El impacto de esa visión puramente punitiva se refleja en la reincidencia. Según el Estado de la Justicia 2022, cerca de un 35% de los privados de libertad en Costa Rica reinciden en un nuevo delito en menos de cinco años tras cumplir condena. Esa cifra es un espejo del fracaso del sistema: no estamos corrigiendo conductas, solo las estamos postergando y, en muchos casos, profundizando.

Y es aquí donde me detengo a pensar: ¿qué pasaría si en lugar de ver la cárcel como el fin del camino, la viéramos como un espacio de transición hacia una vida distinta? He conocido experiencias de internos que lograron cambiar su rumbo gracias a proyectos de educación y trabajo. Uno de ellos es Juan, un hombre que aprendió carpintería en La Reforma y que hoy, tras haber salido, tiene un pequeño taller en Desamparados. Cuando lo entrevisté, me dijo con orgullo: *“Ese taller me salvó. Me dio una razón para no volver a lo mismo”*. Su caso demuestra que, aunque pocos, los programas de oportunidad funcionan. El problema es que esos casos son la excepción, no la regla. La mayoría de los privados de libertad no acceden a esas oportunidades porque simplemente no hay suficientes recursos. Y mientras tanto, la narrativa política sigue centrada en construir más cárceles y aumentar las penas. Es un discurso fácil de vender en tiempos de miedo, pero vacío de soluciones reales. Lo dijo hace poco la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación:

“Una prisión sin acceso a educación es un espacio que reproduce desigualdades y multiplica la violencia”.

En las entrevistas que realicé para este libro, varios expertos coincidieron en que necesitamos un cambio cultural profundo. Rodolfo Brenes lo resumió con claridad: *“No podemos seguir pensando que más cárcel es más seguridad. Si un joven comete su primer delito, deberíamos obligarlo a estudiar, a trabajar, a reparar el daño, no a convertirlo en un graduado del crimen”.* Y tenía razón. Esa visión de castigo sin oportunidad nos está costando generaciones enteras.

Cuando camino por los pasillos de una cárcel, no veo solo a delincuentes, veo a personas que, en su mayoría, nacieron en entornos donde el Estado nunca estuvo presente: barrios con alta pobreza, escuelas con mala calidad, familias desintegradas. Y ahora, cuando caen en el sistema, el Estado vuelve a estar ausente, esta vez tras barrotes. La cárcel se

convierte así en un doble castigo: por lo que hicieron y por lo que nunca recibieron.

Al final, la pregunta que me hago es simple pero incómoda: ¿qué queremos que pase cuando un privado de libertad cumpla su condena y vuelva a caminar entre nosotros? ¿Queremos que regrese con más resentimiento, más contactos criminales y menos herramientas para ganarse la vida? ¿O queremos que regrese con la posibilidad real de integrarse a la sociedad? La respuesta debería ser obvia, pero nuestras políticas actuales parecen haber escogido la primera opción.

Mientras no cambiemos esa lógica, la cárcel seguirá siendo un espacio de castigo, no de oportunidad. Y ese es un lujo que Costa Rica ya no se puede dar. Porque cada vez que un hombre o una mujer sale de prisión peor de lo que entró, no es solo un fracaso personal, es un golpe directo a nuestra seguridad colectiva.

**¿REINSERTAR O
ALMACENAR?
LA DEUDA CON LA
POLÍTICA PENITENCIARIA**

Recuerdo una mañana gris en la que visité el centro penal de Pococí. Caminaba entre los pabellones y veía los rostros de los privados de libertad pegados a los barrotes, algunos con mirada desafiante,

otros con un vacío tan grande que me estremeció. Mientras el director del penal me contaba sobre los programas que intentan sostener con presupuestos limitados, una frase me retumbaba: *“Aquí no estamos reinsertando, Jorge, aquí apenas estamos almacenando gente”*. Esa palabra, almacenar, me pareció brutal y certera. Como si fueran objetos guardados en una bodega, sin propósito más que esperar el paso del tiempo.

Costa Rica se ha quedado a medio camino entre el discurso de rehabilitación y la realidad de encierro. La Política Penitenciaria 2021-2030, elaborada por el Ministerio de Justicia y Paz, plantea que el sistema debe orientarse hacia la reinserción social, con ejes claros como la educación, la atención psicosocial, el trabajo intramuros y la articulación comunitaria. Pero cuando uno revisa los indicadores, el contraste es doloroso. Apenas un 18% de las personas privadas de libertad accede a un programa formal de capacitación laboral, según datos del Estado de la Justicia 2022. Y solo un 16% cursa algún nivel educativo dentro del penal. El resto pasa sus días entre la ociosidad, la violencia y la espera.

Lauren Díaz, Directora Ejecutiva de la Fundación Nueva Oportunidad, reitera:

“Las cárceles en Costa Rica son cementerios de oportunidades; no hay política de inserción social ni seguimiento post penitenciario.”

Me lo dijo un joven en La Reforma, con la sinceridad de quien ya no espera nada del sistema: *“Aquí nos dicen que nos quieren reinsertar, pero lo único que hacen es encerrarnos más apretados cada día. Yo salgo en tres años, pero sé que afuera no hay nada para mí. Ni estudio, ni brete, ni nada. Entonces, ¿qué me queda?”*. Esa voz se repite en cientos de internos que ven pasar los años sin que nadie les ofrezca herramientas reales para cambiar su destino.

El hacinamiento, que ronda el 25% en promedio nacional, según el Informe del Estado de la Justicia 2025, agrava todo. Celdas diseñadas para seis personas terminaron con diez o doce, baños compartidos entre decenas, falta de privacidad, tensiones constantes. ¿Cómo hablar de programas de rehabilitación cuando el espacio físico ni siquiera permite condiciones mínimas de dignidad? Naciones Unidas ha insistido en que el hacinamiento es una forma de trato cruel e inhumano, y Costa Rica no escapa de ese señalamiento.

Más de uno de cada tres vuelve a las calles sin haber cambiado nada, y peor aún, con más contactos criminales que antes. Cada reincidente es una prueba de que almacenamos, pero no transformamos.

“Muchas organizaciones criminales nacen en las cárceles: el sistema penitenciario está colapsado.”

Tania Molina, Criminóloga

Cuando hablo con expertos como Rodolfo Brenes, me insisten en lo mismo: la cárcel debería ser el último recurso, no la primera respuesta. Y eso implica fortalecer medidas alternativas. En Costa Rica tenemos herramientas como la justicia restaurativa y los programas de monitoreo electrónico con tobillera, pero su aplicación sigue siendo limitada. En 2023, había poco más de 2.300 personas con tobillera electrónica, una cifra mínima frente a los más de 16.000 privados de libertad en centros penitenciarios. Es

decir, seguimos confiando más en el encierro físico que en la innovación tecnológica o en la reparación del daño.

En Costa Rica la política penitenciaria es como la Cenicienta de la política criminal. No tenemos una política de inserción social, no tenemos una política de seguimiento post penitenciario. Una persona que ha estado en la cárcel se logra insertar a pesar del sistema, y no gracias a él.

He pensado mucho en por qué nos cuesta tanto dar ese salto. Tal vez porque el discurso político es más fácil cuando se promete mano dura, más cárceles, más años de condena. Decir que vamos a invertir en reinserción no da votos inmediatos, pero sí construye futuro. En Noruega, por ejemplo, el costo de mantener a un recluso es casi el triple que en Costa Rica, pero su reincidencia es inferior al 20%. Allí entendieron que sale más barato educar y capacitar que volver a juzgar y encarcelar a la misma persona una y otra vez. Aquí, en cambio, seguimos gastando en custodiar celdas sin reparar en el costo social de repetir fracasos.

En medio de esta contradicción, hay chispazos de esperanza. Hace poco visité un proyecto de reinserción en Pérez Zeledón, donde un grupo de privados de libertad trabaja en agricultura orgánica. Ellos mismos cultivan hortalizas que luego se venden en ferias del agricultor. Uno de los muchachos me dijo: *“Aquí aprendí que puedo hacer algo distinto. Yo nunca había sembrado nada, solo había vendido droga. Ahora sé que puedo trabajar la tierra”*. Ese testimonio me recordó que, aunque el sistema está rezagado, hay esfuerzos que demuestran que otra cárcel es posible.

Sin embargo, son esfuerzos aislados, casi simbólicos frente al tamaño del problema. La Política Penitenciaria 2021-2030 habla de un modelo integral, pero la realidad presupuestaria lo condena a ser letra muerta. El gasto por privado de libertad en Costa Rica ronda los ¢820.000 mensuales, la mayoría destinado a alimentación, seguridad y mantenimiento, y apenas una fracción mínima a programas de educación o trabajo. En otras palabras, invertimos en almacenar cuerpos, no en transformar vidas.

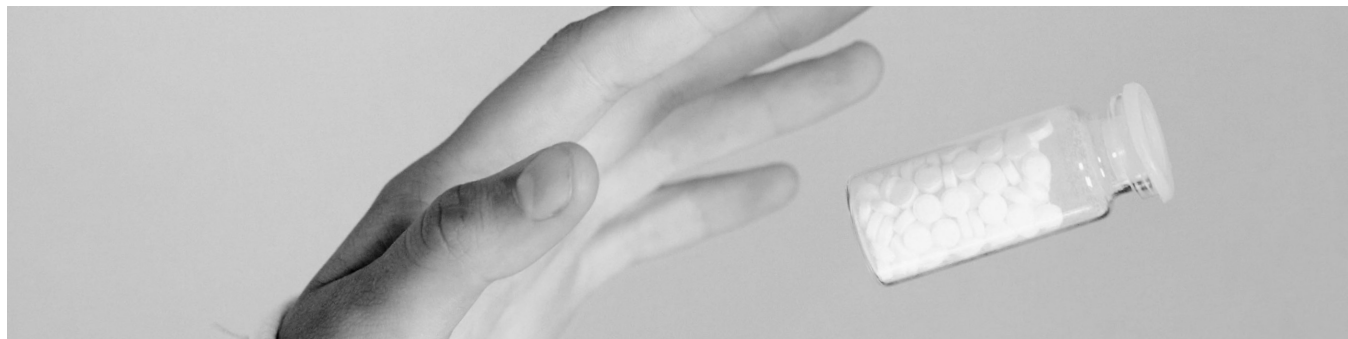
Y mientras tanto, las comunidades también pagan el precio. Cuando un

ex convicto regresa a un barrio sin apoyo, sin oportunidades y con un estigma social que lo marca, la probabilidad de que vuelva al delito es altísima. Los vecinos lo saben y lo sienten. Hace poco en un barrio de Desamparados, una señora me dijo con temor: *“Don Jorge, aquí cuando sale alguien de La Reforma, ya sabemos que en unos meses vuelve a caer. Es como si nunca hubiera salido de verdad”*. Esa percepción alimenta la desconfianza hacia las instituciones y la sensación de que todo esfuerzo es inútil.

Lo que necesitamos, y lo digo con convicción, es un cambio de mentalidad. La cárcel no puede seguir siendo una bodega humana. Debe convertirse en un espacio de transición, donde el tiempo de condena se use para estudiar, aprender un oficio, recibir apoyo psicológico, reparar el daño a las víctimas y prepararse para volver a la sociedad. Eso no significa ser blandos con el crimen, significa ser inteligentes con la justicia.

La deuda con la política penitenciaria es enorme. Hemos redactado documentos, firmado compromisos, creado programas, pero seguimos con la mora pendiente de ejecutarlos en serio. Mientras tanto, miles de personas pasan sus días en celdas abarrotadas, esperando un futuro que nunca llega. Y como sociedad, cada vez que dejamos que alguien salga peor de lo que entró, hipotecamos nuestra seguridad y nuestra cohesión social.


Yo no quiero un país que almacene seres humanos como si fueran chunches viejos. Quiero un país que, aunque castigue a quienes rompen la ley, también les dé la oportunidad real de cambiar. Porque al final, ellos van a volver a caminar entre nosotros. Y lo que pase ese día dependerá de lo que decidimos hacer mientras estuvieron tras las rejas.



Capítulo 5

La Aspirina Nacional

**El Fracaso de una Política Criminal
sin Política Social.**



“Lo que se va a posicionar precisamente en el discurso político es el paradigma punitivo: hablar de más cárceles, de más represión, de fortalecer policías... Ese enfoque trae réditos políticos, pero reproduce el estereotipo de violencia y nos aleja de soluciones reales.”

Verny Montoya, Profesor Universitario y Analista en Temas de Seguridad

Todavía recuerdo a un viejo juez penal que me dijo una frase que se me quedó grabada: “Don Jorge, aquí en Costa Rica creemos que todo se resuelve con cárcel. Es como si la cárcel fuera la aspirina nacional: duele la cabeza, cárcel; duele la panza, cárcel; le roban la bici, cárcel. Pero nadie se pregunta si de verdad esa medicina cura algo”. Me lo dijo con una media sonrisa, pero con la tristeza de quien lleva décadas viendo desfilar miles de vidas rotas por un sistema que se acostumbró a castigar más que a comprender.

La historia de nuestro país con la cárcel como única respuesta es larga. Desde la década de 1980, cuando empezaron a crecer las preocupaciones por el narcotráfico, hasta hoy, hemos endurecido penas y ampliado catálogos delictivos como si eso fuera un escudo mágico contra la violencia. En 1986, teníamos menos de 4.000 privados de libertad; hoy superamos los 16.000 internos, según datos del Ministerio de Justicia y Paz (2023). La población carcelaria se cuadruplicó en menos de 40 años, mientras la inversión en educación, cultura y programas sociales se estancaba. El resultado: más cárceles, más hacinamiento, pero no menos crimen.

“El gran peligro es creer que la violencia no me afecta porque ‘se matan entre ellos’; cuando gana un narco en la plaza pública, la paz que llega es la paz de la extorsión.”

Rogelio Pardo,
ex Secretario de Defensa en EEUU

de Desarrollo (BID) que analizó la política carcelaria en América Latina. El informe concluía que el encarcelamiento masivo no solo no reduce la violencia, sino que puede incrementarla, porque las cárceles se convierten en escuelas del crimen. Allí los grupos criminales reclutan,

En una visita que hice a un centro penal, un custodio me dijo casi resignado: “Aquí adentro, Jorge, mandan más los líderes de las bandas que nosotros. Ellos controlan quién tiene acceso a un teléfono, quién recibe visitas y hasta quién duerme en determinada celda. Si la calle está jodida, aquí adentro es un reflejo todavía más cruel”. Y esa es la verdad: la cárcel dejó de ser un lugar de castigo para convertirse en un nodo más de la red criminal.

endurecimientos; la social, de promesas incumplidas. Así, mientras cerrábamos oportunidades en barrios vulnerables, abríamos más celdas en cárceles abarrotadas.

Los informes del Estado de la Justicia 2025 lo muestran con crudeza: la tasa de homicidios en 2023 llegó a 17,2 por cada 100.000 habitantes, la más alta en la historia de Costa Rica. Y al mismo tiempo, el sistema penal nunca había encarcelado a tanta gente. Es decir, mientras más encerramos, más violencia tenemos en las calles. Algo no calza, y sin embargo, seguimos repitiendo la fórmula.

Me impresionó mucho leer un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que analizó la política carcelaria en América Latina. El informe concluía que el encarcelamiento masivo no solo no reduce la violencia, sino que puede incrementarla, porque las cárceles se convierten en escuelas del crimen. Allí los grupos criminales reclutan, entrenan y consolidan poder. Y eso lo vemos claro en nuestro país: la penetración del narco en La Reforma y otros centros penales es un secreto a voces.

Pero, ¿cómo llegamos a esto? Creo que la respuesta está en la desconexión entre la política criminal y la política social. En vez de caminar juntas, crecieron separadas. La criminal se llenó de códigos, reformas y

La Encuesta Nacional de Seguridad 2022 revela que más del 70% de los costarricenses siente que la violencia y la inseguridad se deben a la falta de oportunidades laborales y educativas para los jóvenes. Y sin embargo, ¿qué hacemos como país? Construimos más cárceles, en vez de abrir más escuelas técnicas o programas de primer empleo. Es como apagar incendios con gasolina.

Un ejemplo claro lo encontré en un barrio de Limón. Conversaba con una madre que tenía a su hijo preso por robo agravado. Ella me decía con lágrimas en los ojos: *“Don Jorge, mi hijo nunca tuvo chance. Salió del colegio en octavo, no había trabajo en la zona, y lo único que encontró fue una banda que lo reclutó. Ahora está preso ocho años. ¿Qué va a aprender ahí adentro? Solo cosas peores”*. Esa voz me recuerda que detrás de cada estadística hay historias de abandono social que terminan en expedientes judiciales.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha insistido en que la verdadera seguridad no se construye con barrotes, sino con cohesión social. En su informe de 2022 sobre seguridad humana, plantea que invertir en prevención —educación, salud mental, cultura, empleo digno— genera retornos mucho mayores que invertir en cárceles. Costa Rica, que alguna vez fue modelo de desarrollo humano en la región, parece haber olvidado esa lección.

La cárcel como única respuesta es un error histórico porque rompe el tejido social en lugar de repararlo. Familias enteras quedan marcadas por el estigma. Los hijos crecen sin padres porque están presos por delitos menores, muchos ligados a la pobreza o al consumo de drogas. Según el Ministerio de Justicia, casi el 28% de la población carcelaria está ahí por delitos relacionados con drogas, en muchos casos mujeres que servían como correos humanos. ¿De verdad la sociedad es más segura porque esas mujeres están presas? ¿O sería más inteligente ofrecerles salidas laborales y educativas antes de que caigan en las redes del narco?

En El Salvador, la llamada “guerra contra las pandillas” con mega cárceles y detenciones masivas ha generado titulares de mano dura que suenan atractivos políticamente, pero los organismos de derechos humanos

advierten del costo en libertades civiles y del efecto a largo plazo. Costa Rica no puede caer en esa trampa. Nuestra tradición democrática, aunque golpeada, nos obliga a pensar en soluciones más humanas y sostenibles.

Cuando repaso nuestra historia, me queda claro que la cárcel ha sido la salida fácil, pero también la más cara y la menos efectiva. Es cara porque mantener a un privado de libertad cuesta al Estado casi ¢820.000 al mes, según datos del Ministerio de Hacienda, mientras que una beca universitaria ronda los ¢300.000 mensuales. Es decir, cuesta casi tres veces más encerrar a alguien que educarlo. Y es inefectiva porque la reincidencia se mantiene en torno al 35%, lo que significa que uno de cada tres vuelve a delinquir.

La cárcel como aspirina nacional no está curando nada. Solo tapa síntomas mientras la enfermedad social avanza. Si no entendemos eso, vamos a seguir llenando celdas y vaciando comunidades de esperanza. Y ese es el verdadero error histórico: haber creído que el encierro podría sustituir a la política social.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE COMO PREVENCIÓN REAL DEL DELITO

Siempre que camino por un barrio popular en Costa Rica, me topo con la misma escena: una cancha de fútbol polvorienta, unos güilas improvisando porterías con piedras, y al fondo una pulpería

que vende fresco de tamarindo y gallos de salchichón. Esa imagen, que parece tan sencilla, encierra una verdad poderosa: ahí, en esos espacios de juego, cultura y convivencia, está la verdadera prevención del delito. Pero en vez de apostar a fortalecerlos, el país los ha dejado caer en el abandono.

Hace años entrevisté a un líder comunal de Pavas que me dijo algo que nunca olvidé: *“Don Jorge, aquí no necesitamos más policías con fusiles, necesitamos más pelotas, más maestros de música y más entrenadores. Si le damos un balón a un chiquito, le quitamos un arma; si le damos una guitarra, le quitamos la tentación de la esquina”*. Tenía razón. La

evidencia internacional lo confirma. El Banco Mundial ha señalado que cada dólar invertido en programas de educación y deporte juvenil puede generar hasta siete dólares en reducción de violencia y criminalidad. Es decir, es una inversión con retornos sociales y económicos altísimos.

En Costa Rica, sin embargo, hemos seguido otra ruta. Mientras destinamos casi ₡100.000 millones anuales al sistema penitenciario, la inversión en programas de prevención social del delito es mínima. El Estado de la Nación 2023 advertía que el presupuesto en cultura se mantiene en apenas el 0,4% del PIB, uno de los más bajos de América Latina. Y en deporte, gran parte de los comités cantonales sobreviven con presupuestos ridículos que no alcanzan ni para mantener las canchas abiertas.

La educación es la primera gran trinchera. Cuando reviso los datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), me preocupa ver que en 2022 la tasa de deserción en secundaria superó el 13%, lo que significa que más de 40.000 estudiantes abandonaron las aulas en un solo año. Muchos de esos jóvenes terminan siendo reclutados por el narco, que les ofrece lo que la escuela no pudo: un sentido de pertenencia, ingresos rápidos y reconocimiento. La Encuesta Nacional de Juventud 2021 mostró que el 60% de los jóvenes que abandonaron estudios lo hicieron por razones económicas. ¿Cómo no van a ser presa fácil de las bandas criminales si sienten que el sistema les cerró la puerta?

Lo mismo ocurre con el arte y la cultura. Recuerdo cuando visité el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) en Guácimo. Vi a chiquillos que, en vez de estar en la calle, estaban aprendiendo a tocar violín. Uno de ellos me dijo: “*Profe, aquí yo siento que importo*”. Esa frase

lo dice todo. El Sinem, con un presupuesto pequeñísimo, ha demostrado que la música puede transformar vidas. Pero mientras ellos hacen milagros, el país sigue sin entender que cada orquesta infantil es también

Verny Montoya, nos recuerda: “*La política social va primero, la educación va primero. Si nosotros le damos vuelta a esta ecuación y no seguimos promoviendo discursos de odio, vamos a retomar los valores que hicieron grande a Costa Rica. Antes de abolir el ejército, ya habíamos apostado por la educación pública y gratuita, ese era nuestro modelo.*”

una estrategia de seguridad nacional.

Y qué decir del deporte. Hace unos meses, en un barrio de Limón, un entrenador voluntario me confesó: *“Jorge, yo no tengo ni plata para comprar balones. Los chiquillos vienen aquí porque prefieren entrenar que estar en la calle, pero yo ya no puedo más”*. Esa impotencia refleja la desconexión entre la política social y la política criminal. Mientras los barrios claman por oportunidades, el Estado responde con más patrullas y más cárceles.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) insiste en que la violencia es, en gran medida, consecuencia de la exclusión social. En su informe de 2022, planteaba que el deporte y la cultura no son “accesorios”, sino pilares fundamentales de la cohesión social. Países como Colombia, con programas como “Escuelas de Paz” en Medellín, demostraron que invertir en cultura y deporte redujo en más de un 40% las tasas de homicidios en zonas críticas. ¿Por qué Costa Rica no aprende de esos ejemplos?

También está la educación técnica y laboral como barrera contra el delito. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tiene una cobertura limitada: apenas llega a un 15% de los jóvenes que podrían beneficiarse, según datos de 2021. Mientras tanto, el mercado laboral demanda técnicos en áreas como ciberseguridad, electromecánica o turismo. Esa desconexión es letal, porque los jóvenes que no encuentran empleo formal caen en la trampa del “menudo fácil” del narco. Como me dijo un joven en Desamparados: *“Jorge, es más fácil que un bicho me ofrezca 200 mil colones por un mandado que conseguir trabajo en una empresa”*.

La realidad es que la prevención real del delito no se construye con barrotes, sino con oportunidades. Y ahí es donde la política criminal y la política social deben volver a ser hermanas. No se trata de elegir entre policía y escuela, sino de entender que sin educación, cultura y deporte, la represión será siempre un parche temporal.

En la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad 2022, más del 65%

de los ciudadanos dijo que el país debería invertir más en programas comunitarios y educativos para prevenir la violencia, en vez de construir cárceles. La gente lo entiende. Lo que falta es voluntad política.

Un dato que me golpeó es que, según el Estado de la Justicia 2025, Costa Rica gasta anualmente más en mantener presos que en becas estudiantiles. Cada privado de libertad cuesta alrededor de ₡820.000 al mes, mientras que una beca del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) ronda los ₡100.000 mensuales. Con lo que gastamos en un reo, podríamos becar a ocho estudiantes. ¿No es evidente dónde deberíamos invertir para prevenir el delito?

Pienso en un país que alguna vez apostó por la educación como su mayor arma. En 1949 abolimos el ejército y decidimos que los libros serían más poderosos que los fusiles. Esa fue nuestra gran apuesta histórica. Pero con el tiempo la olvidamos, y ahora estamos pagando las consecuencias. Tal vez sea hora de recordar que un niño con un libro en la mano es un adulto menos en una celda, que una niña en una clase de danza es una mujer menos atrapada por el narco.

La educación, la cultura y el deporte son las verdaderas armas de prevención. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, los informes internacionales, y sobre todo, las comunidades que todos los días luchan con uñas y dientes para rescatar a sus jóvenes de la violencia. La pregunta es si tendremos la valentía de invertir en esos caminos largos y complejos, en vez de seguir apostando al encierro inmediato y estéril.

Porque al final, la seguridad de Costa Rica no se juega en los juzgados ni en las cárceles: se juega en las aulas, en las canchas y en los centros culturales. Si no lo entendemos, seguiremos corriendo detrás de una violencia que cada día nos toma más ventaja.

REPENSAR EL CASTIGO: PENAS ALTERNATIVAS Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Una tarde, conversando con un juez penal en San Ramón, me dijo algo que se me quedó grabado: *“Don Jorge, el problema no es que tengamos delincuentes, el*

problema es que creemos que la cárcel es la única respuesta para todos”. Esa frase me hizo pensar en lo mucho que hemos reducido el debate nacional al encierro, como si la única medida de justicia fuera cuántas personas metemos en una celda. Pero cuando uno revisa los datos, se da cuenta de que esa visión es, además de cara, ineficaz.

En Costa Rica tenemos hoy más de 17.000 privados de libertad, con una tasa de 340 personas presas por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio de Justicia y Paz 2024. Esto nos coloca como uno de los países con mayor población carcelaria de Centroamérica, solo por detrás de El Salvador y Panamá. Y sin embargo, la inseguridad sigue disparada: el 2023 cerró con 907 homicidios, la cifra más alta en la historia del país. La ecuación no cuadra. Si más cárceles y más presos no nos han dado más seguridad, ¿por qué seguimos insistiendo en la misma receta?

Cuando visité el Informe Estado de la Justicia 2025, confirmé lo que ya intuía: el sistema penal costarricense está saturado por delitos menores, por casos que podrían resolverse de otra forma. Más del 40% de las personas privadas de libertad están ahí por delitos no violentos, principalmente hurtos, daños a la propiedad y microtráfico. Esto significa que en nuestras cárceles conviven jóvenes que vendieron dos gramos de cocaína con sicarios que ordenaron asesinatos. El castigo indiferenciado es un error que termina alimentando el círculo de violencia.

Pablo Solano, abogado penalista dijo:

Debemos aumentar penas, aunque mi formación es garantista: la mano firme no es contradictoria con los derechos humanos, sino necesaria para frenar la impunidad."

La justicia restaurativa ofrece otro camino. En Costa Rica tenemos desde 2017 una Ley de Justicia Restaurativa que permite aplicar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sobre todo en casos que involucran a jóvenes. En Alajuela, por ejemplo, conocí a un grupo de estudiantes que, en vez de ser expulsados del colegio por un pleito, participaron en un proceso restaurativo con mediadores, docentes y familiares.

Uno de esos muchachos me dijo:

"Profe, por primera vez alguien me escuchó". Esa escucha, esa reparación simbólica, evitó que el conflicto escalara. El Poder Judicial reportó que, en los primeros cinco años de la ley, más de 9.000 casos se resolvieron por esta vía, con niveles de satisfacción superiores al 80% entre víctimas y ofensores.

Ahora bien, hablar de penas alternativas no es soltar delincuentes a la calle, como a veces se caricaturiza en el debate público. Es, más bien, aplicar sanciones proporcionales que no destruyan vidas innecesariamente. En Noruega, por ejemplo, la tasa de reincidencia carcelaria es de apenas 20%, mientras que en Costa Rica supera el 50%. ¿Cuál es la diferencia? Allí la cárcel es la última opción y se privilegia el trabajo comunitario, la educación y la reinserción laboral. Aquí, en cambio, se encierra a la gente sin preparar las condiciones para su regreso a la sociedad.

Lauren Díaz, Directora Ejecutiva de la Fundación Nueva Oportunidad, menciona: *"Mientras no se generen condiciones para la inserción social de las personas privadas de libertad, la cárcel seguirá siendo un depósito humano. Tenemos que hablar en serio de penas alternativas, de justicia restaurativa, de invertir en la comunidad y no solo en barros."*

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en 2021 un estudio contundente: los programas de penas alternativas cuestan hasta un 80% menos que el encarcelamiento y generan mejores resultados en reducción de reincidencia. Cada privado de libertad en Costa Rica cuesta alrededor de ₡820.000 al mes, mientras que un programa de trabajo comunal ronda los ₡120.000. La lógica económica debería convencernos de inmediato, pero seguimos atrapados en el paradigma del castigo duro.

Recuerdo el caso de una mujer en Cartago que fue condenada a prisión por robar en un supermercado comida para sus hijos. La conocí porque un sacerdote de la zona me pidió que la entrevistara. Llorando, me dijo: *“Don Jorge, yo no quería robar, quería darles de comer a mis güilas”*. Esa mujer pasó seis meses presa. Seis meses en los que pudo haber trabajado en un programa de servicio comunitario, haber recibido capacitación, haber cuidado a sus hijos. En cambio, salió con un estigma, sin empleo y con menos opciones que antes. La cárcel no la corrigió, la hundió más. La justicia restaurativa también tiene un valor intangible pero profundo: la posibilidad de que víctima y victimario se miren a los ojos y entiendan el daño causado. En un proceso que observé en Desamparados, un joven que había asaltado a un señor mayor le pidió perdón frente a la comunidad y se comprometió a reparar el daño pintando la escuela del barrio. El señor, con lágrimas en los ojos, aceptó las disculpas. Ese gesto de reconciliación no cabe en una sentencia carcelaria.

Claro, no todos los delitos son susceptibles de penas alternativas. El crimen organizado, los homicidios, la violencia sexual requieren respuestas firmes. Pero saturar el sistema con delitos menores nos distrae de lo verdaderamente peligroso. Es como si los recursos del Estado se agotaran persiguiendo a un bicho que robó un celular, mientras los grandes narcotraficantes lavan millones en hoteles y constructoras.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2022 advertía que los sistemas de justicia en América Latina tienden a criminalizar la pobreza. En Costa Rica lo vemos a diario: jóvenes de barrios marginales presos por microtráfico, mientras empresarios con tramas de corrupción complejas enfrentan procesos larguísimos que rara vez terminan en condenas firmes.

Repensar el castigo también es repensar la equidad: quién paga de verdad por sus delitos y quién logra evadir el sistema.

No es casualidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya insistido en que los Estados de la región deben priorizar medidas no privativas de libertad. No como un acto de indulgencia, sino como un mecanismo para construir sociedades más seguras y justas. En su informe de 2023, la CIDH fue clara:

Lo he dicho en varias conferencias: Costa Rica necesita un cambio de chip. No podemos seguir midiendo la eficacia del sistema penal por el número de presos, sino por la capacidad de reducir la reincidencia y reparar el daño social. Tenemos que pasar de la justicia retributiva, centrada en el castigo, a la justicia restaurativa, centrada en la sanación. Y ese tránsito no es un lujo escandinavo, es una necesidad urgente para un país que está ahogado en homicidios y cárceles desbordadas.

“La privación de libertad masiva no reduce la violencia; al contrario, genera condiciones para su reproducción”.

Cuando pienso en el futuro, imagino un país donde la pena alternativa no sea vista como blandengue, sino como inteligente; donde los jueces tengan recursos para derivar a jóvenes a programas comunitarios de verdad, no solo en el papel; donde las comunidades sean parte activa de la justicia y no simples espectadoras.

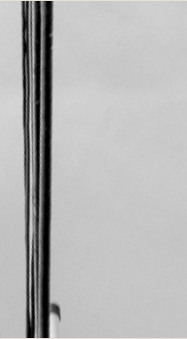
Porque al final, la seguridad no se logra llenando cárceles, sino vaciándolas con inteligencia, con humanidad y con visión de largo plazo. Repensar el castigo es, quizá, el paso más valiente que podemos dar si queremos dejar de ser un país que confunde justicia con encierro y empezar a ser uno que entienda que castigar también puede ser educar, reparar y reconciliar.



Capítulo 6

El Rostro Humano de la Frontera

**De la Solidaridad
a los Nuevos Retos Migratorios.**



*“Costa Rica enfrenta nudos que
limitan aprovechar la migración
como motor de desarrollo;
no podemos resolverlos solos,
necesitamos acuerdos trinacionales
y transfronterizos.”*

Freddy Montero, Antropólogo y Politólogo

Cuando era niño, en los años setenta, escuchaba a mi tata hablar de cómo Costa Rica recibía a los nicaragüenses que huían de la dictadura somocista. Recuerdo que me decía: “Hijo, nosotros tenemos paz, y por eso la gente viene aquí a buscar refugio”. En ese tiempo, las historias que cruzaban la frontera eran de familias completas que llegaban con lo que podían cargar en un saco, con la esperanza de un futuro menos violento. Medio siglo después, ese relato sigue vigente, pero en un contexto mucho más complejo: Costa Rica ya no solo es refugio, sino también un corredor de migración regional y global.

El Informe sobre Migración en Costa Rica 2023 del Estado de la Nación señala que en el país viven más de 500.000 personas extranjeras, lo que representa alrededor del 10% de la población total. De ese grupo, casi tres cuartas partes son nicaragüenses, un dato que refleja la relación histórica entre ambos países. Pero en los últimos años la escena ha cambiado: hoy en nuestras calles se escuchan acentos venezolanos, colombianos, haitianos y hasta africanos que atraviesan la ruta migratoria más peligrosa del continente: el Tapón del Darién, en Panamá. Según datos de Migración Panamá, en 2023 más de 520.000 personas cruzaron esa selva, la mayoría rumbo a Estados Unidos, y miles hicieron escala en Costa Rica.

Este cruce de caminos nos coloca en un dilema: somos un país pequeño, con recursos limitados, pero también con una vocación solidaria reconocida internacionalmente. No olvidemos que en 1984, Costa Rica fue el primer país de la región en firmar la Convención de Ginebra sobre Refugiados, y que hoy más de 250.000 solicitudes de refugio están activas, según el ACNUR (2024). El dato es demoledor: en proporción poblacional, somos uno de los países del mundo con mayor número de peticiones de refugio. Y aunque eso habla bien de nuestra reputación como nación garante de derechos humanos, también evidencia una presión enorme sobre nuestras instituciones.

En la frontera norte, en Peñas Blancas, he visto largas filas de mujeres y niños esperando pasar. Algunos cargan mochilas rotas, otros duermen en cartones. Conversando con una madre venezolana, me dijo: *“Costa Rica es solo un paso, pero aquí nos sentimos más seguros que en Nicaragua”*. Esa frase me hizo pensar en cómo, incluso siendo un país de tránsito, terminamos asumiendo responsabilidades que van más allá de nuestra capacidad. El Servicio Jesuita para Migrantes calculó que en 2022 más de 100.000 personas estuvieron en condición de tránsito irregular por nuestro territorio. Para un país de cinco millones de habitantes, estas cifras no son menores.

Ahora bien, la migración no es solo un desafío humanitario: también toca la seguridad. El Informe de Seguridad Hemisférica de la OEA 2023 advertía que los flujos migratorios desordenados pueden ser aprovechados por redes de crimen organizado para el tráfico de personas, drogas y armas. En Costa Rica ya lo estamos viendo. La Policía de Fronteras ha reportado en los últimos años el desmantelamiento de bandas dedicadas al coyotaje que cobraban hasta \$7.000 dólares por persona para llevarlos desde Sudamérica hasta la frontera norte. Y junto a ese tráfico de seres humanos, muchas veces viaja también la trata, un negocio que según la ONUDC genera más de 150.000 millones de dólares al año en el mundo.

Pero ojo: migración no es sinónimo de inseguridad. Ahí es donde tenemos que ser muy claros. En el imaginario popular, alimentado muchas veces por discursos políticos populistas, se tiende a asociar automáticamente

migración con crimen. Sin embargo, el Estado de la Nación 2022 demostró que no hay una relación directa entre el aumento de población migrante y el crecimiento de la criminalidad. De hecho, estudios del Colegio de Sociólogos de Costa Rica señalan que los migrantes participan menos en actividades delictivas que la población local, en proporción. Lo que sí ocurre es que la migración masiva desordenada presiona los servicios de salud, educación y vivienda, y esa presión mal gestionada genera tensiones sociales que luego se politizan.

Hablando de tensiones, un estudio del Pew Research Center 2021 mostraba que más del 50% de los costarricenses cree que los migrantes compiten por empleos con la población local. Y es cierto que en sectores como la construcción, la agricultura o el trabajo doméstico, los migrantes representan más del 20% de la fuerza laboral, según el INEC. Pero aquí viene la paradoja: son empleos que muchos ticos ya no quieren. Yo mismo lo escuché en una finca bananera de Sarapiquí, donde el dueño me decía: *“Si no fuera por los nicas, yo tendría que cerrar”*. Entonces, ¿de quién es realmente el problema? ¿Del migrante que busca ganarse la vida o de un país que no logra articular políticas laborales claras?

Por un lado, somos reconocidos como un país solidario y de puertas abiertas. El ACNUR nos ha elogiado por nuestro sistema de refugio, y organismos como la OIM destacan la capacidad de nuestra sociedad civil para organizar redes de apoyo comunitario. Pero por otro lado, tenemos un Estado desbordado: la Dirección de Migración y Extranjería arrastra una mora de más de 200.000 trámites pendientes, y los centros de atención temporal como el de Los Chiles viven al límite.

En medio de todo esto, lo que está en juego no es solo nuestra capacidad administrativa, sino nuestra identidad como nación. ¿Seguiremos siendo ese faro de paz en la región, aún con todas las grietas internas? ¿O caeremos en la tentación de cerrar las puertas y levantar muros invisibles?

Cada vez que visito la frontera, me acuerdo de una frase del expresidente Rodrigo Carazo, cuando defendía la política de refugio en los años ochenta:

“Costa Rica no puede ser insensible al dolor humano, porque entonces dejaría de ser Costa Rica”.

Hoy, más que nunca, esa frase resuena como un recordatorio de que nuestra historia está marcada por la solidaridad, pero también como una advertencia: la solidaridad sin gestión es insostenible.

Costa Rica está en medio de un corredor migratorio que no elegimos, pero que tampoco podemos ignorar. Somos un cruce de caminos, sí, pero también una nación que debe decidir cómo transitar ese cruce sin perder su esencia, sin sacrificar la seguridad y sin traicionar su tradición humanista. Y eso, es quizá uno de los retos más grandes que enfrentaremos en este siglo XXI.

MIGRACIÓN LABORAL Y BUROCRACIA: ENTRE EL APORTE Y LA TRABA

Siempre me acuerdo de una conversación que tuve en una plantación de café en Los Santos hace unos años. Era plena cosecha, diciembre, y la finca estaba llena de familias nicaragüenses recogiendo

granos desde las cinco de la mañana. El dueño de la finca, un señor de apellido Chaves, me decía con resignación: *“Don Jorge, sin estos muchachos yo no saco la cosecha. Ya los ticos no quieren venir a esto, y el Estado me pone más trabas que ayudas para regularizar a esta gente”*. Aquella escena refleja el corazón del problema: la migración laboral en Costa Rica sostiene sectores enteros de la economía, pero al mismo tiempo está atrapada en una telaraña de burocracia que ni trabajadores ni empleadores logran desenredar.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el 2023 los migrantes representaban cerca del 12% de la población ocupada en Costa Rica. En sectores como la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, ese porcentaje se dispara: en café y caña de azúcar llega a ser más del 60% de la mano de obra, y en banano y piña ronda el 40%. Sin ese aporte, literalmente no tendríamos café en las mesas europeas

ni piña en los supermercados de Estados Unidos. El Banco Mundial ha señalado que, en promedio, los migrantes aportan alrededor del 9% del PIB costarricense si se contabiliza su peso en exportaciones y consumo interno. Y sin embargo, pese a ese peso económico, el país todavía no logra ofrecer un sistema ágil y claro para gestionar su incorporación formal al mercado laboral.

El abogado Mauricio París aborda el tema con esta frase:

La traba empieza en Migración. La Dirección General de Migración y Extranjería reconoce una mora histórica de más de 200.000 trámites pendientes de regularización, la mayoría de solicitudes de refugio que se convierten en la única puerta que los migrantes encuentran para poder trabajar. El problema es que los procesos de refugio tardan años, y en ese limbo legal las personas no pueden acceder fácilmente a permisos de trabajo formales. La consecuencia es un círculo vicioso: migrantes trabajando en la informalidad, sin seguro social, sin derechos laborales y expuestos a la explotación.

“El problema no es la migración laboral en sí, sino la maraña burocrática que obliga a la gente a recurrir a la informalidad.”

Freddy Montero, expande en el tema. “Un ejemplo de lo que implica en este país documentar a una trabajadora doméstica: son miles de documentos, procesos larguísimos de trabajo que realmente inhiben la documentación migratoria de esta población y también de los trabajadores temporales y de otras categorías migratorias.”

En una visita que hice a San Carlos, hablé con una muchacha nicaragüense que trabajaba en un tambo ordeñando vacas. Me contó que el patrón le pagaba ₡7.000 colones por jornada de 12 horas, sin seguro ni aguinaldo. “Pero es mejor esto que morir de hambre en Managua”, me dijo. Esa frase resume una realidad que el Estado de la Nación 2022 también documentó: más del 60% de los migrantes en Costa Rica trabajan en condiciones de informalidad laboral, frente a un 35% de la población

nacional. Y esa brecha no solo es injusta para los trabajadores, sino que además le cuesta al país: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) deja de percibir miles de millones en cotizaciones por esa fuerza laboral invisibilizada.

Aquí aparece otra paradoja. Mientras tanto en la Asamblea Legislativa se discuten leyes para atraer “nómadas digitales”, ofreciéndoles exenciones de impuestos y facilidades para residir en el país, miles de trabajadores migrantes que ya están aquí, que levantan la agricultura y sostienen hogares costarricenses, siguen topándose con muros de papeleo. Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de cada 10 permisos temporales solicitados por patronos para trabajadores agrícolas migrantes, solo 4 se aprueban a tiempo. Y muchos productores terminan optando por la vía informal, porque si esperan la aprobación se les echa a perder la cosecha.

La burocracia también genera tensiones sociales. En barrios del Gran Área Metropolitana, como La Carpio o Los Cuadros de Guadalupe, la concentración de población migrante en condiciones de informalidad se traduce en presión sobre servicios públicos como salud, educación y vivienda. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2021 advertía que la ausencia de políticas claras de integración laboral genera la percepción de competencia desleal en el mercado de trabajo y aumenta la xenofobia. No es casualidad que encuestas del CIEP-UCR hayan registrado que casi el 50% de los costarricenses cree que los migrantes quitan empleo a los nacionales, aunque la evidencia demuestre lo contrario.

Pero, ¿qué dice la evidencia? El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2022 publicó un estudio en el que señalaba que, lejos de desplazar a los trabajadores locales, los migrantes en Costa Rica se concentran en sectores que los nacionales han abandonado. Además, generan un efecto positivo en el consumo y el pago de impuestos indirectos. De hecho, el mismo BID estima que si Costa Rica logra formalizar al menos al 50% de su población migrante laboral, el Estado percibirá cerca de \$500 millones adicionales por año en impuestos y cuotas a la seguridad social. Eso es casi lo que cuesta un hospital nacional.

El problema es que seguimos atrapados en el rezago. En 2023, la Contraloría General de la República emitió un informe lapidario: la Gestión Migratoria en Costa Rica es lenta, dispersa y con poca articulación interinstitucional. Migración, MTSS, CCSS y el Ministerio de Agricultura trabajan en silos, sin un sistema de datos compartido que permita agilizar procesos. Mientras tanto, la realidad se impone: fincas que no encuentran trabajadores legales, migrantes atrapados en la informalidad y comunidades enteras que ven crecer la desigualdad.

Y aquí, es donde entra el tema de la seguridad. Porque cuando un migrante no tiene opciones de trabajo formal, se vuelve presa fácil para redes de explotación laboral, trata de personas y hasta narcotráfico. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de 2022 sobre trata, advirtió que Costa Rica sigue siendo país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación laboral, muchas de ellas migrantes en situación irregular. Y ese es un riesgo que no podemos ignorar.

Hace poco conversaba con un empresario de la construcción en Guanacaste. Me decía que, por más que quisiera contratar en regla a los obreros nicaragüenses que levantan hoteles y condominios, el papeleo lo asfixiaba. *“Me sale más barato pagar la multa que esperar un permiso”*, me confesó. Ese tipo de confesiones son un síntoma de un Estado que no ha sabido leer la importancia de la migración laboral.

La migración laboral es, sin duda, un aporte inmenso a la economía costarricense. Pero la burocracia la convierte en una traba, en un terreno fértil para la informalidad, la explotación y la percepción equivocada de amenaza. Mientras no tengamos un sistema migratorio ágil, justo y humano, seguiremos desaprovechando el potencial de miles de personas que ya están aquí, trabajando hombro a hombro con nosotros, aunque muchas veces sin derechos.

“Costa Rica ha sabido aprovechar las migraciones internacionales para fortalecer sectores como el turismo, la agroindustria y el inmobiliario. Pero la irregularidad migratoria y los costos de las cargas sociales son barreras que limitan que los trabajadores se integren plenamente a la economía nacional.”

Freddy Montero, Antropólogo y Politólogo

el mismo mar”. Esa frase me quedó sonando porque sintetiza el gran error que seguimos cometiendo: pensar la migración como un fenómeno estrictamente nacional, cuando en realidad es regional, continental y hasta global.

El paso de migrantes por el istmo centroamericano ha cambiado de forma brutal en los últimos diez años. Según datos de Migración Panamá, solo en 2010 atravesaron el Darién unas 7.000 personas. En 2022 fueron más de 250.000, y en 2023 la cifra superó las 400.000. La mayoría son venezolanos, haitianos, ecuatorianos y colombianos que sueñan

Lo que está en juego no es solo la cosecha de café o el levantamiento de un edificio. Lo que está en juego es la capacidad del país de integrar esa fuerza laboral de manera ordenada, de garantizar derechos y de transformar la migración en una oportunidad real de desarrollo. Porque si seguimos viendo la migración sólo como un problema, nos vamos a perder de un recurso humano que ya forma parte de nuestra historia y de nuestro presente.

LA URGENCIA DE UNA POLÍTICA REGIONAL Y NO SOLO NACIONAL

Hace un tiempo, en una reunión con colegas de Panamá y Honduras, recuerdo que uno de ellos me dijo con crudeza: *“Jorge, ustedes en Costa Rica se sienten isla, pero lo cierto es que todos estamos en*

con llegar a Estados Unidos. De esos cientos de miles, más de 250.000 entraron a Costa Rica en 2023, según la Dirección General de Migración y Extranjería. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede manejar esas cifras por sí solo, mucho menos los nuestros, con recursos tan limitados.

Pero lo más grave es que seguimos improvisando. Cada país reacciona como puede: Panamá abre estaciones de recepción humanitaria en el Darién, Costa Rica habilita albergues en el sur y Nicaragua simplemente cobra por dejar pasar. Honduras y Guatemala hacen lo mismo, y México reprime en la frontera norte. Todo fragmentado, todo sin un plan común.

El resultado es el mismo: cientos de familias varadas, niños durmiendo en terminales de buses, mujeres embarazadas caminando por trochas, hombres atrapados entre traficantes de personas. Y cada gobierno haciendo malabares para apagar incendios que se repiten año tras año.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en 2021 que la atención de los flujos migratorios masivos cuesta a los países centroamericanos más de US\$600 millones anuales, sin contar la presión indirecta sobre salud, educación y seguridad. Para Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes calculó que solo en 2022 se gastaron cerca de ₡12.000 millones en albergues, alimentación y atención básica a migrantes en tránsito. Ese dinero es necesario, pero insuficiente, y sobre todo ineficiente si se gasta de manera aislada.

En Costa Rica, la exdirectora de Migración, Marlen Luna, me contaba que en días pico han registrado más de 1.000 ingresos diarios por la frontera sur. La mayoría de esas personas solo están de paso: un 90% dura entre 24 y 48 horas en el país antes de continuar hacia Nicaragua y más allá. El problema es ese 10% que se queda sin recursos para continuar y termina en situación de calle. Y aquí es donde se hace evidente la urgencia de políticas regionales: no tiene sentido que Costa Rica invierta millones en albergues temporales si Nicaragua los va a rechazar o si Honduras los va a volver a empujar hacia el sur.

Lo paradójico es que ya existen marcos regionales. El Proceso de Puebla, creado en 1996, buscaba precisamente coordinar políticas migratorias en Mesoamérica. El Plan de Acción de San Pedro Sula, firmado en 2017, planteó compromisos para atender la migración forzada. Y el Pacto

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, que Costa Rica firmó en 2018, da un marco global. Pero en la práctica, poco de eso se ha traducido en acciones conjuntas efectivas. Cada país sigue jalando para su lado, y mientras tanto las redes de tráfico de personas hacen su agosto.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos calcula que el tráfico ilícito de migrantes en América Latina mueve más de US\$4.000 millones al año. Plata que se reparte entre coyotes, redes criminales y autoridades corruptas en distintos países. Mientras los Estados no se organizan, los criminales sí lo hacen, con rutas establecidas, logística aceitada y comunicación regional. Esa es la asimetría más dolorosa: los ilegales están más coordinados que los gobiernos.

Hace unos meses viajé a Ciudad Neily para ver de primera mano la dinámica en la frontera sur. Me encontré con familias enteras de haitianos esperando un bus para llegar a Upala y luego seguir hacia Nicaragua. Hablando con ellos, lo que me quedó clarísimo es que no ven a Costa Rica como destino, sino como un puente. Pero mientras cruzan ese puente, necesitan techo, comida, atención médica. Y Costa Rica, con toda su tradición humanitaria, trata de darles eso, pero sola no puede. Un funcionario de la OIM me decía que, si no hay un plan regional de corredores humanitarios, lo que veremos cada año es un colapso humanitario en cada frontera.

El otro gran vacío es la integración laboral de quienes sí se quedan. Más del 60% de los migrantes que residen en Costa Rica son nicaragüenses, y su aporte a la agricultura, construcción y trabajo doméstico es invaluable. Sin embargo, la falta de acuerdos bilaterales con Nicaragua, Honduras o Panamá para homologar documentos, reconocer títulos o simplificar trámites mantiene a miles en la informalidad. El Informe Estado de la Justicia 2025 señala que más del 70% de los juicios por condiciones laborales precarias en agricultura involucran a personas migrantes. Eso no es sostenible ni justo.

La pandemia del COVID-19 dejó una lección clara: cuando no hay

coordinación regional, los costos se disparan. Recordemos en 2020 cuando los países cerraron fronteras y cientos de transportistas quedaron varados entre Peñas Blancas y Paso Canoas. Hubo pérdidas millonarias en exportaciones y desabastecimiento de productos básicos. Eso mismo pasa con la migración: mientras no haya acuerdos regionales sólidos, cada país seguirá pagando facturas que podrían reducirse con un esfuerzo conjunto.

Y no estamos hablando solo de plata, sino de cohesión social. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que los discursos xenófobos han crecido en Centroamérica al calor de estas crisis mal gestionadas. En Costa Rica, el CIEP-UCR registró en 2023 que el 45% de los costarricenses percibe a los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional. Esa percepción se alimenta de la improvisación estatal y de la falta de una narrativa regional que ponga en valor el aporte de la migración.

Lo que necesitamos es una política migratoria regional de verdad. Una que establezca corredores humanitarios, acuerdos de cooperación para financiar albergues, homologación de trámites, intercambio de información y coordinación en seguridad para golpear a las redes de tráfico de personas. Y eso requiere liderazgo político. Costa Rica, con su tradición de paz y derechos humanos, podría asumir ese liderazgo. Pero para hacerlo, primero debe ordenar la casa: reducir la mora en trámites, articular a sus instituciones y dejar de ver la migración como un problema aislado. La migración no se detendrá, porque responde a fuerzas mucho más grandes que nuestras fronteras: crisis económicas, dictaduras, cambio climático. Lo único que podemos decidir es si la enfrentamos solos, como hasta ahora, o juntos, con una estrategia regional que reparta cargas, multiplique recursos y proteja mejor a las personas.

Cuando pienso en aquella frase de mi colega hondureño —*“todos estamos en el mismo mar”*— entiendo que el reto no es tapar las olas, sino aprender a navegar juntos. Esa es la urgencia: dejar de pensar la migración como un problema nacional y empezar a construir, de una vez por todas, una política regional que esté a la altura del drama humano que se despliega cada día en nuestras fronteras.



Capítulo 7

Entre la Mora y la Desconfianza

**El Poder Judicial como
Pilar Democrático...en Desgaste.**



“El Poder Judicial ha sido un pilar democrático, pero estamos en un proceso de desgaste que erosiona la confianza ciudadana.”

Fernando Cruz Castro, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Mi papá solía repetir con mucho orgullo: *“En Costa Rica lo que tenemos es la justicia, aquí no manda el que tiene más balas, sino la ley”*. Esa frase, que parecía una obviedad, encerraba una verdad profunda. Durante décadas el Poder Judicial fue, junto con la educación y la seguridad social, uno de los grandes pilares que le daban cohesión a este país. Pero hoy, cuando camino por barrios y converso con personas de todas las edades, siento que esa confianza se ha ido erosionando poco a poco, como un río que va carcomiendo la tierra hasta desbordarse.

El Poder Judicial costarricense nació con una vocación muy clara: ser garante de derechos, árbitro en los conflictos sociales y freno a los abusos de poder. La Constitución de 1949 lo blindó de presiones políticas, dándole autonomía funcional y presupuestaria. Y por muchos años eso funcionó: la Sala Constitucional, creada en 1989, fue un parteaguas que le dio a la ciudadanía un arma poderosa, el recurso de amparo, para reclamar sus derechos frente al Estado. En los 90, Costa Rica era ejemplo en la región: mientras en Guatemala o en El Salvador la justicia se veía capturada por la política o la corrupción, aquí había una confianza social enorme en los jueces.

Pero algo se quebró en las últimas dos décadas. Según la Encuesta de Opinión Pública del CIEP-UCR (2023), apenas un 32% de los costarricenses confía mucho o algo en el Poder Judicial, un desplome frente al 60% que existía en 2006. Y si se pregunta por la Sala Constitucional, la joya de la corona, la confianza baja aún más. ¿Qué pasó en este país que se jactaba de su institucionalidad sólida?

Lo primero es la mora judicial. El Informe Estado de la Justicia 2022 revelaba que el atraso en la resolución de casos civiles puede superar los 1.200 días en promedio, y en materia penal hay procesos que tardan hasta 7 años en llegar a sentencia firme. En 2021, la Corte Suprema de Justicia reconoció que había más de 600.000 expedientes activos sin resolver, un volumen inmanejable que no solo afecta a quienes esperan justicia, sino que mina la percepción de eficacia del sistema. Para la gente común, que le roben el carro y esperar tres o cuatro años para que el caso prescriba sin culpables, es la confirmación de que el sistema no funciona.

La mora no es solo un problema de números, sino de vidas. Una jueza de familia me contaba que ha tenido que atender casos de pensiones alimentarias donde el proceso dura tanto que los hijos ya alcanzan la mayoría de edad antes de que se dicte una resolución. En lo penal, el retraso en juicios de homicidio significa que familias enteras quedan sin cierre emocional. Y si hablamos de delitos relacionados con narcotráfico, el rezago es todavía más peligroso: mientras se espera la sentencia, las organizaciones criminales siguen operando con libertad.

La situación se agrava porque el sistema judicial creció como una gran maquinaria burocrática, pero sin una modernización real. En 2023, más del 70% de los expedientes judiciales aún se tramitaban en papel, según datos del Consejo Superior del Poder Judicial, a pesar de los millones invertidos en informatización. Un informe de la Contraloría General de la República criticó que el programa de “Expediente Judicial Electrónico” lleva más de una década de implementación y todavía no cubre todas las materias. Así es imposible dar respuestas rápidas en un país donde el crimen organizado corre a la velocidad de WhatsApp, mientras la justicia sigue anclada a sellos y fotocopias.

Pero además de la mora, la justicia enfrenta un problema de legitimidad. Casos mediáticos en los que jueces liberan a detenidos por narcotráfico por errores procesales generan una sensación de impunidad. Lo que para los abogados es respeto a garantías constitucionales, para la ciudadanía se traduce en frustración. Un estudio de LatinoBarómetro 2021 mostró que en Costa Rica el 55% de las personas cree que la justicia favorece a los ricos y poderosos, cifra que coloca al país en la misma percepción que naciones con sistemas judiciales mucho más débiles.

Y lo más duro es que, al final, la gente común deja de creer en la justicia. En los barrios donde converso, los vecinos dicen con resignación: *“¿para qué voy a denunciar, si nunca pasa nada?”*. Ese silencio, ese desistir, es quizás el síntoma más grave, porque cuando la ciudadanía deja de recurrir a los tribunales, se abre espacio para la justicia por

La magistrada Virginia Calzada, ex presidenta de la Sala Constitucional, me decía en una entrevista que la gente ha perdido la noción de que la justicia es un proceso con reglas, y que esas reglas están para proteger a todos, incluso al acusado. Pero reconocía que también hay una crisis interna: un sistema atascado en normas rígidas, sin la agilidad que demanda el presente. Esa tensión entre garantías y eficiencia se ha convertido en un campo minado. *“La gente se empoderó y empezó a sentir que había un tribunal exactamente que los defendiera... eso demuestra que anteriormente sentían violaciones por parte del Estado a lo que eran sus derechos. Sin embargo, la congestión es terrible porque todo mundo consulta, y la Sala debería ser para cosas demasiado importantes para el país.”*

mano propia o, peor aún, para que el crimen organizado se convierta en árbitro de conflictos locales. En comunidades del Caribe he escuchado historias de narcos que “resuelven” disputas vecinales más rápido que un juez. Esa es la derrota más dolorosa: cuando el Estado pierde su función más básica.

Ahora bien, no todo está perdido. El Informe Estado de la Justicia 2025, que tuve en mis manos hace poco, plantea que el Poder Judicial aún conserva fortalezas: la independencia de sus jueces, el control constitucional robusto y una base de funcionarios comprometidos. El problema no es de valores, sino de gestión y de falta de visión estratégica. Si no se toman decisiones de fondo, el desgaste seguirá minando la legitimidad.

El Poder Judicial fue, es y debe seguir siendo un pilar democrático. Pero hoy está en desgaste, como un edificio antiguo que necesita restauración urgente. No basta con cambiar el techo o pintar las paredes: hay que reforzar los cimientos, modernizar la estructura y devolverle a la gente la confianza. Porque sin justicia, la democracia queda coja, y un país cojo no camina mucho antes de tropezar.

Hace unos meses me encontré en una soda de barrio a un viejo conocido, que hace años había tenido un pleito con un banco por un crédito mal manejado. Me contó que la demanda se presentó en 2015

**LA MORA JUDICIAL:
CUANDO LA JUSTICIA
LLEGA TARDE,
NO ES JUSTICIA**

y que apenas en 2023 había recibido una sentencia. Ocho años. Ocho años para que un juez dijera quién tenía la razón. Y aunque la resolución le fue favorable, me dijo con una sonrisa amarga: *“Jorge, ya de qué me sirve, si el daño ya está hecho”*. Esta frase refleja de forma brutal lo que significa la mora judicial en Costa Rica: un sistema que entrega respuestas tan tarde que, aunque lleguen, ya no reparan el daño.

Según el Informe Estado de la Justicia 2025, en promedio un proceso civil tarda más de 1.400 días en resolverse. Eso son casi cuatro años. En lo penal, dependiendo de la complejidad, puede extenderse entre dos y

seis años, y en lo contencioso-administrativo los tiempos pueden superar la década. El Poder Judicial mismo reconoce que en 2022 había más de 300.000 casos pendientes de resolución en distintos despachos, y que en algunos tribunales la mora superaba el 70%. Dicho en sencillo: la mayoría de los procesos no se resuelven a tiempo, y esa tardanza convierte la justicia en una promesa vacía.

La mora no es un tema técnico nada más, es un problema humano. Pienso en las familias que esperan un juicio laboral para que se les reconozcan salarios caídos, en mujeres que denuncian violencia doméstica y que ven cómo las medidas de protección llegan tarde, en comunidades que se enfrentan a megaproyectos sin que los tribunales ambientales logren dar respuesta oportuna. El retraso judicial significa vidas detenidas en un limbo legal. El Banco Mundial, en su informe sobre justicia en América Latina de 2021, fue claro: la demora en la resolución de los casos es uno de los factores que más golpea la confianza en la institucionalidad y desalienta la inversión extranjera. Porque ¿quién quiere poner su plata en un país donde no sabe si un contrato se podrá hacer cumplir en un tiempo razonable?

Lo más dramático se vive en lo penal. En 2023, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos reportó que el promedio para que un caso de crimen organizado llegue a sentencia firme supera los cinco años. En ese lapso, testigos cambian de residencia, pruebas se debilitan, víctimas pierden confianza y los imputados aprovechan vacíos para alargar procesos con apelaciones interminables. Un fiscal me lo dijo sin vueltas: *“En Costa Rica, al narco le sale barato litigar”*. Y esa frase encierra una verdad dolorosa: la lentitud del sistema termina siendo un aliado involuntario del crimen organizado.

Virginia Calzada comenta, *“Y uno dice: ¿por qué lo soltaron si lo acaban de agarrar con drogas? Pero es una cadena: muchas veces la prueba está contaminada o no se recabó bien, entonces cuando llega al juez no tiene alternativa más que soltar. Y claro, para la ciudadanía, eso se traduce en impunidad y desconfianza.”*

La mora también tiene un efecto perverso en la desigualdad. Los que tienen plata pueden pagar abogados que estiran los procesos, que presentan recursos, que apelan hasta lo inimaginable. Mientras tanto, la persona común se resigna a esperar. Un estudio de la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) mostró que en procesos civiles, las partes con representación privada logran reducir en un 30% los tiempos efectivos frente a quienes dependen de la defensa pública o litigan sin recursos. En otras palabras, la justicia tarda menos para quienes pueden pagarla. Y esa brecha alimenta la percepción de que el sistema no es solo lento, sino también clasista.

Pero, ¿cómo llegamos a este punto? El Estado de la Justicia 2022 ya advertía que el problema era estructural: un diseño procesal excesivamente formalista, saturación de casos sin filtros adecuados, falta de jueces y fiscales, y un rezago tecnológico enorme. Para ponerlo en perspectiva, mientras países como Chile o Colombia avanzaron en sistemas de gestión digital y audiencias en línea desde hace más de una década, en Costa Rica todavía en 2023 la mitad de los despachos no contaban con expediente electrónico completo. Eso significa que muchos procesos se pierden literalmente entre pilas de papel. El Poder Judicial intentó con el SICAC (Sistema de Gestión de Causas), pero su implementación ha sido lenta y desigual.

No es casual que la mora se haya convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Según la Encuesta Nacional de Seguridad y Justicia del PNUD 2023, un 62% de los costarricenses considera que la justicia llega tarde o nunca llega, y un 48% cree que eso fomenta la impunidad. Esa percepción se traduce en desconfianza hacia las instituciones. Y la desconfianza es veneno para la democracia, porque cuando el ciudadano no cree en la justicia, deja de acudir a ella, o peor aún, empieza a ver con buenos ojos las soluciones autoritarias que prometen rapidez a cualquier costo.

Ahora bien, tampoco se trata de desconocer que el Poder Judicial ha hecho esfuerzos. En 2022 se aprobó un plan de modernización para reducir la mora en un 15% hacia 2026, con medidas como la reestructuración de

despachos, el uso de audiencias virtuales y la contratación de más personal técnico. Sin embargo, los resultados todavía no se sienten. En la práctica, los tribunales siguen saturados. En materia de familia, por ejemplo, un divorcio contencioso puede tardar hasta tres años, y una disputa por custodia más de dos años. ¿Qué significa eso para los hijos en medio de esos procesos? Que pasan años en incertidumbre, sin una decisión firme que les garantice estabilidad emocional y material.

La mora judicial también tiene costos económicos gigantescos. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica estimó en 2023 que los retrasos en procesos civiles y comerciales le cuestan al país alrededor del 1,2% del PIB anual, al frenar inversiones, aumentar riesgos de contratos incumplidos y encarecer litigios. Eso equivale a casi \$800 millones de dólares al año que se esfuman por culpa de un sistema ineficiente. Y si sumamos el costo humano —vidas en suspenso, derechos postergados, víctimas re victimizadas— el precio es incalculable.

En mis recorridos por barrios de San José, Limón o Guanacaste, lo que más me impresiona es el desencanto. Una señora en Pavas me lo resumió con crudeza: *“Aquí el juez llega tarde, pero el narco nunca falla en cobrar”*. Esa comparación, brutal pero cierta, ilustra cómo la mora judicial no solo afecta expedientes, sino que alimenta un terreno fértil para que el crimen organizado gane legitimidad. Porque si el Estado no responde, otro llenará ese vacío.

GOBERNANZA FRÁGIL, PROCESOS LENTOS Y CONFIANZA CIUDADANA EN CAÍDA

Hace unos años, en una charla en la Universidad de Costa Rica, un estudiante me lanzó una pregunta que me dejó dándole vueltas por semanas: *“Don Jorge, ¿usted*

La frase que más resuena cuando uno analiza la mora judicial es la que usó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia contra Honduras: *“Justicia tardía es justicia denegada”*. Costa Rica, que tanto ha defendido los derechos humanos en foros internacionales, corre el riesgo de caer en esa trampa si no enfrenta de raíz este problema. No basta con reconocer la mora como un mal histórico, hay que tratarla como lo que es: una crisis de legitimidad que amenaza el corazón de nuestro Estado de derecho.

confía en el Poder Judicial?”. No me lo dijo con ironía, sino con la seriedad de alguien que, apenas entrando a la vida adulta, ya percibía una fractura en la columna que sostiene nuestra democracia. Mi respuesta, sincera, fue que confiaba en la institución como pilar del Estado de derecho, pero que también reconocía que esa confianza estaba cada vez más golpeada por la lentitud, por la falta de transparencia y por una gobernanza que parece anclada en otra época.

Esa desconfianza no es una percepción aislada. Según la Encuesta Nacional de Cultura Política del CIEP-UCR (2023), apenas un 27% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, una caída de más de 20 puntos en la última década. En contraste, en los años noventa, la confianza superaba el 60%. Esa pérdida progresiva de legitimidad no es producto de un solo evento, sino del desgaste acumulado de procesos lentos, fallos contradictorios, casos mediáticos mal manejados y una ciudadanía que percibe que la justicia está hecha para pocos.

Uno de los factores centrales es la gobernanza frágil dentro del mismo Poder Judicial. Aunque la Corte Suprema de Justicia es la cabeza del sistema, el modelo de elección de magistrados ha estado bajo la lupa por su excesiva dependencia de negociaciones políticas en la Asamblea Legislativa. En 2022, el Informe Estado de la Justicia advirtió que en Costa Rica la

designación y reelección de magistrados se ha convertido en un espacio de “trueque político” donde pesan más las alianzas partidarias que los méritos profesionales. Esa dinámica mina la independencia judicial y proyecta la imagen de un sistema capturado por intereses externos.

“El sistema judicial está atrapado en su propia burocracia, y eso genera desconfianza en la gente.”

Gloria Navas, Diputada

La fragilidad también se refleja en la incapacidad de respuesta ante los escándalos. Recordemos el caso del “cementazo” en 2017, donde se cuestionó la actuación de magistrados y jueces en la tramitación de recursos

vinculados a importaciones de cemento. Aunque algunos funcionarios fueron sancionados, la percepción ciudadana fue que la justicia no logró limpiarse del todo. Según un sondeo de CID-Gallup en 2018, un 68% de los costarricenses creía que el Poder Judicial había encubierto o protegido intereses en ese caso. Ese golpe aún resuena, porque muestra lo difícil que le resulta al sistema depurarse desde adentro.

La lentitud procesal, de la que hablamos en la sección anterior, tiene un correlato directo en la gobernanza: un modelo administrativo que parece diseñado para otro siglo. El Estado de la Justicia 2025 identificó más de 40 órganos internos de coordinación y toma de decisiones, con competencias traslapadas, lo que genera un laberinto burocrático que frena las reformas. Un juez de San Carlos me lo explicó en palabras simples: *“Aquí para cambiar una aguja, se necesita que tres comisiones y una subcomisión lo discutan”*. Esa rigidez administrativa no solo alarga los procesos, sino que también debilita la capacidad de innovación en un momento en que el país exige agilidad y respuestas modernas.

A nivel internacional, los organismos multilaterales han sido claros. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló en su reporte de 2021 sobre justicia en América Latina que “la falta de mecanismos efectivos de gobernanza interna en los poderes judiciales reduce la confianza y la percepción de imparcialidad”. Costa Rica, que históricamente ha presumido de tener uno de los sistemas judiciales más sólidos de la región, ya aparece en

“En Costa Rica solemos atribuir los problemas a las leyes, pero son humanos: aunque existe un sistema sólido de defensa de derechos, la falta de visión, reformas y voluntad política hace que la justicia no responda con eficacia.”

Virginia Calzada,
ex Presidenta de la Sala Constitucional

retroceso. En el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, el país cayó del puesto 25 al 32 a nivel global en apenas cinco años, principalmente por el deterioro en los indicadores de justicia civil y penal.

Lo que más preocupa es cómo este deterioro se traduce en la vida diaria de la gente. En barrios como Desamparados, Guararí o Limón, los vecinos dicen con crudeza: *“Aquí la justicia no existe”*. No es que no haya tribunales o jueces, sino que sus decisiones llegan tarde o no se cumplen. En un recorrido por Guararí, un líder comunal me contó que en su barrio los desalojos por invasión tardan años, mientras los problemas de violencia doméstica quedan atrapados en trámites interminables. La ausencia de respuestas oportunas del Estado genera un vacío que otros actores —desde las bandas criminales hasta las asociaciones vecinales improvisadas— terminan llenando.

Esa sustitución de la justicia formal por mecanismos informales es un signo grave de debilitamiento institucional. Según el Informe Latinobarómetro 2023, un 42% de los costarricenses considera aceptable resolver conflictos “por mano propia” cuando la justicia no responde. Esa cifra, aunque preocupante, no sorprende cuando vemos comunidades donde el crimen organizado ofrece “resoluciones rápidas”, sea para cobrar una deuda, “proteger” un territorio o dirimir un pleito entre vecinos. El costo es que la violencia se normaliza y la autoridad del Estado se erosiona.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando la ciudadanía percibe que la justicia no solo es lenta, sino también selectiva? El problema se agrava. Casos de corrupción de alto perfil, como el de la Trocha Fronteriza o el de Cochinilla, han tardado años en avanzar en los tribunales, mientras que delitos menores se tramitan con mayor rapidez. Esa asimetría alimenta la narrativa de que “la justicia es dura con el débil y suave con el poderoso”. Y aunque los jueces insisten en que los plazos obedecen a la complejidad de los casos, para la opinión pública la impresión es otra: que hay dos varas para medir.

La confianza ciudadana es un recurso que, una vez perdido, cuesta décadas recuperar. Costa Rica enfrenta hoy el reto de reconstruir esa credibilidad en un contexto donde la polarización política y el auge del populismo punitivo hacen cada vez más difícil defender el valor de las instituciones. El PNUD, en su informe sobre democracia en América Latina (2022), advirtió que cuando la ciudadanía percibe que los poderes judiciales no son confiables, se incrementa la aceptación de “soluciones de mano dura” incluso a costa de sacrificar derechos. El ejemplo de El Salvador, con su estado de excepción permanente, aparece como un espejo inquietante para nuestro país.

No todo está perdido, claro. Hay esfuerzos que buscan revertir esta tendencia. En 2023, la Corte Suprema aprobó un plan de transparencia que incluye la publicación en línea de las votaciones de magistrados, el acceso digital a sentencias completas y la obligación de rendir cuentas anuales. Son pasos valiosos, aunque insuficientes si no se acompañan de reformas más profundas en gobernanza y agilidad procesal. El desafío no es menor: se trata de que la ciudadanía vuelva a sentir que el Poder Judicial es suyo, que no es un ente lejano, lento y atrapado en sus propias formalidades, sino un pilar vivo y cercano de la democracia.


Cuando aquel estudiante me preguntó si confiaba en el Poder Judicial, me obligó a mirarme en el espejo de mi propia experiencia y de lo que escucho en cada esquina del país. Hoy sigo creyendo en la importancia de defender la independencia judicial, pero no cierro los ojos ante la realidad: la confianza está en caída libre, y solo la valentía de enfrentar las reformas estructurales podrá revertirla. De lo contrario, corremos el riesgo de que el pueblo tico empiece a ver la justicia como un lujo inalcanzable y no como un derecho fundamental.



Capítulo 8

Justicia Atrapada en el Pasado

**La Encrucijada
de la Justicia Costarricense.**



“No podemos seguir con un código procesal pensado para otro tiempo, urge una reforma que agilice la justicia.”

Francisco Dall’Anese Ruiz, ex Fiscal General de Costa Rica

Hace unos meses, mientras caminaba por los pasillos de los Tribunales de San José, me topé con una escena que parecía sacada de otro tiempo. Cajas de cartón repletas de expedientes amontonadas en los pasillos, secretarías luchando por encontrar un documento entre montañas de papel, y un abogado con cara de frustración que me confesó que llevaba tres horas esperando que localizaran un expediente “perdido” en archivo. Esa imagen, tan común en nuestra institucionalidad, es la muestra más gráfica de un sistema judicial que aún vive en el siglo XX, cuando la sociedad costarricense y los desafíos de la criminalidad ya se mueven a toda velocidad en el siglo XXI.

Los informes del Estado de la Justicia 2022 y 2025 son claros en señalarlo: la modernización del aparato judicial no puede esperar más. El rezago en leyes, procedimientos y herramientas tecnológicas está asfixiando a un sistema que, aunque sólido en independencia, se ha quedado atrás en eficiencia. Según el último informe del Programa Estado de la Nación, el 80% de los jueces y juezas encuestados reconocen que la mora procesal no se resolverá sin una reforma profunda de normas procesales y de gestión.

Uno de los grandes problemas es que seguimos operando con códigos y procedimientos que tienen más de tres décadas, diseñados para una sociedad mucho menos compleja. El Código Procesal Civil, por ejemplo, se reformó en 2018 con la promesa de agilizar procesos, pero lo cierto es que en la práctica muchos de sus cambios se han topado con un aparato judicial que carece de recursos humanos y tecnológicos para hacerlos realidad. El Estado de la Justicia 2025 señala que, pese a la reforma, los juicios civiles aún tardan en promedio más de 700 días en resolverse. La promesa de agilidad quedó atrapada en la maraña de trámites y en la resistencia al cambio de una estructura acostumbrada a la lentitud.

El problema se extiende a lo penal. En Costa Rica, un proceso por crimen organizado puede prolongarse durante cinco a siete años, lo que debilita la capacidad del Estado para sancionar efectivamente a las redes de narcotráfico. En comparación, países como Chile o Uruguay han logrado reducir los tiempos de resolución penal a menos de tres años mediante reformas procesales orales y sistemas de gestión digital. La lentitud no es solo un tema de eficiencia: es un incentivo directo a la impunidad. Cada día que un proceso se alarga es un día ganado por los delincuentes, que siguen operando mientras esperan una sentencia que puede tardar casi una década.

Un ex Magistrado me dijo en una entrevista que la justicia costarricense está atrapada en una “cultura del trámite” que convierte cada paso en un ritual interminable. Poner un sello, trasladar un expediente de una oficina a otra, esperar semanas para que se notifique una resolución... pasos que podrían resolverse en minutos con un sistema digital integrado.

El Banco Mundial, en su informe Doing Business, ha insistido en que Costa Rica ocupa posiciones rezagadas en el indicador de cumplimiento de contratos, precisamente porque un proceso judicial comercial puede tardar años en completarse. Mientras tanto, inversionistas y empresas

pierden confianza en el sistema, afectando directamente la competitividad del país.

La falta de modernización no solo se ve en los procesos, sino también en las leyes. Muchos delitos que hoy marcan la vida de las comunidades,

como el cibercrimen, el lavado digital de dinero o la trata de personas en plataformas online, no tienen una regulación clara o están tipificados de manera insuficiente. El Informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) subraya que la capacidad de respuesta de los sistemas judiciales frente a delitos tecnológicos es clave para contener el crimen organizado transnacional. Sin embargo, en Costa Rica seguimos discutiendo reformas parciales mientras el delito avanza a la velocidad de un clic.

Un funcionario del Ministerio Público me contaba la paradoja de tener fiscales formados en temas de delitos cibernéticos que no cuentan con legislación adecuada para sostener casos en tribunales. *“Es como tener un piloto entrenado, pero sin avión”*, me dijo con ironía. Y tenía razón. Ahí está otra grieta: la desconexión entre la formación de profesionales y el marco legal que los respalda.

Lo más doloroso es que esta lentitud y desactualización impacta directamente a la ciudadanía común. Una madre que denuncia violencia doméstica y espera medidas cautelares rápidas no puede depender de un sistema que tarda semanas en notificar una orden de alejamiento. Un joven emprendedor que demanda el incumplimiento de un contrato digital no puede esperar dos años para que le reconozcan su derecho. La modernización no es un lujo, es una necesidad urgente que toca la vida diaria de miles de costarricenses.

El Informe Estado de la Justicia 2025 también deja claro que, aunque se han hecho esfuerzos, estos son insuficientes. La implementación del expediente judicial electrónico avanza a paso de tortuga: en 2024 sólo un 30% de los procesos en primera instancia se estaban tramitando digitalmente. Mientras tanto, el resto seguía atascado en expedientes de papel, dependientes de notificaciones físicas y de archivos desbordados. Esta lentitud tecnológica coloca a Costa Rica muy por detrás de países como Colombia o Brasil, que han logrado una cobertura casi total de expedientes digitales en los últimos años.

Lo que los informes gritan, con datos y con advertencias, es que no basta con pequeños parches. Se necesita una reforma judicial integral que abarque desde la actualización de leyes hasta la transformación de procesos y la inversión en tecnología. No se trata solo de comprar computadoras o capacitar jueces; se trata de repensar la justicia como un servicio al ciudadano, con tiempos razonables, accesible y adaptado a la realidad de un país que ya no es el mismo de los años ochenta.

Recuerdo que en un foro sobre justicia y democracia, un joven estudiante de Derecho me preguntó: *“Don Jorge, ¿usted cree que todavía hay tiempo de salvar el sistema?”*. Yo le respondí que sí, pero solo si dejamos de ver la reforma como una amenaza y la asumimos como una oportunidad. La justicia que tarda no sirve; la justicia que no evoluciona se convierte en un obstáculo. Y lo que más necesitamos hoy es un sistema judicial que recupere la confianza ciudadana a través de procesos ágiles, leyes modernas y tecnología al servicio de la gente.

La modernización no es un capricho de académicos ni un discurso vacío de informes internacionales. Es un clamor ciudadano, un reclamo de miles de costarricenses que sienten que el sistema les da la espalda. Y si no atendemos ese clamor, lo que está en juego no es solo la eficiencia de los tribunales, sino la credibilidad misma de nuestra democracia.

Hace poco, mientras conversaba con una jueza en Cartago, me contó que tenía en su escritorio un expediente de casi 7.000 folios sobre un caso de crimen

organizado. Era tan grande que lo llamaban “el monstruo”. Cada vez que debía buscar un documento, tenía que pasar horas revisando folios, apuntes y firmas a mano. Lo irónico, me decía, es que en su casa pagaba facturas por celular, usaba banca en línea y hasta hacía video llamadas con su nieta que estudiaba en el extranjero. *“¿Cómo es posible, Jorge, que mi vida personal sea más digital que mi trabajo en la justicia?”*, me preguntó con resignación.

TECNOLOGÍA, DATOS Y DIGITALIZACIÓN: UN CAMINO URGENTE

Ese contraste lo retrata todo: un país que presume de ser un polo de innovación tecnológica en Centroamérica, pero con un sistema judicial que aún depende de papeles, sellos y notificaciones físicas. El Informe Estado de la Justicia 2025 señala que, a pesar de múltiples intentos, el proceso de digitalización judicial apenas cubre un 35% de los expedientes a nivel nacional. Eso significa que dos tercios de los procesos siguen atascados en carpetas de papel, sujetos a pérdidas, demoras y duplicaciones.

La brecha tecnológica no es un detalle menor, es un problema estructural que afecta la calidad y la credibilidad de la justicia. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un expediente electrónico reduce en un 40% los tiempos de notificación y en un 30% los costos administrativos. Mientras tanto, en Costa Rica, una notificación de una simple audiencia puede tardar hasta 15 días en llegar a las partes porque depende de un mensajero judicial que recorra barrios y comunidades.

“La digitalización no es un lujo, es la única vía para que el sistema judicial responda con prontitud y transparencia.”

Raúl Rivera,
Especialista en Ciberseguridad

El mundo ya entendió que la justicia no puede ser ajena a la digitalización. En Estonia, por ejemplo, el 99% de los procesos judiciales se tramitan en línea, y el tiempo promedio para resolver un caso civil es de 85 días. En Chile, la reforma judicial impulsada desde 2005 permitió implementar un sistema oral y digital en los procesos penales, lo que redujo drásticamente la mora y aumentó la transparencia. Nosotros, en cambio, seguimos discutiendo si el expediente digital es seguro, mientras el crimen organizado utiliza criptomonedas, inteligencia artificial y redes encriptadas para operar en la sombra.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que los sistemas judiciales que no incorporen tecnología estarán

“Costa Rica está llena de innovación, pero no se incentiva ni se agiliza el uso de mecanismos de protección. Falta digitalización real en los procesos, falta cultura administrativa y judicial para aplicarlos con rapidez. Si seguimos con sistemas lentos y con poca tecnología, la gente no va a confiar ni va a registrar sus creaciones.”

Carlos Arguedas Vargas,
Abogado, Experto en Propiedad Intelectual

condenados a quedar rezagados frente a la sofisticación del crimen. Y aquí es donde más duele: en Costa Rica tenemos talento humano para hacerlo. Miles de jóvenes programadores, ingenieros en sistemas y expertos en datos egresan de nuestras universidades cada año, pero el Poder Judicial no ha logrado integrarlos en una estrategia de transformación digital robusta.

Un funcionario del Consejo Superior del Poder Judicial me confesó que los intentos de digitalización suelen naufragar en el mar de la burocracia y la resistencia al cambio. “*Compramos software, capacitamos personal, y al final alguien dice que mejor volvamos al papel porque es más seguro*”, me relataba con frustración. Esa resistencia cultural es quizás el mayor obstáculo, porque la tecnología no es solo comprar computadoras, es cambiar la forma en que entendemos y gestionamos la justicia.

Los datos son otro punto crítico. El Estado de la Justicia 2022 evidenció que gran parte de las estadísticas judiciales en Costa Rica se generan todavía de forma manual, con márgenes de error enormes y sin interoperabilidad entre sistemas. No hay una base de datos integrada que permita seguir un caso de principio a fin, ni tampoco información en tiempo real sobre cuántas causas están

en trámite, cuántas se resolvieron o cuántas se archivaron. Sin datos confiables, es imposible diseñar políticas públicas efectivas o asignar recursos con criterio técnico.

En un foro organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), escuché a una investigadora afirmar que *“Costa Rica tiene más datos sobre el clima que sobre su sistema judicial”*. Y es cierto. Sabemos cuántos milímetros de lluvia cayeron en Limón el mes pasado, pero no sabemos cuántos procesos de violencia doméstica esperan resolución en los tribunales de esa misma provincia. Ese vacío no es sólo estadístico, es un vacío de derechos.

El costo de no digitalizar se mide en vidas y oportunidades. Una mujer que denuncia a su agresor necesita medidas cautelares inmediatas, pero el retraso en las notificaciones físicas puede costarle la vida. Un empresario que espera la resolución de un litigio comercial puede perder contratos internacionales por la incertidumbre. Un joven acusado injustamente puede pasar años con su vida en pausa mientras se resuelve su caso. En todos estos ejemplos, la falta de tecnología es un factor que perpetúa la injusticia.

El camino urgente, entonces, es doble: digitalizar los procesos y gestionar la justicia basada en datos. Y aquí hay ejemplos inspiradores. En Colombia, la implementación del Sistema de Gestión Judicial “Justicia XXI” permitió integrar todas las etapas procesales en una plataforma digital, con acceso público para mayor transparencia. En Uruguay, la firma digital y las audiencias virtuales redujeron en más de un 50% los tiempos de respuesta en casos civiles durante la pandemia.

Costa Rica no puede seguir rezagada. El Estado de la Justicia 2025 propone una hoja de ruta clara: inversión sostenida en infraestructura tecnológica, interoperabilidad entre sistemas judiciales y administrativos, capacitación continua en competencias digitales y, sobre todo, un cambio cultural que rompa la dependencia del papel. El reto es enorme, pero no imposible.

Hace unas semanas, un joven pasante del Poder Judicial me enseñó en su celular una aplicación que él mismo había diseñado para organizar expedientes de práctica. *“Si me dejaran, yo podría hacer algo así para el juzgado”*, me dijo con una sonrisa tímida. Esa anécdota me confirmó que el talento está ahí, lo que falta es la decisión política y la visión estratégica para aprovecharlo.

La justicia digital no es una utopía, es una necesidad urgente. Cada día que seguimos operando con papeles y sellos, aumentamos la brecha entre lo que la ciudadanía espera y lo que el sistema puede dar. Y esa brecha, tarde o temprano, se convierte en desconfianza. Lo que está en juego no es solo la eficiencia, sino la legitimidad de una de las instituciones más importantes de nuestra democracia.

El futuro de la justicia costarricense pasa por abrazar la tecnología y los datos como aliados, no como amenazas. No se trata de reemplazar jueces por algoritmos ni de deshumanizar el sistema, sino de poner las herramientas digitales al servicio de la gente. Porque en un país donde casi todos llevamos un celular en el bolsillo, no puede ser que la justicia siga atrapada en montañas de papel.

Hace unos meses estuve en una charla en la Universidad de Costa Rica. Entre el público había estudiantes de Derecho, trabajadoras sociales, policías judiciales y hasta una jueza penal de San Ramón que había sacado la tarde para escuchar y debatir. La discusión giraba en torno a un tema que, aunque parece trillado, es el corazón de todo: cómo logramos una justicia pronta y cumplida en Costa Rica. Una joven estudiante levantó la mano y dijo: *“¿No cree usted que el problema es que la justicia no nos pertenece? La vemos como algo ajeno, como un trámite en manos de otros, cuando debería ser parte de nuestro pacto como sociedad”*. Esa intervención me marcó, porque sintetizaba en una frase lo que muchos sentimos: la justicia se ha vuelto un laberinto técnico, alejado de la gente.

HACIA UN PACTO SOCIAL POR UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA

El Estado de la Justicia 2025 es contundente: más del 70% de las personas entrevistadas considera que el Poder Judicial tarda demasiado en resolver los casos y que eso mina la confianza ciudadana. Y no es un detalle menor. En un país que abolió el ejército hace más de siete décadas, la legitimidad de la democracia depende de que la justicia sea

confiable. Si la gente deja de creer en los tribunales, el tejido social se resquebraja y abre espacio para discursos autoritarios, punitivos y simplistas, como los que ya estamos viendo crecer en la región.

Pero hablar de justicia pronta no puede quedarse en un discurso vacío. Es necesario aterrizar en acciones concretas y, sobre todo, en un pacto social que trascienda a los gobiernos de turno. No se trata de que un presidente anuncie una reforma judicial como si fuera su bandera personal, ni de que los magistrados lancen comunicados aislados. Se trata de un acuerdo nacional donde participen la academia, la empresa privada, los sindicatos, las organizaciones sociales, la prensa y la ciudadanía.

“Si no hay un pacto social amplio para reformar la justicia, los cambios serán parches que se desgastan pronto.”

Rodolfo Brenes, Abogado Penalista

Ese pacto debería reconocer primero que la justicia no es solo un tema de tribunales. Es también un asunto de acceso. Hoy en día, el 40% de los hogares más pobres de Costa Rica no logra costear un abogado cuando lo necesita, según datos del Programa Estado de la Nación. ¿De qué sirve tener derechos si no podemos ejercerlos? Una justicia pronta debe ser también una justicia accesible, gratuita o de bajo costo para quienes más lo necesitan.

La historia de Ana, una mujer jefa de hogar en Limón, lo ilustra. Ella denunció a su expareja por violencia doméstica y esperó más de seis meses para que se resolviera una medida cautelar. En el camino, tuvo que gastar plata que no tenía en pasajes para ir a los tribunales y pagarle a una vecina para que cuidara a sus hijos. “*La justicia me salió más cara que la comida de mi casa*”, me dijo con amargura. Ana no quiere estadísticas ni discursos: quiere protección oportuna. Y como ella hay miles de personas que sienten que el sistema está diseñado para quienes tienen recursos, no

para quienes más lo necesitan.

El Banco Mundial ha señalado que la lentitud y la inaccesibilidad de la justicia en América Latina generan un “impuesto oculto” que frena el desarrollo económico. Cada juicio que se alarga representa contratos incumplidos, inversiones detenidas y familias en incertidumbre. En Costa Rica, la mora judicial significa que un proceso civil tarda en promedio 3,2 años en resolverse y un caso penal complejo puede extenderse más de una década. En ese tiempo, se destruyen empresas, se rompen familias y se pierden vidas.

Un pacto social por la justicia tendría que abordar estas realidades con valentía. No basta con hablar de modernizar leyes o de digitalizar expedientes, aunque eso es crucial. El pacto debe comprometer a todos los sectores a sostener la inversión en el Poder Judicial, blindarse contra la manipulación política y exigir resultados verificables. En Chile, tras la gran reforma procesal penal, se establecieron indicadores públicos de desempeño que cualquier ciudadano puede consultar en línea. En Uruguay, la Defensoría de Oficio garantiza acceso gratuito a abogados de calidad para quienes no pueden pagar. Estos son ejemplos de cómo un pacto puede materializarse en instituciones y prácticas concretas.

Ahora bien, todo pacto requiere confianza. Y aquí enfrentamos una paradoja: ¿cómo construir confianza en una institución en la que la mayoría de la ciudadanía desconfía? La respuesta está en reconocer errores, abrir espacios de diálogo y rendir cuentas de manera proactiva. El Informe de Transparencia Internacional 2023 mostró que un 62% de los costarricenses cree que los jueces son susceptibles de influencias externas. Este dato duele, pero debe ser el punto de partida. No podemos aspirar a un pacto social ignorando que la percepción de corrupción existe. Solo la transparencia radical, con datos abiertos y procesos auditables, puede revertir esa percepción.

En una conversación reciente con un empresario de la Cámara de Comercio, me dijo algo que me quedó sonando: “Jorge, yo puedo competir con cualquiera en el mercado, pero no puedo competir con la incertidumbre de un juicio que se alarga diez años”. Lo que pedía no era privilegios, sino reglas claras y tiempos razonables. Lo mismo escuché de

una líder comunal en Desamparados: “Queremos que la policía haga su trabajo y que los jueces no suelten a los delincuentes por tecnicismos”. En ambos casos, lo que se demanda es certeza, coherencia y prontitud.

Un pacto social por la justicia debe también incorporar una dimensión educativa. La ciudadanía necesita comprender cómo funciona el sistema, cuáles son sus límites y por qué es importante respetar los procesos. En Guatemala, la ausencia de esa pedagogía ha permitido que surjan narrativas que justifican la violencia extrajudicial. Costa Rica no puede correr ese riesgo. Tenemos que formar a nuestras juventudes en el valor de la legalidad, en el respeto a los derechos humanos y en la importancia de resolver conflictos por la vía institucional.

Al final, lo que está en juego no es solo la eficiencia de un sistema, sino la esencia de nuestra democracia. Sin justicia pronta y cumplida, la paz social es una ilusión. Por eso, este pacto no puede esperar. Necesitamos compromisos claros: plazos máximos para los procesos, defensores públicos fortalecidos, jueces con recursos adecuados, tecnología al servicio de la gente y un sistema de evaluación constante.

En una mesa de trabajo reciente en la Asamblea Legislativa, alguien preguntó qué sería un éxito en la reforma judicial. Yo respondí sin dudar: *“El éxito será cuando una ciudadana de cualquier rincón del país sienta que la justicia le responde, sin importar su apellido, su cuenta bancaria o su provincia”*. Porque solo entonces podremos decir que hemos honrado nuestro pacto social.


Costa Rica ya ha demostrado en el pasado que es capaz de reinventarse: abolimos el ejército, apostamos por la educación pública, nos convertimos en líderes en energías renovables. Ahora nos toca hacer lo mismo con la justicia. El pacto social por una justicia pronta y cumplida no es un lujo, es una urgencia histórica. Porque cada día que pasa sin resolver este reto, crece la frustración, se profundiza la desigualdad y se erosiona la fe en nuestra democracia. Y esa, sería la peor de las derrotas.



Capítulo 9

La Voz de los Derechos en Costa Rica

Sala IV, la Guardiana Silenciosa.



*‘El gran logro de la Sala fue
empoderar a la gente, decirle que
los derechos no se los da el Estado,
son suyos por naturaleza.
El Estado lo que hace es garantizar
que se respeten’.*

Virginia Calzada, ex Presidenta de la Sala IV

Recuerdo la primera vez que entré a la Sala Constitucional, la famosa “Sala IV”. Era un edificio sobrio, sin la pompa de los parlamentos europeos ni la imponencia de las cortes supremas que uno ve en Washington o en París. Pero apenas crucé el umbral, sentí ese peso histórico que tienen los lugares donde se decide el rumbo de un país. Afuera, en los pasillos, se veían ciudadanos comunes esperando que su voz fuera escuchada: una mujer que reclamaba atención médica, un estudiante que peleaba por una beca, un adulto mayor que exigía su pensión. Esa es la esencia de la Sala IV: el lugar donde la gente, sin distinción, puede alzar la voz frente al Estado.

Esa visión cambió la historia de Costa Rica. Antes de 1989, teníamos mecanismos de control de constitucionalidad dispersos y poco efectivos. Fue con la creación de la Sala Constitucional, dentro del Poder Judicial pero con independencia funcional, que el país dio un salto hacia una democracia más robusta. Lo curioso es que la Sala no nació sin resistencia. La propia Corte Suprema de Justicia se opuso en su momento a la idea de un tribunal constitucional separado, como ocurría en otros países. Al final, se llegó a un punto intermedio: la Sala IV sería parte del Poder Judicial, pero con su propia ley orgánica y autonomía en sus decisiones. Era, en cierta forma, un injerto dentro del árbol judicial costarricense, pero uno que con el tiempo se convirtió en rama central.

Desde su inicio, la Sala IV fue un fenómeno. En el primer año recibió poco más de 7.000 recursos de amparo y hábeas corpus. Treinta años después, la cifra superaba los 20.000 casos anuales, según estadísticas del Poder Judicial. Esa avalancha refleja dos cosas: por un lado, la enorme confianza ciudadana en la Sala, y por otro, la incapacidad del resto del aparato estatal para garantizar derechos de manera preventiva. Si cada año decenas de miles de personas deben acudir a la Sala para hacer valer derechos básicos como salud, educación o pensiones, algo no está funcionando bien en la gestión ordinaria.

Pero la confianza de la gente fue inmediata. Doña Virginia me contaba una anécdota reveladora: Rodolfo Piza, uno de los primeros magistrados, solía recordar cómo una vendedora de lotería le dijo que no sabía exactamente qué hacía la Sala Constitucional, *“pero lo único que sé es que ahora me siento más segura”*. Esa sensación de respaldo ciudadano, de tener una institución que escucha al más humilde, es el corazón del éxito de la Sala IV.

La función pedagógica también fue clave. La Sala no se limitó a dictar resoluciones, sino que se dedicó a educar a la población en derechos fundamentales. Hubo campañas de educación legal popular que explicaban cómo presentar un recurso de amparo sin necesidad de abogado, cómo escribirlo en una simple hoja de papel, incluso con lápiz. Esa democratización del acceso a la justicia convirtió a la Sala en un puente directo entre el pueblo y la Constitución.

En términos comparativos, organismos como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han señalado que los tribunales constitucionales son esenciales para garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado y proteger los derechos frente a mayorías políticas circunstanciales. Costa Rica se adelantó en la región al crear una Sala con esas características. Mientras en Guatemala o El Salvador los recursos constitucionales estaban atados a procesos engorrosos y a veces manipulados políticamente, aquí cualquier ciudadano podía tocar la puerta de la Sala y ser escuchado.

Sin embargo, este éxito vino acompañado de tensiones. Doña Virginia

lo reconocía: *“En ocasiones, la Asamblea Legislativa usó la consulta legislativa como un mecanismo para que fuera la Sala la que asumiera el costo político de las leyes”*. Así ocurrió, por ejemplo, con el debate del Tratado de Libre Comercio, cuando la consulta a la Sala se convirtió en una válvula de escape para los diputados que no querían cargar con el costo de validar o rechazar el tratado.

En otras ocasiones, los roces fueron con los tribunales contencioso-administrativos, sobre todo en casos como Crucitas, donde hubo resoluciones contradictorias entre la Sala y la jurisdicción ordinaria. Eso muestra la delgada línea entre lo constitucional y lo administrativo, un terreno donde los límites no siempre son claros.

Pese a esas tensiones, la Sala IV consolidó una jurisprudencia robusta que ha inspirado incluso a otros países. Fallos sobre acceso a medicamentos, derechos ambientales y libertad de expresión han sido citados en foros internacionales. La Sala, por ejemplo, fue pionera en reconocer el derecho a un ambiente sano como parte de los derechos fundamentales, mucho antes de que ese tema se pusiera de moda en el ámbito global.

Pero quizá lo más simbólico es la relación entre la Sala y la cultura democrática costarricense. En países donde la gente teme al Estado, donde enfrentarse a un funcionario es impensable, la Sala IV se convirtió en un espacio de dignidad. En Guatemala, donde también trabajé, vi cómo ciudadanos aceptaban abusos estatales con resignación porque no tenían instancias a dónde acudir. En Costa Rica, en cambio, aprendimos que un recurso de amparo podía frenar un abuso, obligar a una institución a responder y hasta limitar al propio presidente de la República.

Hoy, a más de tres décadas de su creación, la Sala enfrenta nuevos retos. El Informe Estado de la Justicia 2022 advertía que la congestión de casos amenaza con paralizar su capacidad de respuesta. En 2021, el tiempo promedio de resolución de un recurso de amparo superaba los cuatro meses, y en algunos casos complejos el trámite se extendía más allá del año. Es decir, lo que nació como un instrumento de prontitud corre el riesgo de convertirse en otro laberinto de mora judicial.

La voz de doña Virginia resuena aquí como advertencia: *“Hay que tener cuidado con las reformas a la Constitución. No se trata de abrir portillos que pongan en riesgo derechos adquiridos. Si algo debe mantenerse intocable es la función de la Sala como defensora de los derechos fundamentales”*. Esa defensa no es un lujo académico, es lo que garantiza que la democracia costarricense no se deslice hacia autoritarismos disfrazados de eficiencia.

En un país sin ejército, la Sala Constitucional es nuestra trinchera más poderosa. Nació en 1989 como un experimento dentro del Poder Judicial y se convirtió en guardiana de derechos, en voz de los que no tienen voz. Su historia es la de un país que se atrevió a decir que la Constitución no era un papel decorativo, sino un contrato

vivo entre el pueblo y el Estado. Y aunque hoy enfrenta desgaste, mora y críticas, sigue siendo la instancia donde un ciudadano puede enfrentarse al Leviatán estatal con nada más que una hoja de papel en la mano.

Esa, al final, es la grandeza de la Sala IV: haber democratizado la Constitución, haberla bajado del pedestal y puesto en manos de la gente.

EL PODER CIUDADANO DEL AMPARO Y EL HÁBEAS CORPUS

Una tarde cualquiera, hace unos años, me encontré en San José con una señora mayor que vendía lotería frente a la Catedral. Llevaba un bolso lleno de papeles arrugados

y, con la confianza propia de quien ya no teme hablar, me contó que uno de esos papeles era un recurso de amparo que había escrito ella misma. *“Aquí, don Jorge, yo puse lo que me estaba pasando. No usé abogado, nada, solo escribí lo que me salía del corazón porque en la Caja no me querían dar la medicina”*, me dijo. Ese pedazo de papel, escrito a mano con bolígrafo azul, era suficiente para que su voz llegara a la Sala Constitucional. Ahí está la grandeza de nuestro sistema: la democratización radical del derecho.

El recurso de amparo y el hábeas corpus son los instrumentos que han hecho que la Sala IV se convierta en un verdadero tribunal del pueblo. No se necesita plata, no se necesita traje ni corbata, no se necesita un abogado que cobre honorarios imposibles. Basta la convicción de que un derecho ha sido violado. Según datos del Poder Judicial, más del 90% de los recursos que llegan a la Sala son precisamente amparos y hábeas

corpus, lo que demuestra que son las herramientas principales con que la ciudadanía se enfrenta al Estado.

El hábeas corpus, por ejemplo, es tan antiguo como el derecho mismo. Su nombre, en latín, significa literalmente “traer el cuerpo” y nació en Inglaterra como un escudo contra los abusos de los monarcas. En Costa Rica, este mecanismo encontró nueva vida con la creación de la Sala IV.

Un detenido puede presentar un recurso incluso desde la cárcel, y el tribunal tiene la obligación de revisar si su privación de libertad es legal o si se violaron garantías en el proceso. No son pocos los casos en los que la Sala ha corregido excesos policiales o judiciales, liberando a personas que fueron arrestadas sin pruebas suficientes o retenidas más tiempo del que permite la ley.

‘El amparo se convirtió en la herramienta más democrática que existe, porque cualquiera puede acudir sin abogados.’

El recurso de amparo, por su parte, es la joya de la corona. Permite a cualquier persona reclamar por

la violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. Aquí es donde la Sala ha marcado hitos históricos: ordenando a la Caja Costarricense de Seguro Social entregar medicamentos de alto costo a pacientes con VIH en los noventa; obligando al Estado a garantizar acceso a la educación para estudiantes con discapacidad; reconociendo el derecho a un ambiente sano en casos ambientales emblemáticos.

**Carlos Arguedas Vargas,
Abogado, Experto en Propiedad Intelectual**

Un dato que siempre me impresiona: en 2021, según el Informe Estado de la Justicia, la Sala Constitucional resolvió más de 22.000 recursos de amparo, de los cuales alrededor del 60% fueron declarados con lugar, parcial o totalmente. Eso significa que en más de la mitad de los casos la Sala encontró que, efectivamente, instituciones públicas habían violado derechos ciudadanos. Es un espejo incómodo: la mitad del tiempo, el

propio Estado estaba fallándole a la gente. El impacto humano de estas decisiones es profundo. Recuerdo la historia de un niño en Guanacaste que necesitaba un trasplante de médula ósea y cuya familia, agotada por la burocracia, acudió a la Sala. El recurso fue acogido, y la Caja tuvo que garantizar el procedimiento. Esa resolución no solo salvó la vida de un niño, también reafirmó la idea de que la Constitución no es un texto lejano, sino un salvavidas concreto para la gente común.

A nivel internacional, organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido la importancia del amparo costarricense como modelo. Mientras en países vecinos como Nicaragua o El Salvador los recursos constitucionales son controlados por gobiernos autoritarios que los usan para perseguir opositores, en Costa Rica se convirtieron en un instrumento de empoderamiento ciudadano. Es una diferencia abismal: aquí un campesino puede enfrentarse al presidente con una hoja de papel, y ganar.

Por supuesto, este poder ciudadano también ha traído críticas. Algunos sectores consideran que el abuso del amparo ha convertido a la Sala en una especie de “superadministrador” del Estado, obligando a instituciones a hacer lo que no pueden por falta de recursos. Por ejemplo, hay resoluciones que ordenan la compra inmediata de medicamentos carísimos o la construcción de aulas escolares sin presupuesto disponible. Esa tensión entre la garantía de derechos y la viabilidad financiera del Estado es uno de los debates más vivos sobre el futuro de la Sala.

Doña Virginia Calzada, con la serenidad que la caracteriza, lo planteó así:

“La Sala no da derechos, los reconoce. Si el Estado no puede cumplirlos, el problema no es de la Sala, es del modelo de gestión pública que no logra estar a la altura de la Constitución”.

Esa frase resume bien el dilema: la Constitución establece un estándar alto de dignidad humana, y la Sala obliga a que se cumpla, aunque incomode a los gobiernos de turno.

No podemos olvidar, además, el efecto cultural. La gente sabe que puede acudir al amparo cuando siente que se le atropella. Eso genera una ciudadanía más consciente de sus derechos y menos dispuesta a tolerar abusos. La señora de la lotería, el estudiante de Limón que reclama su beca, el paciente en San Ramón que exige su tratamiento: todos ellos son prueba de que la Sala se convirtió en el espacio donde el ciudadano de a pie se enfrenta al Leviatán burocrático.

Sin embargo, la saturación es un riesgo real. Según datos de la propia Sala, cada magistrado recibe cientos de casos por semana, y aunque existe un cuerpo de letrados que filtra y elabora proyectos de resolución, la presión es enorme. Hay quienes advierten que si no se racionaliza el uso del amparo, la Sala podría colapsar bajo su propio peso. De hecho, en algunos años los recursos pendientes de resolver superaron los 40.000 expedientes acumulados, una cifra que pone en duda la promesa de justicia pronta.

A pesar de ello, el prestigio de la Sala se mantiene alto. Encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) han mostrado que, en comparación con la Asamblea Legislativa o con los partidos políticos, la Sala Constitucional conserva niveles de confianza relativamente sólidos, aunque también en descenso en la última década. No es casualidad: mientras la política partidaria suele ser percibida como corrupta o lejana, la Sala es vista como un espacio donde el ciudadano puede ganar.

El hábeas corpus y el amparo son, en el fondo, la materialización de la idea de que en Costa Rica nadie está por encima de la Constitución. Ni el presidente, ni un ministro, ni un policía, ni un director de hospital. Y eso, en un continente marcado por autoritarismos, militarismos y dictaduras recientes, es un lujo histórico que debemos cuidar con celo.

Cuando salí de aquella conversación con la señora de la lotería, entendí algo que tal vez nunca había procesado del todo: el verdadero poder de la

Sala IV no está en los magistrados de toga negra ni en sus sentencias de páginas interminables. Está en la posibilidad de que cualquier ciudadano, sin importar su condición, pueda escribir un reclamo en un papel arrugado y, con eso, cambiar su destino. Ese, al final, es el poder ciudadano del amparo y el hábeas corpus: recordarnos que la Constitución vive en las manos de la gente.

ENTRE LA DEFENSA DE DERECHOS Y LA PRESIÓN POLÍTICA

En más de una ocasión, sentado frente a un café en San Pedro, he escuchado a políticos y funcionarios quejarse con cierto fastidio de la Sala IV. “*Es que no nos dejan gobernar*”, me dicen, como si los magistrados fueran una piedra en el zapato de su proyecto político. Esa incomodidad revela el poder real que tiene el tribunal: cuando se convierte en la última barrera contra decisiones que pueden violentar derechos, inevitablemente choca con quienes, desde la política, buscan imponer su agenda.

La historia reciente de la Sala está llena de ejemplos donde la defensa de los derechos fundamentales se ha visto enfrentada a presiones políticas intensas. Recuerdo el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) en 2007. La Asamblea Legislativa consultó el proyecto y la Sala IV tuvo que pronunciarse sobre su constitucionalidad. El país estaba dividido, la calle ardía en protestas, y los magistrados tenían en sus manos una decisión que podía desatar una crisis institucional. Al final, la Sala dio luz verde, pero el costo fue alto: sectores sociales los acusaron de plegarse

al poder económico y político, mientras que sus defensores resaltaban que habían garantizado el debido proceso.

*“La Sala Constitucional
ha sido escudo de
derechos, pero cada
vez siente más la
presión de la política.”*

Fernando Ferraro, ex Ministro de Justicia

Episodios como este evidencian la tensión permanente entre un tribunal que debe ser garante de la Constitución y un sistema político que busca márgenes de maniobra. La ex Presidenta de la Sala, Virginia Calzada, lo explicó en una entrevista: *“A veces los diputados consultaban no porque dudaran de la constitucionalidad, sino porque no querían cargar con el costo político de aprobar una ley polémica. Entonces nos lo pasaban a nosotros, y la Sala asumía el golpe”*. Ese traslado de responsabilidades ha sido una constante: el Parlamento, en lugar de debatir de frente con la ciudadanía, le lanza la papa caliente a los magistrados.

El problema es que este “uso instrumental” de la Sala la coloca en el centro del juego político. Y cuando los tribunales constitucionales se politizan, corren el riesgo de perder su legitimidad. El Informe Estado de la Justicia 2022 ya advertía que la creciente judicialización de la política en Costa Rica estaba generando roces institucionales. Según el informe, en ese año más de 200 consultas legislativas llegaron a la Sala, muchas de ellas sobre temas que podían haberse resuelto políticamente sin necesidad de involucrar al tribunal.

“La Sala IV no solo protege derechos, también carga con el peso de decisiones políticas enormes. Ahí muchas veces se traslada el costo de leyes impopulares o de reformas necesarias que los diputados no quieren asumir. Esa presión es real y termina convirtiendo a la Sala en árbitro de la política, además de la Constitución.” Confirma Carlos Corrales, Licenciado en Derecho Legal

La Sala, sin embargo, también ha mostrado independencia en momentos críticos. Uno de los más sonados fue el caso de la reelección presidencial. En 2003, con un voto polémico, permitió la reelección indefinida, abriendo la puerta para que expresidentes como Óscar Arias volvieran al poder. Para algunos, fue una claudicación frente a las élites políticas; para otros, una interpretación legítima del principio democrático. Lo cierto es que esa resolución cambió el curso de nuestra historia política y dejó cicatrices que aún discutimos.

Y no es solo Costa Rica. La experiencia comparada muestra que las cortes constitucionales están siempre bajo presión. En Polonia y Hungría, por ejemplo, gobiernos populistas han cooptado a sus tribunales para

legalizar reformas que erosionan la democracia. En Nicaragua, la Corte Suprema avaló la reelección indefinida de Daniel Ortega, consolidando su régimen autoritario. Frente a esos escenarios, el caso costarricense todavía aparece como un bastión de independencia relativa. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project ubica a Costa Rica como uno de los países latinoamericanos con mayor respeto a los límites del poder, aunque con señales de deterioro en la confianza ciudadana hacia las instituciones.

Aquí la pregunta central es cómo equilibrar la defensa de derechos con la presión política. Porque no podemos olvidar que los magistrados no son seres aislados en una torre de marfil: viven en el país, leen los periódicos, sienten la temperatura social. Hay quienes les exigen blindarse por completo, como si la justicia pudiera dictarse en el vacío. Pero también es cierto que sin sensibilidad política las sentencias corren el riesgo de ser irrelevantes o impracticables. En mi experiencia, lo más valioso ha sido cuando la Sala logra sostener una narrativa coherente con los valores fundacionales del país: educación gratuita, salud universal, libertad de expresión, ambiente sano. Cada vez que una resolución refuerza esos pilares, la ciudadanía percibe que la Sala cumple su papel. El problema aparece cuando las sentencias parecen responder más a coyunturas políticas que a principios constitucionales.

Un ejemplo claro es el del derecho a un ambiente sano. En casos como el de Crucitas, la Sala frenó proyectos extractivos que amenazaban ecosistemas, ganándose aplausos de ambientalistas y críticas de sectores empresariales. Ese balance es incómodo, pero necesario. Porque, ¿de qué sirve una Constitución si no es para limitar el poder en beneficio de la dignidad humana?

La presión política sobre la Sala no solo viene del Ejecutivo o de la Asamblea. También hay presión social, mediática y empresarial. Cada vez que un fallo toca intereses poderosos —pienso en concesiones de infraestructura, contratos millonarios o regulaciones financieras—, la Sala se convierte en blanco de ataques. Algunos magistrados han recibido amenazas directas, otros han sido objeto de campañas mediáticas para desacreditarlos. La

independencia judicial, en esos momentos, deja de ser una abstracción y se convierte en un acto de coraje personal. No obstante, la confianza ciudadana en la Sala ha empezado a mostrar grietas. Encuestas del CIEP-UCR señalan que entre 2010 y 2022 la confianza en el Poder Judicial pasó de un 60% a menos del 40%. Aunque la Sala aún conserva mejores niveles que otros órganos, el descenso es claro. Y la percepción de politización es uno de los factores que más la golpea. La gente quiere creer que la Sala es un refugio neutral, no un actor más en la disputa partidaria.

Al final, creo que lo que está en juego es algo mucho más grande que una sentencia específica o una coyuntura electoral. Se trata de la credibilidad del pacto social que nos sostiene como nación. Si la ciudadanía deja de creer en la independencia de la Sala Constitucional, el golpe no será solo institucional: será cultural, afectando la idea misma de que la ley puede ser un escudo contra el abuso del poder.

Por eso, cada resolución de la Sala debe ser consciente de su doble dimensión: jurídica y política. No en el sentido de someterse a la política, sino de reconocer que cada fallo impacta la vida real de la gente y la estabilidad del sistema democrático. Defender los derechos fundamentales, incluso frente a la presión política, es la tarea más difícil y, al mismo tiempo, la más noble de los magistrados.

Hace poco, en un foro académico, un joven estudiante de derecho me preguntó si confiaba en que la Sala mantendría su independencia en los próximos años. Le respondí que sí, pero con matices. Porque la independencia no es un estado garantizado: es una conquista diaria, frágil, que depende de la integridad de quienes llevan la toga y de la vigilancia de la ciudadanía.

La Sala Constitucional, al fin y al cabo, es hija de la democracia costarricense, pero también su guardiana. Y como toda guardiana, está condenada a vivir bajo el asedio constante de quienes quieren torcer la Constitución para su beneficio. Mientras exista la tensión entre la defensa de los derechos y la presión política, sabremos que la Sala sigue viva, cumpliendo su papel en la encrucijada más delicada de cualquier democracia: decirle “no” al poder cuando el poder se excede.



Capítulo 10

El Muro Resquebrajado

**La Fragilidad de la Policía
en la Lucha por la Seguridad.**



“La fuerza pública necesita más que uniformes y patrullas: requiere inteligencia y profesionalización.”

Juan José Andrade, ex Director de la Fuerza Pública

He caminado muchas veces por las calles de San José de noche, esas cuadras que cambian radicalmente después de las ocho. Los comercios cierran, los buses escasean, y la ciudad se transforma en un terreno distinto. En esos momentos, la presencia o ausencia de una patrulla marca la diferencia entre sentir seguridad o vulnerabilidad. Y ahí, en esa primera línea, están nuestras policías. Pero lo cierto, y no podemos seguir maquillándolo, es que las fuerzas policiales en Costa Rica enfrentan un panorama desarticulado, fragmentado y con recursos limitados que apenas les permiten sostener la fachada de un sistema en control.

En el imaginario colectivo, la policía es ese muro que nos protege del caos. Pero cuando se mira de cerca, se descubre un cuerpo debilitado por la falta de inversión, por la burocracia que los asfixia y por una estructura que más parece un rompecabezas sin coordinar. Hoy, Costa Rica cuenta con más de 15 cuerpos policiales distintos, desde la Fuerza Pública hasta la Policía de Control de Drogas, pasando por la Policía Penitenciaria, la Policía de Tránsito, la de Migración y varias más. Cada una con su propio mando, su propia normativa, sus propios intereses, y muchas veces con nula comunicación entre sí.

El Informe Estado de la Nación 2023 y también el Estado de la Justicia 2022 señalaron que esa dispersión es uno de los grandes cuellos de botella de la seguridad nacional. La falta de coordinación provoca duplicidades de funciones, choques de competencias y, lo más grave, vacíos que los grupos criminales aprovechan. Como me decía en una entrevista Freddy Montero, antropólogo y politólogo:

Esa realidad no solo limita la seguridad interna: también erosiona nuestra reputación internacional como destino turístico y como país atractivo para la inversión.

A esto se suma la carencia crónica de recursos. La Fuerza Pública, que concentra la mayor cantidad de oficiales, ronda los 14.000 efectivos, según datos del Ministerio de Seguridad Pública de 2022. Puede sonar a mucho, pero si lo dividimos entre la población y el territorio, significa que hay menos de 3 policías por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los estándares recomendados por la ONU, que sugieren alrededor de 5. Y ni hablar de la distribución: mientras en la Gran Área Metropolitana se pueden ver patrullas con relativa frecuencia, en las zonas fronterizas o costeras los oficiales deben cubrir extensiones imposibles, enfrentando al narcotráfico prácticamente con las manos vacías.

“Tenemos cuerpos policiales totalmente desarticulados entre sí, con poca comunicación y sin una estrategia conjunta que prevenga efectivamente el ingreso de personas o mercancías peligrosas”.

He conversado con policías que trabajan en frontera norte. Me cuentan que muchas veces no tienen gasolina suficiente para patrullar más de unas cuantas horas al día. Los radios de comunicación se caen, los chalecos antibalas son obsoletos, y los turnos son extenuantes. No es raro que un mismo oficial cumpla hasta 16 horas seguidas porque no hay suficiente personal para cubrir los relevos. En esas condiciones, ¿cómo pedirles que sean la primera línea contra bandas que manejan millones de dólares, armas de alto calibre y redes internacionales de apoyo?

La desarticulación y los recursos limitados también tienen un impacto directo en la moral de los oficiales. Según la Encuesta de Clima Organizacional del MSP (2021), más del 60% de los policías declararon sentirse desmotivados por los bajos salarios y la falta de equipo adecuado. El salario base de un oficial ronda los ₡400.000 colones mensuales, apenas por encima del salario mínimo, una cifra que resulta ridícula si se compara con el nivel de riesgo al que se exponen a diario. Al final, muchos policías terminan buscando segundos trabajos o renuncian, dejando a la institución con una rotación constante que impide consolidar experiencia.

Pero no todo es cuestión de plata. También hay un problema de visión estratégica. En las últimas dos décadas, Costa Rica ha invertido millones en operativos visibles: bloqueos de comunidades, despliegues masivos de patrullas, retenes en carreteras. Son acciones que generan impacto mediático, que sirven para mostrar que “se está haciendo algo”. Pero en la práctica, rara vez logran desarticular redes criminales de fondo. En contraste, los programas de inteligencia e investigación avanzada reciben presupuestos marginales. La Policía de Control de Drogas (PCD), por ejemplo, cuenta con menos de 200 agentes para enfrentar un negocio que mueve miles de millones de dólares al año.

Lo más paradójico es que la ciudadanía percibe esa debilidad. La Encuesta Nacional de Seguridad 2022, del CIEP-UCR, reveló que más del 70% de los costarricenses cree que la policía no tiene la capacidad para frenar la criminalidad. Esa falta de confianza erosiona el contrato social: cuando la gente siente que el Estado no la protege, empieza a buscar alternativas, desde la justicia por mano propia hasta la tolerancia hacia “soluciones” más autoritarias. No es casualidad que cada vez más se escuchen voces que proponen “mano dura” o incluso la creación de un ejército, olvidando que nuestra tradición civilista es uno de los mayores orgullos nacionales.

Frente a esa realidad, me viene siempre una reflexión amarga: hemos dejado que la policía cargue sola con la expectativa de mantenernos seguros, pero no le damos ni las herramientas, ni la formación, ni el respaldo político necesario. Queremos resultados de primer mundo con presupuestos de tercer mundo. Queremos prevención del delito,

pero seguimos amarrados a modelos de represión mediática. Queremos policías motivados, pero les pagamos como si fueran reemplazables.

Lo que está en juego no es menor. Una policía desarticulada y limitada no solo afecta la seguridad diaria: debilita el Estado de derecho en su conjunto. Los grupos criminales lo saben y lo aprovechan. Y mientras tanto, la ciudadanía se acostumbra a vivir en un ambiente de miedo y desconfianza.

La primera línea de defensa de un país no puede estar improvisando. Si de verdad queremos que nuestra policía sea un muro y no un espejismo, necesitamos reconocer las grietas y actuar. Porque en las calles, cuando se apagan las luces de los comercios y las familias se recogen en sus casas, lo único que queda entre el ciudadano común y el crimen organizado es ese oficial cansado, mal pagado, con un chaleco vencido y una radio que a veces ni funciona. Y aun así, con todo en contra, decide ponerse de pie y patrullar. Esa es la paradoja de nuestra seguridad: un heroísmo cotidiano sostenido sobre estructuras frágiles.

Cuando uno conversa con policías veteranos, esos que llevan más de veinte años patrullando barrios y fronteras, hay una frase que se repite con frecuencia: “Nos

EL RETO DEL PROFESIONALIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA POLICIAL

piden resultados de primer mundo, pero seguimos trabajando con herramientas del siglo pasado”. Y esa afirmación refleja de forma cruda el gran dilema que enfrenta Costa Rica: cómo transformar a su policía en una institución profesional, especializada e inteligente, capaz de enfrentar los retos del crimen organizado, sin perder el carácter comunitario que ha sido históricamente su sello.

No basta con tener más patrullas en las calles ni con llenar de uniformes los parques. La seguridad moderna exige otra cosa: análisis de datos, investigación criminal seria, agentes formados en criminología, en derecho, en psicología, en manejo de crisis. Exige también equipos de inteligencia con capacidad de infiltrarse en redes, de anticipar movimientos, de

rastrear flujos financieros, de seguir armas y drogas antes de que crucen nuestras fronteras. Y sin embargo, esa dimensión de la labor policial en Costa Rica ha sido subestimada por décadas, casi como si la inteligencia fuera un lujo y no una necesidad.

Recordemos algunos datos. La Policía de Control de Drogas (PCD), el brazo especializado en narcotráfico, cuenta con menos de 200 agentes en activo, según cifras del Ministerio de Seguridad Pública (2023). Para ponerlo en perspectiva, Panamá, con un territorio similar, destina más de 1.500 agentes exclusivamente al combate del narcotráfico, apoyados por sistemas de vigilancia aérea y marítima mucho más robustos. Mientras tanto, en Costa Rica, los mismos agentes deben cubrir desde el seguimiento de cargamentos en puertos hasta investigaciones complejas de lavado de dinero. Y aún con esa precariedad, en 2022 lograron decomisar más de 71 toneladas de cocaína, un récord histórico según datos de Naciones Unidas. Imagínese lo que podrían lograr con una estructura sólida de inteligencia.

La profesionalización tampoco es un tema nuevo. Desde el año 1996, cuando se creó la Academia Nacional de Policía, se estableció el compromiso de formar oficiales con estándares técnicos, éticos y comunitarios. Pero el sueño se quedó corto. Hoy, muchos cursos básicos duran apenas seis meses, un tiempo insuficiente para preparar a alguien que va a enfrentar bandas armadas, mediar conflictos en comunidades o manejar tecnología de vigilancia. En contraste, países como Chile o Colombia exigen procesos de formación de dos a tres años, con especialización continua. ¿Cómo esperar que nuestros oficiales tengan las mismas capacidades con programas de formación tan limitados?

Lo he visto en carne propia en recorridos por comunidades de Limón, Pavas o Desamparados. Oficiales jóvenes, recién egresados, que llegan a patrullar con poco más que un par de semanas de práctica real. Se enfrentan a grupos que conocen el terreno, que manejan redes de comunicación encriptadas, que incluso los monitorean a ellos. La asimetría es evidente. Y lo más doloroso es que muchos de esos muchachos entraron a la institución con la ilusión de servir al país, pero terminan quemándose en pocos años, frustrados porque sienten que el sistema no los preparó para

la realidad.

La inteligencia policial, además, ha estado marcada por una visión reactiva. Es decir, se actúa después de que ocurre el delito. Se investiga el homicidio cuando ya hay un muerto, se rastrea el cargamento cuando ya salió del puerto, se busca al sospechoso cuando ya huyó. Muy pocas veces se trabaja en prevenir. Y no se trata de falta de talento: he conocido investigadores brillantes, analistas que podrían estar en cualquier agencia internacional. Pero carecen de las herramientas tecnológicas mínimas. El Estado de la Justicia 2022 fue contundente: gran parte de los sistemas informáticos de seguridad en Costa Rica tienen más de 15 años de atraso, con plataformas que no se comunican entre sí y bases de datos que siguen funcionando de manera fragmentada.

Un ejemplo claro es el control migratorio. Mientras países vecinos ya operan con sistemas biométricos integrados, Costa Rica todavía enfrenta caídas frecuentes en sus plataformas de identificación. Esto genera filas interminables en aeropuertos y fronteras, pero, peor aún, abre brechas que pueden ser aprovechadas por criminales. En 2021, la Contraloría General de la República advirtió que el país llevaba más de una década sin invertir de manera sostenida en tecnología para el control de ingresos y salidas. Y eso no es un detalle menor: en un país que se ha convertido en puente de drogas hacia Europa y Estados Unidos, ese vacío es un riesgo nacional.

La falta de profesionalización también se traduce en otro fenómeno delicado: la corrupción interna. No son pocos los casos en los que policías terminan colaborando con bandas criminales, ya sea por presión, por miedo o por simple necesidad económica. Según el Informe de Transparencia Internacional 2022, el bajo salario y la ausencia de controles efectivos colocan a la Fuerza Pública en una situación vulnerable frente al soborno. Y aquí la formación juega un papel clave. Un oficial bien preparado, con una carrera profesional clara, con salarios dignos y acompañamiento psicológico, es mucho menos proclive a ceder ante la tentación o el miedo.

Pero ojo: no todo es negativo. Hay señales de esperanza que muestran lo

que podríamos lograr si de verdad apostamos por la profesionalización. En 2021, Costa Rica participó en un programa de cooperación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que capacitó a decenas de policías en investigación de lavado de dinero y cibercriminalidad. Los resultados fueron inmediatos: en menos de un año se lograron identificar y congelar más de \$15 millones en activos vinculados al narcotráfico. Ese es el poder de la formación y la inteligencia aplicada.

Entonces, ¿qué modelo necesitamos? La respuesta es clara: uno que combine lo comunitario con lo especializado. Costa Rica no puede renunciar a la esencia de su policía cercana al ciudadano, que dialoga, que media, que evita la confrontación. Pero tampoco puede seguir ignorando que el crimen al que se enfrenta es cada vez más sofisticado.

El futuro de nuestra seguridad depende de esa dualidad: policías que conozcan a la comunidad por su nombre, pero que también tengan acceso a software de análisis criminal, a redes de cooperación internacional y a entrenamientos continuos de alto nivel.

El reto está servido. O damos el salto hacia una policía profesional e inteligente, con formación y tecnología a la altura, o seguiremos condenados a apagar incendios, siempre un paso atrás, mientras el crimen organizado sigue jugando con ventaja. Y en esa carrera, lo que está en juego no es solo la seguridad de las calles, sino el futuro mismo de nuestra democracia.

Cuando pienso en esto, recuerdo las palabras de un comisionado retirado que entrevisté hace unos años: *“Un policía sin inteligencia es un bombero sin agua. Puede correr hacia el incendio, pero no podrá apagarlo”*. Y es que la seguridad de nuestro país no se mide en cuántos uniformes llenan las calles, sino en cuánta capacidad real tenemos de anticiparnos al crimen.

**PREVENIR ANTES QUE
REACCIONAR:
LA GRAN DEUDA**

Hay un dicho en Costa Rica que usamos con resignación: *“es que aquí todo se arregla después del golpe”*. Y esa frase, que aplica para carreteras, hospitales y hasta para

la burocracia, describe con precisión el drama de la seguridad pública. Durante décadas hemos sido un país más enfocado en reaccionar al delito que en prevenirlo, en llenar cárceles después de los crímenes, en desplegar operativos después de la tragedia. Y lo más duro de aceptar es que llevamos años acumulando datos, advertencias y diagnósticos que dicen lo mismo: la gran deuda de nuestro sistema no es castigar, es prevenir.

Si algo ha demostrado la evidencia internacional es que cada colón invertido en prevención evita múltiples colones en represión. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018), las políticas preventivas en seguridad logran un retorno hasta tres veces mayor que las puramente punitivas. En Costa Rica, sin embargo, seguimos gastando la mayor parte del presupuesto en patrullas, cárceles y procesos judiciales. En 2022, el Ministerio de Hacienda reportó que más del 80% de los recursos destinados a seguridad y justicia se invirtieron en acciones reactivas, mientras que menos del 10% se dirigieron a programas comunitarios, educativos o de prevención temprana.

El resultado está a la vista. En barrios como La Carpio, Los Cuadros o Cieneguita, donde el narcotráfico recluta a adolescentes desde los 12 años, las intervenciones preventivas han sido mínimas. Recuerdo una conversación con una madre de familia en Limón que me decía: *“Yo sé que los narcos le dan plata a mi hijo para mandados, pero ¿qué hago si aquí no hay becas, no hay canchas, no hay trabajo?”*. Esa impotencia resume la desconexión del Estado con las comunidades más vulnerables. Mientras se montan operativos espectaculares para incautar droga en el puerto, dentro de los barrios los jóvenes siguen viendo en el crimen la única oportunidad real de ascenso económico.

“El narcomenudeo es el motor de la violencia diaria, y mientras no trabajemos en prevención, seguiremos reaccionando tarde.”

Tania Molina, Criminóloga

La prevención, además, no es solo cuestión de programas sociales. Implica un cambio profundo en la forma en que concebimos la seguridad. En vez de medir el éxito por cuántas armas decomisamos o cuántos delincuentes encarcelamos, deberíamos medirlo por cuántos jóvenes se mantuvieron en la escuela, por cuántos barrios lograron reducir la violencia sin necesidad de represión, por cuántas comunidades fortalecieron su

tejido social. Esa es la visión que países como Islandia han implementado con éxito. Allí, desde los años noventa, sustituyeron la política de castigo por una estrategia masiva de prevención en deporte, cultura y participación comunitaria. El resultado fue un descenso del consumo de drogas entre adolescentes del 42% al 7% en apenas dos décadas, según datos de la European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, 2021).

En Costa Rica, cada tanto hemos coqueteado con iniciativas parecidas, pero siempre terminan abandonadas por falta de continuidad. El Programa Integral de Prevención (PIP) del Ministerio de Seguridad arrancó en 2014 con la promesa de llevar talleres de música, deporte y liderazgo a zonas de alto riesgo. Tres años después, el presupuesto se había reducido a la mitad y los monitores contratados de forma temporal fueron despedidos. Lo mismo pasó con “Espacios Seguros”, un proyecto que intentaba rehabilitar canchas y parques en comunidades violentas: tras un par de años quedó en el olvido. La deuda no es que no lo intentamos, la deuda es que nunca nos tomamos en serio la prevención como política de Estado.

El Estado de la Nación 2022 fue claro al advertir que Costa Rica está atrapada en un círculo vicioso: más violencia genera más presión política por respuestas rápidas, y esas respuestas se traducen en más cárcel y más policía, pero no en soluciones estructurales. Es un círculo que alimenta la

percepción de inseguridad, porque aunque se detenga a un grupo criminal, otro surge inmediatamente para ocupar su lugar. Y en ese proceso, lo único que cambia es que los barrios se sienten cada vez más abandonados y desconfiados del Estado.

La deuda también se refleja en la poca coordinación institucional. La seguridad preventiva no es solo responsabilidad de la Fuerza Pública, pero pareciera que nunca hemos logrado articular esfuerzos entre ministerios. Educación, Cultura, Deporte, Trabajo y Seguridad trabajan como islas, cada uno con proyectos pequeños, sin una estrategia común. En 2021, la Defensoría de los Habitantes señaló que más de 40 programas de prevención de violencia juvenil estaban dispersos en distintas instituciones, sin coordinación ni evaluación real de resultados. ¿Cómo podemos esperar impacto si cada quien camina por su lado?

Un elemento central de la prevención es el trabajo comunitario. Y ahí tenemos un vacío enorme. En muchos barrios, la policía es vista como una fuerza externa, que llega solo a detener o reprimir, pero no como un aliado para construir convivencia. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020) mostró que en Costa Rica menos del 30% de la población confía en que la policía pueda resolver conflictos comunitarios de forma pacífica. Eso refleja que hemos descuidado el enfoque de policía comunitaria, que alguna vez fue nuestra gran fortaleza.

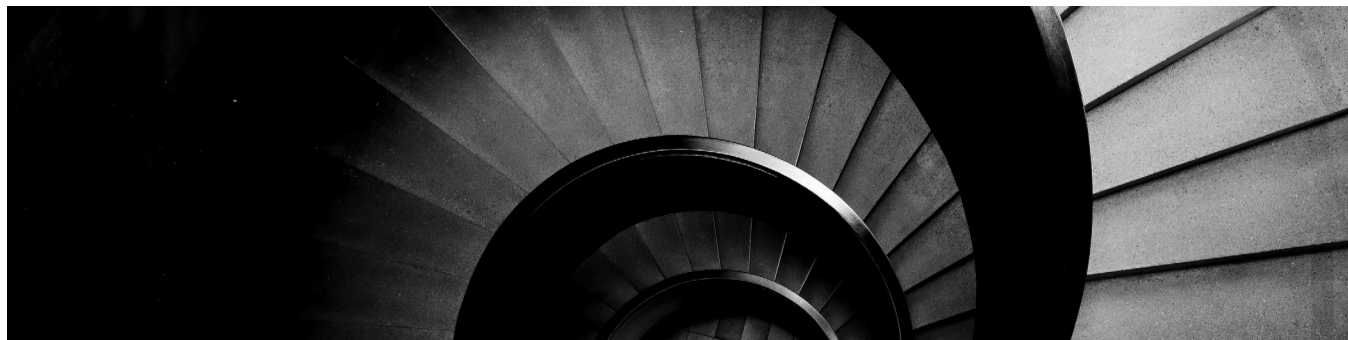
Y aquí hay una paradoja dolorosa: Costa Rica abolió el ejército en 1948 con la visión de invertir en educación y desarrollo humano, convencida de que esa era la verdadera forma de garantizar paz y seguridad. Pero en los últimos veinte años hemos retrocedido hacia una lógica militarizada del control interno, con operativos espectaculares y discursos punitivos. Es como si hubiéramos olvidado que nuestra mayor fortaleza histórica fue la prevención, no la represión.

He caminado barrios donde el miedo se palpa en cada esquina. Jóvenes que no salen después de las seis de la tarde, madres que esconden a sus hijos cuando escuchan motos, vecinos que ya no denuncian porque sienten que no sirve de nada. Y lo que me queda claro es que ahí, más que

más patrullas, lo que hace falta es recuperar la esperanza. La seguridad empieza en la confianza, y la confianza se construye cuando el Estado está presente de manera constante, ofreciendo oportunidades, no solo castigos.

El reto es enorme, pero no imposible. Podemos reorientar la estrategia hacia la prevención si se atreve a tomar decisiones valientes. Necesitamos un pacto social que entienda que la cárcel no puede seguir siendo la única respuesta, que el fútbol en una cancha iluminada puede evitar más delitos que un operativo de cien policías, que una beca estudiantil puede salvar más vidas que un decomiso de droga. Y sobre todo, que la seguridad es un esfuerzo colectivo, donde cada comunidad, cada escuela, cada familia tiene un papel que jugar.

La gran deuda está ahí, visible y pendiente. O empezamos a prevenir de verdad, con políticas sostenidas, con coordinación institucional y con inversión seria en comunidades, o seguiremos corriendo detrás del crimen, siempre un paso atrás, reaccionando al golpe. El país que abolió el ejército hace 76 años no puede resignarse a vivir solo de la represión. La Costa Rica que soñamos debe volver a su raíz: creer que la paz se construye sembrando oportunidades antes de que el miedo florezca.



Capítulo 11

Una Hoja de Ruta en Duda

**La Historia Cíclica
de la Seguridad Costarricense.**



*‘La seguridad requiere continuidad
de políticas, no ocurrencias
sexenales que cambian con cada
gobierno.’*

Álvaro Ramos, Precandidato del PLN

Cuando en 2023 el gobierno lanzó la nueva Política Nacional de Seguridad 2023–2030, muchos respiraron con un aire de esperanza. Se decía que por fin tendríamos un documento guía, una hoja de ruta que nos sacara del círculo vicioso de violencia, improvisación y respuestas punitivas que han marcado las últimas décadas. Yo mismo recuerdo estar en la presentación oficial, escuchando a los jerarcas hablar de “visión integral”, de “prevención comunitaria” y de “coordinación interinstitucional”. Palabras grandes que resuenan bien en el papel, pero que despiertan dudas cuando uno las confronta con la realidad de los barrios donde el narco manda más que el Estado.

El documento, elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública, recoge cinco lineamientos principales: fortalecer las capacidades policiales, articular la acción institucional, modernizar la justicia penal, invertir en prevención social y mejorar la cooperación internacional. Nada de eso es nuevo, en verdad. Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010 venimos repitiendo los mismos principios. La diferencia ahora, al menos en el discurso, es que se reconoce explícitamente que la seguridad no se resuelve solo con más cárceles o más policías, sino con políticas sociales de largo plazo.

El Estado de la Nación 2023 fue categórico al señalar que la violencia homicida en Costa Rica alcanzó cifras históricas: 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que existen registros. Eso nos colocó por primera vez en el top cinco de América Latina, una región tristemente reconocida como la más violenta del mundo. En ese contexto, la Política Nacional de Seguridad tenía que ofrecer más que palabras bonitas; tenía que ser una brújula real, con metas claras y medibles.

Un aspecto que destaco del documento es que, por primera vez, se habla de la seguridad como un tema multidimensional. No se limita a la criminalidad, sino que reconoce que la inseguridad también nace de la exclusión social, del desempleo juvenil, de la desigualdad territorial y de la falta de oportunidades educativas. El diagnóstico es acertado: más del 60% de los privados de libertad en Costa Rica provienen de distritos catalogados como de alta vulnerabilidad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022). Es imposible hablar de seguridad sin hablar de pobreza.

Sin embargo, el gran desafío es que esas palabras se conviertan en acción. Porque cuando uno revisa el presupuesto asignado, se da cuenta de que seguimos atrapados en la lógica de siempre: más del 75% de los recursos de seguridad en 2024 se destinaron a gasto policial y carcelario, mientras que los programas de prevención recibieron menos del 15%, de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República. El desfase entre el diagnóstico y la inversión es evidente, y eso mina la credibilidad del plan.

En la práctica, la Política 2023–2030 establece metas específicas: reducir la tasa de homicidios a menos de 12 por cada 100.000 habitantes para 2030, duplicar los programas de prevención en escuelas y comunidades, modernizar la capacitación policial con enfoque en inteligencia y tecnología, y mejorar los tiempos de resolución judicial en un 25%. Son metas ambiciosas, pero la pregunta sigue siendo cómo se van a lograr en un país donde los cambios de gobierno suelen borrar lo que se hizo antes.

Aquí aparece uno de los problemas históricos de Costa Rica: la falta de continuidad institucional. Cada administración llega con su propio plan, su propia visión, y rara vez hay un hilo conductor. El narcotráfico, en cambio, sí tiene un proyecto de largo plazo. Las bandas criminales no piensan en periodos de cuatro años, piensan en décadas, en generaciones. Y ahí es donde nos están ganando la partida: mientras ellos se fortalecen con paciencia y estrategia, nosotros seguimos improvisando con parches electorales.

Recuerdo una visita que hice a Guanacaste, en un pequeño distrito donde los vecinos se organizaron para pedir más presencia policial. El jefe regional me confesó que tenía apenas seis patrullas para cubrir un territorio del tamaño de una provincia. *“Nosotros hacemos lo que podemos”, me dijo, “pero la prevención no depende de mí, sino de San José”*. Esa desconexión entre la política nacional y la realidad local es quizás el mayor obstáculo. No se puede diseñar seguridad desde oficinas en Zapote sin escuchar a quienes viven la violencia en carne propia.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha insistido en que las políticas de seguridad deben ser territorializadas: es decir, adaptarse a cada región y comunidad. No es lo mismo enfrentar la violencia en Limón, dominada por el narcotráfico transnacional, que en Alajuelita, donde el problema central es la exclusión social. Sin embargo, la Política Nacional todavía parece demasiado centralizada, con pocas herramientas para dar autonomía real a las comunidades.

Otra de las grandes promesas del documento es la inversión en inteligencia policial y tecnología. En un mundo donde el crimen organizado opera

con criptomonedas, drones y redes globales, nuestra policía aún depende en gran medida de información anónima y recursos limitados. El plan establece la creación de un Centro Nacional de Análisis Criminal, con sistemas integrados de datos y cooperación interinstitucional. Si se cumple, podría ser un salto cualitativo. Pero aquí, otra vez, el riesgo es que quede en el papel, como tantas veces ha pasado.

Lo que me preocupa más es que, pese a toda la retórica de prevención, seguimos usando la cárcel como primera respuesta. En 2023, Costa Rica alcanzó un nivel de hacinamiento penitenciario del 29%, según el Ministerio de Justicia y Paz. Eso significa que, a pesar de reconocer la necesidad de alternativas, seguimos llenando cárceles a un ritmo insostenible. La contradicción es evidente: ¿cómo vamos a hablar de reinserción y prevención si cada año destinamos millones de dólares a encerrar más gente, sin capacidad de rehabilitarla?

Y sin embargo, quiero rescatar algo positivo: la Política 2023–2030 al menos pone sobre la mesa el debate de la seguridad como responsabilidad compartida. Se insiste en la idea de que la ciudadanía, las comunidades y el sector privado tienen un papel que jugar. En un país donde históricamente hemos depositado toda la carga en el Estado, este es un recordatorio de que la seguridad es un bien colectivo. No se trata solo de policías en la calle, sino de vecinos organizados, de empresas que generan empleo digno, de escuelas que mantienen a los jóvenes lejos de las pandillas.

La política está escrita, los lineamientos están claros. El reto ahora es que no quede en letra muerta. Porque de nada sirve hablar de cooperación, prevención e inteligencia si, al final, lo único que se ve en los barrios es la misma patrulla que llega tarde, la misma cárcel saturada, la misma comunidad abandonada. Costa Rica no puede seguir posponiendo la coherencia entre lo que dice y lo que hace. El 2030 parece lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Y lo que decidamos hoy marcará si seguimos hundidos en la espiral de violencia o si, por fin, nos atrevemos a construir una seguridad que sea más que represión.

Hay una frase que escuché una vez de un viejo policía retirado en Limón y que siempre me ha quedado sonando: *“Un Estado que solo sabe reprimir es como un papá que solo pega chancletazos; tarde o temprano, los hijos dejan de respetarlo y solo le tienen miedo”*. Esa metáfora sencilla resume bien el dilema en que nos encontramos hoy. Costa Rica está atrapada en la eterna tensión entre reprimir el crimen con fuerza y prevenirlo desde la raíz. Y la verdad, aunque digamos que creemos en la prevención, los números muestran que seguimos apostándole a la represión como nuestro plato fuerte.

“Reprimir sin prevenir es sembrar violencia futura, hay que balancear las dos caras de la seguridad.”

Gustavo Mata, ex Ministro de Seguridad Pública

firmeza. Pero cuando todo el aparato se concentra en “apagar incendios”, se deja de lado el trabajo de prevención que evita que esos incendios se multipliquen. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio en 2022 donde señalaba que cada dólar invertido en prevención del delito puede ahorrar hasta siete dólares en costos judiciales y carcelarios a mediano plazo. Y, sin embargo, seguimos dándole la espalda a esa ecuación tan clara.

Me viene a la memoria una visita a un centro juvenil en Pavas, donde jóvenes que antes estaban metidos en microtráfico ahora reciben talleres

EL EQUILIBRIO ENTRE REPRESIÓN Y PREVENCIÓN

La Política Nacional de Seguridad 2023–2030 insiste en que la prevención debe ser el eje rector, pero cuando uno ve el presupuesto, más del 75% de los recursos siguen destinados a policías, cárceles y equipos de reacción. Apenas un 12% se dedica a programas preventivos en educación, cultura y deporte, según el último informe de la Contraloría General de la República (2023). Esa desproporción refleja lo que pasa en el día a día: las patrullas son las protagonistas, no las escuelas abiertas hasta tarde ni los centros culturales en los barrios más golpeados.

No es que la represión no sea necesaria, ojo. Cuando una banda narco controla un barrio, cuando un homicida anda libre, el Estado tiene la obligación de actuar con

de música, deportes y emprendimiento. El programa es apoyado por cooperación internacional, porque el Estado no tiene fondos suficientes para sostenerlo. Una muchacha de apenas 16 años me dijo: *“Aquí siento que valgo, que puedo hacer otra cosa que no sea vender drogas”*. Ese testimonio me dejó helado porque demuestra que la prevención funciona, que saca a los jóvenes del radar del narco. Pero en paralelo, a pocos metros, la Fuerza Pública montaba un operativo con armas largas y chalecos antibalas. Dos realidades que conviven, pero no se articulan.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido enfático: la represión sin prevención sólo desplaza la violencia, no la elimina. Lo vimos en El Salvador con el “Plan Mano Dura” en los 2000, que saturó las cárceles y radicalizó a las pandillas. En Costa Rica no hemos llegado a ese extremo, pero sí estamos viendo señales peligrosas: hacinamiento carcelario cercano al 30%, más de 16.000 personas privadas de libertad y una reincidencia que ronda el 45%, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Paz (2023). Eso significa que casi la mitad de los que salen vuelven a delinquir. ¿De qué sirvió entonces la represión si no transformó vidas?

Al mismo tiempo, tenemos ejemplos positivos de prevención que podrían inspirar. El Instituto Costarricense del Deporte (ICODER) ha mostrado que en comunidades donde se amplían programas deportivos, los índices de violencia juvenil bajan hasta en un 20%. En Guararí de Heredia, un proyecto de fútbol comunitario redujo en dos años los reportes policiales de riñas entre jóvenes en un 35%. Y aun así, esos programas dependen de presupuestos que se recortan cada año porque se consideran “no prioritarios”. ¿Cómo vamos a hablar de seguridad integral si no invertimos en lo que sí da resultados?

Uno de los puntos más delicados es que la represión suele dar réditos políticos inmediatos. Una foto de policías con armas en una redada vende más que un taller de poesía en un barrio marginal. Los políticos lo saben y por eso apuestan por el “show de fuerza”. Pero esa satisfacción mediática es engañosa: en 2023 tuvimos 907 homicidios, el número más alto en la historia del país, pese a los operativos, pese a las cárceles llenas. La

represión por sí sola no está conteniendo la ola de violencia.

La prevención, en cambio, requiere paciencia y visión de largo plazo. No se mide en arrestos, sino en jóvenes que terminan el colegio, en madres que logran empleo, en comunidades que recuperan espacios públicos. Esos logros no caben en un titular, pero son los que realmente construyen paz. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAH 2022) muestra que el 34% de los jóvenes entre 18 y 24 años en zonas vulnerables ni estudian ni trabajan. Ese es el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. Mientras esa realidad no cambie, ninguna patrulla será suficiente.

No se trata, entonces, de escoger entre represión o prevención. El equilibrio real implica entender que ambas son necesarias, pero que la prevención debe ir primero, porque es la que reduce la necesidad de reprimir. Hoy, sin embargo, tenemos la ecuación al revés: reprimimos mucho y prevenimos poco. La política 2023–2030 plantea corregir ese desequilibrio, pero los recursos y la voluntad política aún no acompañan.

Recuerdo a un profesor de criminología que me decía: *“Un sistema que solo encierra delincuentes está condenado a fabricarlos en serie”*. Y es cierto. Si no fortalecemos las escuelas, los programas de empleo juvenil, la cultura y el deporte, siempre habrá un nuevo muchacho dispuesto a ocupar el lugar del que encarcelamos. Es como cortar las ramas de un árbol sin arrancar las raíces.

La gran lección que nos deja esta encrucijada es que seguridad no es solo un asunto de policías, es un asunto de sociedad. Si seguimos apostando por la represión como motor principal, vamos a seguir alimentando el círculo vicioso de cárceles llenas, barrios dominados por el narco y ciudadanos que viven con miedo. Pero si tenemos la valentía de invertir en prevención, aunque no dé votos inmediatos, podríamos empezar a cambiar la historia. El equilibrio no es una utopía; es una necesidad urgente que marcará si Costa Rica logra recuperar la paz que siempre nos gustó presumir.

LO QUE FALTA: CONTINUIDAD Y VOLUNTAD POLÍTICA

Hay una frase que me repiten con frecuencia cuando visito comunidades, universidades o converso con líderes comunales:

Y tienen razón. El problema de Costa Rica no es solo la falta de diagnósticos —los tenemos a montones, desde el Estado de la Nación hasta los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, el problema es la falta de continuidad y voluntad política. Ahí está el verdadero talón de Aquiles.

“En este país todo empieza bien, pero nada se sostiene”.

Pensemos, por ejemplo, en la Política Nacional de Seguridad 2023–2030. En el papel, el documento plantea una visión integral: combinar represión con prevención, fortalecer la inteligencia policial, invertir en comunidades y reforzar la cooperación regional. Excelente, ¿verdad? El problema es que esa política cambia cada cuatro años, cuando entra un nuevo gobierno que quiere dejar su sello, y lo que antes era prioridad pasa a ser una nota al pie. En la práctica, cada administración arranca de cero. Así no hay política pública que aguante.

La Encuesta de Opinión Pública del CIEP-UCR (2024) mostró un dato revelador: el 62% de los costarricenses cree que la seguridad no mejora porque los gobiernos “solo piensan en lo inmediato”. Y cuando la gente percibe eso, la desconfianza hacia las instituciones crece, minando la legitimidad de cualquier esfuerzo. No se trata solo de falta de recursos —que los hay—, sino de la incapacidad de pensar el país a largo plazo.

Veamos otro ejemplo. En 2006 se lanzó el famoso Plan Escudo, que reforzaba la vigilancia policial y buscaba integrar prevención en comunidades de alto riesgo. A los dos años, con el cambio de administración, el programa quedó relegado. En 2011 se impulsó el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, con fuerte participación de organizaciones civiles. Igual destino: desapareció

con el siguiente gobierno. En 2017 se habló de “territorios seguros” y se lanzó un piloto en Limón, pero sin presupuesto sostenido ni coordinación interinstitucional. Hoy nadie recuerda esos nombres, porque fueron borrados de la agenda antes de madurar.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que uno de los principales obstáculos de las políticas de seguridad en América Latina es la “desarticulación temporal”: los gobiernos cambian y los proyectos mueren. Costa Rica encarna ese mal con precisión. Mientras tanto, las cifras no perdonan: 907 homicidios en 2023, y un 83% vinculados directamente con el narcotráfico, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esa violencia no entiende de cambios de gobierno, avanza con continuidad propia, mientras nuestra respuesta se fragmenta sexenio tras sexenio.

Y aquí entra el tema de la voluntad política. Porque continuidad no significa solo mantener un programa en el tiempo, significa tener el coraje de sostenerlo incluso cuando no da réditos inmediatos. Nadie gana elecciones prometiendo educación para que dentro de 15 años tengamos menos homicidios. Nadie se aplaude por abrir un centro cultural en un barrio vulnerable, aunque eso pueda salvar a decenas de jóvenes de caer en el narco. La lógica electoral choca frontalmente con la lógica de la seguridad sostenible.

El sociólogo argentino Marcelo Saín lo dice sin rodeos: *“En América Latina se gobierna la seguridad con la mirada puesta en la próxima elección, no en la próxima generación”*.

En Costa Rica, ese diagnóstico nos calza como anillo al dedo. Y lo vemos cada vez que se prioriza la compra de patrullas para una foto de campaña, mientras las escuelas en zonas rojas siguen sin psicólogos ni programas extracurriculares.

Hace poco conversé con una lideresa comunal de Pavas. Ella me decía: *“Jorge, aquí cada gobierno viene a prometer y a los tres meses ya no vuelven. Nos toman la foto, pero no nos dejan nada”*. Esa frase refleja lo que está en juego: sin voluntad política real, lo que queda es frustración ciudadana y un terreno fértil para que el crimen organizado ocupe el espacio que el Estado abandona.

La continuidad también exige coordinación. El Informe Estado de la Justicia 2022 advertía que el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio de Justicia operan como islas, sin un sistema articulado. ¿Cómo vamos a garantizar continuidad si ni siquiera hablamos el mismo idioma entre instituciones? La voluntad política pasa por entender que la seguridad no es propiedad de un ministerio, sino un esfuerzo nacional que debe sobrevivir a las rotaciones de gabinete.

Ahora, hay ejemplos de que sí se puede. El Plan Ceiba en Uruguay, que combina prevención educativa con represión focalizada, lleva más de 15 años sostenido con gobiernos de distinto signo político. ¿La clave? Se convirtió en política de Estado, blindada frente a vaivenes partidarios. En España, el Plan Nacional sobre Drogas, creado en los ochenta, ha sido reformado y actualizado, pero nunca eliminado, y hoy sigue siendo el marco rector para combatir adicciones y narcotráfico.

Costa Rica necesita ese tipo de pactos, que nos permitan sostener una ruta aunque cambien los vientos políticos. No se trata de uniformidad ciega, sino de consensos básicos: reducir homicidios, fortalecer comunidades, mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.

El PNUD advierte que, sin continuidad, los países se condenan a un “síndrome del eterno piloto”: planes que arrancan, generan esperanza y mueren antes de producir resultados. Nosotros estamos atrapados ahí. La voluntad política que falta no es un discurso, es presupuesto sostenido, es valentía para enfrentar intereses corporativos, es humildad para reconocer que la seguridad no es un botín electoral, sino un bien común.

Cuando cierro los ojos y pienso en Costa Rica dentro de 20 años, quiero imaginar un país donde la seguridad se construya con la misma paciencia con la que sembramos un cafetal: cuidando las matas, abonando la tierra, esperando el tiempo necesario para cosechar. Pero para eso necesitamos continuidad y voluntad política. Sin esas dos piezas, todo lo demás — planes, diagnósticos, discursos— no son más que castillos de arena que el mar de la violencia se lleva con la primera ola.



Capítulo 12

El Semillero de Violencia

**Justicia Social y Desigualdad:
Raíces del Problema.**



“La seguridad se volvió un botín electoral. Cada cuatro años, los políticos prometen más policías, más armas, más cárceles, pero nunca hablan de fortalecer la prevención ni la cohesión social.”

Mario Zamora, ex Ministro de Seguridad Pública

Cuando uno camina por San José a pie, cruzando de la Avenida Central hacia los barrios del sur, es como atravesar un espejo roto. A un lado, vitrinas relucientes con celulares de última generación y cafés donde un capuchino cuesta lo mismo que un día entero de trabajo en una piñera de la Zona Norte. Al otro, calles con casas improvisadas, chiquillos descalzos jugando entre cunetas y vendedores informales que se las ingenian para sobrevivir con lo que se pueda vender. Esa fractura, tan visible y tan normalizada, es la que alimenta la violencia en Costa Rica. La desigualdad no es solo un dato frío de estadísticas, es un terreno fértil donde germinan la frustración, la exclusión y, finalmente, el crimen.

Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina, con un coeficiente de Gini de 0,50, cifra que nos pone al lado de países históricamente marcados por brechas sociales como Brasil o Colombia. Mientras el 20% más rico concentra más del 50% de los ingresos, el 20% más pobre apenas llega al 4%. Ese abismo económico no se queda en los balances del INEC, sino que se traduce en realidades concretas: barrios donde los niños no tienen acceso a internet ni a un parque seguro, mientras en las zonas acomodadas se habla de colegios privados bilingües y viajes de intercambio a Europa.

No es casualidad que los mapas de la pobreza y los mapas de la violencia coinciden casi de manera calcada. El OIJ ha documentado que los cantones con mayor incidencia de homicidios, como Limón, Desamparados y Puntarenas, son también los que presentan mayores índices de pobreza y desempleo. En 2023, Limón registró una tasa de homicidios de 65 por cada 100.000 habitantes, la más alta del país y casi seis veces la tasa nacional promedio de hace apenas dos décadas. ¿Qué futuro puede ofrecerle un país a un joven limonense si lo que encuentra al salir de la escuela es un narco que le paga más en una semana que lo que ganaría su madre en un mes limpiando casas?

En mis recorridos por comunidades vulnerables, siempre escucho la misma frase: *“Aquí no hay nada, Jorge. O uno se mete en el negocio, o se queda viendo pasar la vida sin futuro”*. Ese “negocio” es el microtráfico, el sicariato o las redes de contrabando. La desigualdad funciona como gasolina para ese motor: no se trata solo de la falta de plata, sino de la falta de expectativas. Un país que no ofrece horizontes claros a sus jóvenes es un país que les abre la puerta al crimen.

El Banco Mundial advierte que cada punto porcentual de aumento en el desempleo juvenil se asocia con un incremento en las tasas de violencia urbana en América Latina. Y en Costa Rica, el desempleo juvenil ronda el 30%, casi el triple del promedio nacional. Es decir, casi un tercio de nuestros jóvenes en edad productiva están sin trabajo, y lo que es peor, sin oportunidades reales de conseguirlo. No podemos sorprendernos entonces de que sean ellos el blanco perfecto de los grupos criminales, que les ofrecen identidad, ingresos y un sentido de pertenencia que el Estado no logra darles.

Recuerdo un encuentro con una muchacha de 19 años en Pavas. Me contó que había dejado el colegio en décimo porque su mamá ya no podía costearle los pasajes. A los pocos meses, empezó a vender droga en el barrio, reclutada por un grupo local. *“No era lo que quería”,* me dijo, *“pero era eso o ver cómo mis hermanillos no comían”*. Esa confesión, tan dura y sincera, refleja la lógica de miles de jóvenes que no ven en la educación o en el trabajo formal una opción viable. Y aquí está el meollo: la violencia no nace porque sí, nace de la desesperanza y de un sistema que normaliza la exclusión.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe regional de 2022 fue claro: *“La desigualdad es el principal factor de riesgo para la seguridad en América Latina”*. Países con alta desigualdad tienen tasas de homicidios que duplican o triplican las de países más igualitarios. Y Costa Rica, que alguna vez fue ejemplo de movilidad social, hoy se encamina hacia ese destino.

El deterioro se nota incluso en lo simbólico. Antes, en Costa Rica se decía que la educación pública era la gran niveladora, la que permitía que un hijo de agricultores se convirtiera en profesional y rompiera el ciclo de pobreza. Hoy, con una deserción escolar del 47% en secundaria, ese sueño se

desmorona. El Estado de la Educación advierte que casi la mitad de los estudiantes de secundaria en el quintil más pobre no termina el colegio. Esos jóvenes son los mismos que terminan siendo carne de cañón para las bandas criminales, porque la desigualdad les corta las alas antes de empezar a volar.

La desigualdad también golpea la confianza institucional. El Latinobarómetro 2023 reveló que apenas un 28% de los costarricenses confía en que las instituciones públicas les garantizan igualdad de oportunidades. Cuando la gente percibe que el sistema está amañado, que los ricos siempre tienen ventajas y que los pobres siempre llevan la peor parte, se erosiona la cohesión social. Esa desconfianza se traduce en más violencia, porque si no hay fe en el Estado, las personas buscan justicia por mano propia o se alinean con estructuras paralelas de poder, como las pandillas o los grupos narco.

Lo más grave es que la desigualdad no sólo explica la violencia, sino que la perpetúa. Cada homicidio en un barrio vulnerable reduce aún más las posibilidades de atraer inversión, abrir negocios o fortalecer servicios públicos. Es un círculo vicioso: la pobreza alimenta la violencia, y la violencia mantiene a la pobreza estancada. Mientras tanto, los sectores más acomodados se blindan con rejas, cámaras y seguridad privada, profundizando la brecha entre “los de adentro” y “los de afuera”.

Costa Rica, que en el pasado se enorgullecía de ser un país sin ejército, con una sólida clase media y un acceso amplio a servicios públicos, hoy enfrenta la paradoja de que esa misma clase media se ha erosionado

hasta representar menos del 40% de la población, según la CEPAL. Sin un colchón social que amortigüe las desigualdades, las tensiones se vuelven explosivas. Y ya estamos viendo las consecuencias en los índices de violencia.

La desigualdad, entonces, no es un dato secundario: es la semilla de la violencia que vivimos. Combatirla no significa regalar plata o improvisar programas asistencialistas, sino garantizar oportunidades reales para todos. De lo contrario, seguiremos caminando entre espejos rotos, viendo cómo un país que soñaba con la paz se desangra lentamente por las grietas que nosotros mismos dejamos crecer.

JUVENTUD SIN OPORTUNIDADES: CALDO DE CULTIVO DEL CRIMEN

Cuando uno conversa con los jóvenes en barrios como La Carpio, Pavas o Cieneguita, la sensación que transmiten es de un futuro en pausa. Es como si la vida les

hubiera puesto un muro enfrente apenas saliendo de la niñez. Sus sueños de estudiar, de trabajar, de tener un techo propio, chocan con la realidad de un país que no les ofrece caminos claros. Y en ese vacío, como lo he visto con mis propios ojos, aparecen las pandillas, los narcos y los atajos ilegales, vendiéndoles la ilusión de éxito inmediato a cambio de su libertad, su seguridad o hasta su vida.

Las estadísticas lo confirman: según el INEC, en Costa Rica viven más de 1,3 millones de personas entre los 15 y 35 años, lo que representa casi un tercio de la población. Sin embargo, de ese grupo, más de 300.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Son los llamados ninis, muchachos que quedaron atrapados entre un sistema educativo que los expulsó y un mercado laboral que nunca los quiso recibir. Y lo más alarmante es que ese número ha ido creciendo en los últimos diez años, especialmente en zonas urbanas marginales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la tasa de desempleo juvenil en Costa Rica ronda el 30%, el triple de la tasa de los adultos. Eso significa que, en promedio, un joven tiene tres veces más probabilidades de estar sin trabajo que alguien mayor de 35 años. Y no

solo se trata de desempleo, sino también de precariedad: el Estado de la Nación reveló que casi el 60% de los jóvenes que logran conseguir empleo lo hacen en condiciones de informalidad, sin seguro social, sin estabilidad ni posibilidades de ascenso. Es decir, trabajan, pero no construyen un futuro.

En mis recorridos por comunidades afectadas, siempre escucho historias que se repiten con pequeñas variaciones. Un muchacho en Desamparados me contó que había dejado el colegio en noveno porque no tenía plata para los pasajes ni para las fotocopias. Al poco tiempo, empezó a hacer “mandados” para un grupo de narcotráfico del barrio. Le pagaban 200.000 colones por semana, mucho más de lo que podía ganar su papá en la construcción. “Jorge, ¿qué iba a hacer? Si nadie me daba chance, al menos ahí me respetaban y me pagaban bien”, me confesó con los ojos entre orgullo y resignación. Esa frase, “nadie me daba chance”, la he escuchado tantas veces que se me quedó tatuada en la memoria.

El problema es que, al entrar en esas redes, el joven deja de ser un individuo con posibilidades múltiples y se convierte en una pieza desechable de un engranaje criminal. El OIJ reporta que más del 60% de los homicidios en 2023 estuvieron vinculados a ajustes de cuentas por narcotráfico, y la mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años. Es decir, nuestros muertos más jóvenes no cayeron por azar, cayeron porque estaban insertos en un sistema que les dio la espalda y que luego los convirtió en cifras de violencia.

Lo que me duele más, y lo digo desde el corazón, es ver cómo la juventud pierde no sólo oportunidades, sino también esperanza. En un taller en Limón, una muchacha de 17 años me dijo: *“Profe, yo no pienso en el futuro, pienso en no morirme mañana”*.

La UNICEF en su informe sobre juventud en América Latina señala que cada año que un adolescente pasa fuera del sistema educativo incrementa en un 30% sus probabilidades de involucrarse en actividades delictivas. Y aquí la deserción escolar en secundaria ronda el 47%, con picos de hasta 60% en algunas comunidades rurales y costeras. No es difícil ver el círculo vicioso: abandono escolar, desempleo, reclutamiento criminal. Mientras tanto, el Estado sigue apostando por medidas represivas en lugar de invertir seriamente en mantener a esos muchachos dentro del aula y brindarles alternativas reales.

Esa frase me dejó sin aire. Una adolescente que debería estar soñando con estudiar, viajar o enamorarse, está pensando en sobrevivir al día siguiente. Esa es la radiografía más cruda de cómo la inseguridad y la falta de oportunidades le roban a la juventud la capacidad de imaginar un mañana.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha insistido en que los países que invierten en programas de capacitación técnica, deporte y cultura para jóvenes logran reducir hasta en un 40% la participación de estos en actividades delictivas. En contraste, Costa Rica destina más del 80% de su presupuesto de seguridad a represión y apenas un 5% a prevención social. Esa desproporción no es solo un error de política, es una condena anunciada: si no invertimos en los jóvenes hoy, mañana seguiremos enterrándolos antes de tiempo.

También hay que hablar de la salud mental, un tema que solemos dejar en segundo plano. El Ministerio de Salud y la CCSS reconocen que los trastornos de ansiedad y depresión en adolescentes se duplicaron en la última década, y que los intentos de suicidio en menores de 25 años han aumentado de manera preocupante. La violencia no solo mata con balas, también mata con desesperanza. Y mientras tanto, los servicios de atención psicológica en escuelas y colegios son insuficientes, con un orientador para cientos de estudiantes. ¿Cómo puede un sistema así contener la angustia de una generación entera?

En América Latina, según la CEPAL, el costo económico de tener jóvenes fuera del sistema educativo y laboral representa hasta el 2% del PIB anual. En Costa Rica, eso equivale a más de 1.500 millones de dólares que dejamos de generar cada año. No solo estamos perdiendo talento y creatividad, estamos dejando que ese potencial se convierta en violencia, en crimen, en gasto policial y carcelario.

Por eso insisto: la juventud sin oportunidades es el verdadero semillero del crimen. No porque los jóvenes sean “delincuentes en potencia”, como a veces los pinta la narrativa simplista de algunos políticos, sino porque el sistema les niega las opciones que sí tienen los sectores más privilegiados.

No es que el joven quiera ser sicario, es que no ve otra salida.

Al final, el costo humano es incalculable. Cada vez que un joven cae asesinado en nuestras calles, no solo se apaga una vida, se apaga un universo de posibilidades que nunca llegó a existir. Cada ataúd de un muchacho en Costa Rica debería ser un recordatorio brutal de lo que estamos haciendo mal como sociedad. Y lo más triste es que lo sabemos: los informes, los datos, las experiencias están ahí, gritándonos que el camino es invertir en la juventud. Pero seguimos sordos, repitiendo recetas que no atacan la raíz del problema.

La juventud no es el problema, es la solución. Pero para que lo sea, tenemos que abrirles las puertas de la educación, del empleo digno, de la cultura, del deporte. Si no lo hacemos, seguiremos condenando a generaciones enteras a encontrar en el crimen lo que el país les negó: un lugar en el mundo.

EL RETO DE INVERTIR EN EDUCACIÓN Y EMPLEO DIGNO

Recuerdo una conversación que tuve hace poco en un colegio técnico de la Zona Norte. Un profesor, con veinte años de experiencia, me dijo con un suspiro: “*Jorge, yo ya no sé*

si preparo a mis estudiantes para graduarse o para emigrar”. Esa frase refleja con crudeza el dilema en el que nos encontramos como país. La educación, que históricamente fue el motor del desarrollo costarricense, hoy está atrapada entre la falta de inversión, la desconexión con el mercado laboral y la creciente desesperanza de una juventud que siente que estudiar no garantiza un futuro mejor.

Los datos lo respaldan. El Estado de la Educación 2023, elaborado por el CONARE, mostró que en secundaria casi la mitad de los estudiantes abandona antes de terminar el ciclo completo. La tasa de conclusión en educación diversificada no supera el 53%. Y lo más grave: en zonas rurales y costeras, ese porcentaje puede caer hasta un 40%. Esto significa que miles de adolescentes quedan varados en la mitad del camino, con títulos incompletos que no les sirven ni para entrar a la universidad ni para conseguir un empleo formal.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) arrastra carencias que parecen eternas: infraestructura en ruinas, programas técnicos obsoletos, docentes sin herramientas para enfrentar realidades sociales complejas. Según la Contraloría, más del 70% de los centros educativos públicos tienen problemas de infraestructura que afectan directamente el aprendizaje. ¿Cómo puede un estudiante concentrarse si su aula se inunda cuando llueve o si no tiene acceso a un laboratorio de ciencias?

La inversión en educación, que durante décadas fue una bandera nacional, se ha erosionado. En 2019, Costa Rica destinaba cerca del 7,4% del PIB a educación, pero esa cifra ha venido bajando en los últimos años, cayendo por debajo del 6% en 2022. Eso puede parecer un tecnicismo económico, pero en la práctica significa menos becas, menos programas de apoyo, menos recursos pedagógicos. Cada punto porcentual que le restamos a la educación es un punto que se suma al déficit de oportunidades y al caldo de cultivo de la violencia.

La otra cara de la moneda es el empleo. Según el INEC, la tasa de desempleo juvenil en 2023 fue del 29%, casi el triple de la de los adultos. Y entre quienes trabajan, el 56% lo hace en condiciones de informalidad, sin seguro social ni estabilidad. Es decir, los jóvenes costarricenses no solo tienen menos oportunidades de estudiar, también tienen menos opciones de trabajar con dignidad. El mercado laboral exige habilidades que muchas veces el sistema educativo no enseña, y al mismo tiempo se rehúsa a ofrecer oportunidades de primer empleo.

He escuchado testimonios de jóvenes en barrios como León XIII o Batán que, después de enviar decenas de currículos, terminan aceptando trabajos mal pagados en call centers o en la economía informal. *“Mejor me meto en otra cosa”*, me dijo un muchacho de 20 años en Limón, refiriéndose a los trabajos que le ofrecían los grupos narcos locales. Esa “otra cosa” era, en sus palabras, “más plata y menos humillación”. Así de brutal es la comparación: entre un empleo formal mal remunerado y un “trabajo” ilegal que promete respeto y dinero, muchos sienten que la decisión es evidente.

Pero aquí es donde entra el reto del país: invertir en educación y empleo digno no es un gasto, es la mejor inversión en seguridad. El Banco Mundial ha señalado que cada dólar invertido en educación genera un retorno de hasta 3 dólares en crecimiento económico a largo plazo. Y la UNESCO estima que un año adicional de escolaridad aumenta en un 10% los ingresos futuros de una persona. No es ideología, son números claros.

El Programa Estado de la Nación ha insistido en que el rezago educativo está directamente vinculado a la violencia. En comunidades donde la tasa de deserción escolar es alta, también lo es la incidencia delictiva. Por eso, cuando hablamos de seguridad, no podemos limitarnos a más policías o más cárceles. La verdadera seguridad comienza en las aulas, en el acceso a un empleo que le dé a los jóvenes la posibilidad de construir un proyecto de vida.

Los modelos internacionales lo confirman. En Chile, por ejemplo, el programa “Chile Joven” logró capacitar a más de 150.000 jóvenes en oficios técnicos durante los años noventa, reduciendo significativamente la tasa de desempleo juvenil. En Medellín, Colombia, la apuesta por la educación y la cultura como ejes de transformación urbana sacó a miles de jóvenes de la violencia. ¿Por qué Costa Rica no puede hacer algo similar, adaptado a nuestra realidad?

El problema es que seguimos viendo la educación como un rubro del gasto y no como la inversión estratégica que es. Lo mismo pasa con el empleo: programas como “Empléate” o “Puente al Desarrollo” tienen buenas intenciones, pero están sub-financiados y no alcanzan a cubrir ni al 10% de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En el último informe de la OIT, se señaló que Costa Rica necesita crear al menos 250.000 empleos dignos en la próxima década solo para absorber a los jóvenes que ingresarán al mercado laboral. ¿Cómo vamos a hacerlo si seguimos atrapados en la misma receta de siempre?

En este punto, la tecnología y la innovación deben jugar un papel crucial. La economía digital, las energías renovables, el turismo sostenible y la agroindustria moderna son sectores con potencial de generar empleos de

calidad. Pero para que los jóvenes accedan a ellos, necesitan formación adecuada. No sirve de nada hablar de robótica, programación o energías limpias si en muchos colegios públicos ni siquiera hay computadoras en buen estado o profesores capacitados en esas áreas.

Tenemos universidades públicas de calidad, un talento joven lleno de creatividad y una tradición democrática que aún nos respalda. Lo que falta es decisión política para priorizar lo esencial. Como decía un empresario en una reunión que tuve en San José: *“Si no invertimos en la juventud, mañana no habrá clientes, ni trabajadores, ni país”*. Esa frase, que podría sonar pragmática, encierra una verdad profunda: el futuro de Costa Rica depende de lo que hagamos hoy por nuestros jóvenes.

No podemos seguir postergando. Cada año que dejamos pasar sin una política robusta de educación y empleo digno es un año que perdemos generaciones enteras. Es un año en que seguimos enterrando jóvenes en vez de graduarlos. Es un año en que seguimos alimentando cárceles en vez de fábricas, talleres o centros de innovación.

El reto está claro: hay que invertir. Y cuando digo invertir, hablo de priorizar, de entender que un aula bien equipada, un profesor bien formado, un empleo digno para un joven no son lujos, son la base de nuestra seguridad y nuestra cohesión social. Si Costa Rica quiere seguir siendo un país de paz, tiene que empezar por darle a su juventud las herramientas para vivir con dignidad. Esa es la apuesta que no podemos seguir evadiendo.

EL LABERINTO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Cuando uno conversa con Mario Zamora, ex ministro de Seguridad Pública, se da cuenta de inmediato que habla alguien que no solo ha estudiado el tema, sino que lo ha vivido en carne propia. Sus palabras siempre tienen un peso especial porque provienen de la experiencia directa, de haber estado en la trinchera donde las decisiones se toman con poco margen de error y donde un mal cálculo puede costarle la vida a un oficial o la confianza de toda una comunidad. Recuerdo que, en una charla que compartimos hace algunos años, él me dijo:

“Jorge, la seguridad en Costa Rica es como caminar en un laberinto sin mapa. Tenés que avanzar a tientas, sabiendo que cada giro equivocado puede llevarte a una pared sin salida”.

cocaína que sale de Sudamérica rumbo a Europa y Estados Unidos. Y Costa Rica, con sus puertos en el Caribe y el Pacífico, su cercanía geográfica con Colombia y su institucionalidad débil, se volvió pieza codiciada en este engranaje global.

La DEA estima que menos del 10% de la droga que pasa por Centroamérica es incautada. Lo demás logra llegar a destino o se queda en el camino, alimentando el consumo local y la violencia en nuestras comunidades.

Pero el laberinto de la seguridad no es solo el narcotráfico. Es también la fragmentación institucional.

Zamora, con la franqueza que lo caracteriza, lo ha señalado: *“tenemos demasiadas instituciones con competencias que se traslapan y muy poca coordinación entre ellas. El Ministerio de Seguridad Pública, el OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la DIS, la PCD... todos con funciones que a veces se duplican o se contradicen.”* El resultado es un aparato disperso, incapaz de reaccionar con agilidad frente a fenómenos tan

Esa metáfora del laberinto resume bien lo que hemos enfrentado en las últimas dos décadas. Costa Rica pasó de ser un país de tránsito relativamente pasivo para las drogas a convertirse en un punto estratégico para el crimen organizado. Según el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en los últimos diez años el Caribe y Centroamérica se consolidaron como corredores vitales para la

Zamora lo advirtió varias veces durante su gestión (2011-2014): *“Nos están usando como bodega, como puente, como punto de enlace. Y no tenemos ni los recursos ni la mentalidad para enfrentar ese cambio”.* Lo cierto es que su diagnóstico fue certero. En 2022, la Policía de Control de Drogas decomisó más de 71 toneladas de cocaína, una cifra récord en la historia del país, pero que representa apenas una fracción de lo que realmente circula.

dinámicos como el crimen organizado.

El Informe del Estado de la Nación 2022 lo ilustra con claridad: mientras el gasto público en seguridad se ha mantenido alrededor del 1,4% del PIB, la violencia homicida alcanzó en 2023 niveles históricos. Es decir, estamos gastando más que nunca, pero obteniendo peores resultados.

Zamora suele insistir en algo que a veces incomoda: la seguridad no puede desligarse de la política social. En una entrevista que concedió al Diario Extra hace algunos años, lanzó una frase que debería estar enmarcada en cada oficina del Poder Ejecutivo:

“El Ministerio de Seguridad es la última línea de defensa. Si falló el MEP, si falló el IMAS, si falló el INA, entonces nos toca a nosotros. Pero para entonces ya es tarde”.

Esa visión, dura pero realista, apunta al corazón del problema: hemos cargado a la policía con responsabilidades que no le corresponden, porque las instituciones que debían prevenir fallaron antes.

El laberinto, además, está lleno de trampas políticas y sociales. Durante su gestión, Zamora impulsó la Ley de Control de Armas y Explosivos, endureciendo los requisitos para la portación. En

aquel momento, Costa Rica tenía un promedio de 7 armas de fuego por cada 100 habitantes, según Small Arms Survey. Hoy esa cifra ha crecido y, peor aún, el mercado ilegal de armas ha florecido. Los decomisos de armas ilegales rondan las 1.800 por año, pero sabemos que miles siguen circulando sin control, muchas provenientes de Nicaragua y Panamá.

Recuerdo que en una mesa de discusión con expertos, Zamora lanzó un dato que estremeció a todos: *“Por cada arma que decomisamos, hay al menos diez más en circulación”*. Y ahí entendí lo profundo del laberinto: es imposible resolver el problema solo con decomisos o allanamientos si al mismo tiempo las fronteras siguen siendo porosas y la corrupción facilita el ingreso de armas y drogas.

El propio Zamora lo resumió con otra de sus frases lapidarias: *“En seguridad, no hay balas mágicas. Hay que combinar inteligencia, prevención y represión, y ninguna puede faltar”*. Esa es, quizá, la lección más valiosa de su paso por el Ministerio: que no basta con llenar las calles de policías ni con levantar mega cárceles. Necesitamos un Estado coordinado, con instituciones que trabajen de manera articulada, y con una visión que entienda que la seguridad es también educación, empleo, cultura y comunidad.

diez años sigue vigente hoy, solo que ahora el laberinto es más grande y más oscuro. La pregunta es si tendremos la visión y la valentía de buscar la salida o si seguiremos deambulando sin rumbo, esperando milagros que nunca llegan.

MIGRACIÓN COMO OPORTUNIDAD Y RIESGO

fría y se convierte en una realidad viva, con rostros, con historias, con contradicciones. Siempre lo recuerdo insistiendo en que la migración en Costa Rica no es un tema marginal ni pasajero, sino un fenómeno estructural que moldea nuestra economía, nuestra cultura y, por supuesto, nuestra seguridad. En una de nuestras largas conversaciones, me dijo con tono pausado:

Esa visión me marcó, porque nos obliga a mirar el asunto sin prejuicios, pero tampoco con ingenuidad. Costa Rica, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), alberga a más de 500.000 personas extranjeras con residencia regular, lo que equivale aproximadamente

Cuando escucho sus análisis, no puedo evitar sentir que Costa Rica sigue caminando en ese mismo laberinto, repitiendo giros equivocados y chocando una y otra vez contra las mismas paredes. Lo que Zamora advirtió hace más de

Hablar con Freddy Montero, Antropólogo y Politólogo, es entrar en un terreno donde la migración deja de ser una estadística

“La migración es una fuerza de doble filo: puede ser la gasolina que impulse el desarrollo o la chispa que incendie nuestras debilidades sociales”.

al 10% de la población total del país. Y si sumamos a quienes están en condición irregular, el número se dispara aún más. Solo en 2023, Migración reportó más de 480.000 personas en tránsito irregular por nuestro territorio, la gran mayoría en la ruta hacia Estados Unidos. La magnitud de esas cifras nos dice, sin lugar a dudas, que la migración no es un fenómeno periférico: es central para entender lo que somos hoy como sociedad.

Freddy siempre planteaba que había que romper con los discursos simplistas que pintan a la migración como problema o como salvación. En su criterio, la migración es ambas cosas, dependiendo de cómo se gestione. Por un lado, ha sido un motor para sectores claves de la economía

costarricense. Basta con pensar en la agricultura: el café, la piña, el banano. Según la Cámara Nacional de Productores de Piña, más del 60% de la mano de obra en ese sector es nicaragüense. Lo mismo ocurre en la construcción, donde los trabajadores extranjeros son mayoría en muchas cuadrillas. Sin ellos, simplemente la producción nacional colapsaría.

Pero Montero también advertía sobre las sombras. *“Cuando el Estado no regula ni ordena, la migración puede ser el caldo de cultivo para la explotación laboral, la trata de personas o la criminalidad transnacional”*, me decía. Y ahí están los datos que lo respaldan. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que Costa Rica es simultáneamente país de destino, tránsito y origen de víctimas de trata, especialmente mujeres centroamericanas y suramericanas explotadas en redes de prostitución.

Montero fue particularmente claro al señalar los vacíos institucionales:

Y tenía razón. La DGME, con un presupuesto que históricamente ronda apenas los 45 millones de dólares anuales, tiene que enfrentar un flujo humano que se ha multiplicado exponencialmente. Para dimensionar: solo en el puesto fronterizo de Paso Canoas, en 2023, pasaron más de 350.000

“Migración es un barco demasiado pequeño para un mar demasiado grande”.

migrantes en tránsito. Eso significa que una institución con recursos limitados tiene que atender volúmenes comparables a los de países con estructuras migratorias diez veces mayores.

La crisis de movilidad humana que estalló con más fuerza después de la pandemia puso a Costa Rica en el ojo del huracán. El Banco Mundial calculó que, entre 2018 y 2023, el número de personas que atravesaron el Darién, en Panamá, pasó de 20.000 a más de 500.000. Y la mayoría, inevitablemente, cruza luego por territorio costarricense. Freddy lo describe con crudeza: *“Esto no es una migración normal, es una avalancha humana, y si no nos preparamos, la ola nos arrastra”*.

Pero también tenía la capacidad de ver el otro lado de la moneda. En más de una ocasión defendió que, bien gestionada, la migración puede ser un antídoto contra el envejecimiento de nuestra población. El Estado de la Nación 2021 ya advertía que la tasa de fecundidad en Costa Rica cayó a 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Eso significa que, en unas décadas, tendremos menos jóvenes para sostener un sistema de pensiones y salud cada vez más demandante. Ahí, decía Montero, la migración regulada y ordenada puede convertirse en una oportunidad para rejuvenecer la fuerza laboral y mantener a flote nuestro Estado social.

Lo que siempre me impresionó de Freddy era su insistencia en que el debate no debía quedarse atrapado en la trinchera ideológica. *“No podemos hablar de migración solo desde el miedo o desde la compasión. Tenemos que hablar desde la política pública, desde la gestión inteligente”*, recalcaba. Y tenía razón. Porque si bien la llegada masiva de personas genera tensiones en las comunidades receptoras, también abre espacios de dinamismo cultural, económico y social.

Un dato que él solía citar es revelador: en 2022, el Banco Central de Costa Rica estimó que los trabajadores extranjeros aportan alrededor del 12% del PIB nacional, principalmente en actividades agrícolas, de construcción y de servicios. Es decir, no estamos ante un grupo marginal, sino ante un bloque productivo sin el cual la economía costarricense se vería seriamente afectada.

Claro, no se pueden ignorar los riesgos. Freddy era consciente de que los grupos criminales transnacionales se aprovechan de las debilidades migratorias para infiltrar redes de tráfico de personas, drogas y armas. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe de 2023 que Costa Rica sigue siendo un punto de tránsito clave para el tráfico ilícito de migrantes, con redes que cobran entre 5.000 y 10.000 dólares por llevar personas desde Sudamérica hasta México. Y esas redes, como advertía Montero, no solo ponen en riesgo a los migrantes, sino que fortalecen al crimen organizado que luego envenena a nuestras comunidades.

En una ocasión, durante una mesa de trabajo sobre migración y seguridad, Montero nos lanzó una frase que aún hoy resuena en mi memoria:

Esa idea sintetiza bien su pensamiento: que la migración por sí misma no genera inseguridad, sino que es la incapacidad estatal la que convierte a la migración en un riesgo.

Y ahí está el reto que nos deja: construir políticas migratorias que no sean improvisadas ni cortoplacistas, sino estructurales y humanas. Porque si seguimos reaccionando con parches, improvisando al calor de cada crisis, nos encontraremos atrapados en un círculo vicioso donde la migración se percibe sólo como amenaza, en vez de aprovecharla como recurso.

“El migrante que llega con hambre no es un enemigo; el enemigo es el vacío del Estado que no sabe cómo recibirlo, cómo integrarlo o cómo regularlo”.

Cada vez que recuerdo a Freddy Montero hablando del tema, lo veo como un hombre que, más que cifras o teorías, trataba de recordarnos una verdad elemental: detrás de cada migrante hay una historia, un rostro, una esperanza. Y que si Costa Rica quiere seguir siendo fiel a su tradición humanista, debe encontrar la manera de equilibrar seguridad con

solidaridad, orden con humanidad. Esa es, quizá, la mayor lección que nos dejó: que la migración, en el fondo, no es solo un desafío de Estado, sino un espejo que refleja lo que somos y lo que aspiramos a ser como sociedad.

LA VISIÓN DE SOCIEDAD DESDE LA ACADEMIA Y EL SERVICIO PÚBLICO

Siempre he creído que para entender el rumbo de un país, hay que escuchar tanto a quienes han tenido en sus manos las riendas del Estado como a quienes dedican

su vida a analizarlo desde la academia. Es un diálogo que a veces se da, a veces no, pero que resulta vital si queremos trazar un futuro distinto. Con Verny Montoya, profesor universitario y analista en temas de seguridad, encontré esa mezcla de reflexión profunda y compromiso ciudadano que pocas veces aparece en la discusión pública.

La primera vez que conversamos en serio sobre la inseguridad en Costa Rica fue en un foro en la Universidad de Costa Rica, hace algunos años. Montoya empezó con una advertencia que me quedó sonando:

Esa frase, dicha frente a un auditorio lleno de estudiantes, fue como un balde de agua fría. Porque nos recordó algo elemental: Costa Rica es distinta porque ha sabido apostar por la paz, pero esa apuesta se está erosionando.

En nuestra conversación más reciente, Montoya me habló de tres dimensiones que debemos considerar: la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la seguridad humana. La primera, decía, nos recuerda que el crimen organizado y el narcotráfico son amenazas

‘Estamos perdiendo la capacidad de pensar la seguridad más allá de lo punitivo. Si seguimos imitando modelos represivos, vamos a matar el alma democrática que hemos construido en setenta y seis años de vida sin ejército’.

transnacionales que ningún país puede enfrentar solo. La segunda, la que sentimos en carne propia cuando caminamos por la calle o vivimos en un barrio vulnerable. Y la tercera, la más profunda, es cómo esas amenazas afectan nuestras decisiones cotidianas, nuestra salud mental, nuestras oportunidades de vida.

Ahí, la mirada académica se cruza con el dato duro. El Estado de la Nación 2022 mostró que un 64% de los costarricenses decía sentirse inseguro en su comunidad, aun cuando no había sido víctima directa de un delito. Montoya lo llama un círculo perverso: la desconfianza alimenta la impunidad, y la impunidad alimenta la violencia. Y romper ese círculo no es tarea de un solo ministerio ni de una política aislada.

Conversando con Montoya, uno entiende que la seguridad no es solo un asunto de policías y ladrones, sino de modelos de sociedad. Cuando él habla de la seguridad humana, recuerda que se trata de garantizar que cada persona tenga acceso a educación, salud, vivienda, empleo digno. Y que, sin eso, ninguna cantidad de patrullas o cárceles nos dará verdadera seguridad.

Me impresionó particularmente cuando hizo un paralelo con experiencias internacionales. En Medellín, Colombia, un lugar que en los años noventa era sinónimo de violencia y narcotráfico, se logró reducir la criminalidad invirtiendo en cultura, transporte público, educación y espacios comunitarios. Los llamados “parques biblioteca” se convirtieron en símbolos de transformación urbana. Hoy Medellín sigue teniendo problemas, claro, pero también es referencia mundial de cómo cambiar la narrativa de violencia por la de esperanza. “¿Por qué no podemos pensar algo así para Limón, para Desamparados, para Pavas?”, me dijo con fuerza Montoya.

Esa es la visión que rescato de voces como la suya: que necesitamos pensar la seguridad como un proyecto de país, no como un listado de operativos policiales. Que la academia tiene que dialogar con el servicio público, y que la política no puede reducirse a consignas fáciles.

En el fondo, Verny Montoya y muchos otros académicos nos recuerdan algo que parece obvio, pero que hemos olvidado: la seguridad es demasiado importante para dejarla solo en manos de la policía. Es una construcción social, cultural, económica y política. Y, si la descuidamos, se desmorona todo lo demás.

Como ciudadano y como padre, me queda claro que si no recuperamos esa visión amplia, el país seguirá atrapado en un callejón sin salida. La voz de Verny y de tantos otros nos marca el camino: menos miedo, menos odio, más educación, más comunidad. Esa es, quizá, la ruta que todavía podemos construir antes de que sea demasiado tarde.



Capítulo 13

Fundaciones y ONGs

Pequeños Faros en la Oscuridad.



*“El pospenitenciario es clave: si no
damos acompañamiento,
los reincidentes volverán a llenar
las cárceles.”*

Federico Campos, Abogado

Hay noches en que uno siente que el país entero se nos hunde entre balaceras, cifras rojas y la desesperanza que cala en los barrios. Pero también hay noches, en medio de esa oscuridad, donde brillan pequeñas luces. Son esas luces las que me han dado esperanza cuando el panorama parece desolador. Hablo de las fundaciones, las ONG, las asociaciones comunales que, contra viento y marea, han decidido no rendirse. Que en medio del abandono estatal se convierten en faros, chiquitillos a veces, pero faros al fin, que iluminan vidas y caminos.

Recuerdo la primera vez que entré al barrio La Carpio acompañado de una amiga que trabajaba con la Fundación SIFAIS. No era un operativo policial, ni un reportaje sobre violencia. Era una mañana de sábado, y lo que me encontré fue una sinfonía de violines en medio del barrio que muchos solo asocian con droga y pobreza. Decenas de muchachos tocando música clásica, jóvenes que antes ni soñaban con tener un instrumento en sus manos. Una señora que había vivido toda su vida en el barrio me lo resumió con una frase que nunca olvidé: *“Esto es un milagro, don Jorge, aquí los chiquillos dejaron de soñar con un revólver y ahora sueñan con un violín”*.

Ese “milagro” no vino del Estado, sino de la sociedad civil organizada. El SIFAIS nació con la idea de que la cultura puede ser un escudo contra la violencia, y los datos les dan la razón. Según cifras que compartieron conmigo, más de 3.500 jóvenes han pasado por sus programas desde su fundación en 2011. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha documentado que los proyectos de arte y deporte reducen en un 30% la probabilidad de que jóvenes en contextos de riesgo se vinculen a economías ilegales. Y no estamos hablando de teorías abstractas, sino de historias concretas: muchachos que, gracias a la música, dejaron atrás el camino de las pandillas.

Lo mismo podría decirse del trabajo de la Fundación Acción Joven, que lucha contra la deserción escolar en colegios vulnerables. El Estado de la Educación 2021 advirtió que la tasa de abandono en secundaria en Costa Rica se mantiene alrededor del 10% anual, con cantones que superan el 15%. En barrios donde el narco recluta a la salida de las escuelas, esa cifra no es un dato frío, es una sentencia. Acción Joven acompaña a más de 20.000 estudiantes en todo el país, con programas de tutorías, mentorías y apoyo psicosocial. Y aunque el Ministerio de Educación Pública (MEP) hace esfuerzos, muchas veces son estas ONG las que logran retener a jóvenes que ya habían dado un pie fuera del aula.

Pero no se trata solo de educación o cultura. También está el frente de la prevención del delito directo, donde organizaciones como Fundación Rahab han hecho una labor titánica en la atención de mujeres víctimas

de trata y explotación sexual. Según datos del INAMU y la OIM, al menos 300 mujeres al año son rescatadas de redes de explotación en Costa Rica, muchas veces gracias a la coordinación entre ONG y autoridades. Rahab no solo les da refugio, también les ofrece capacitación, terapia y la posibilidad de reconstruir una vida que parecía rota.

Podría contar muchas más historias. La de Fundación PANIAMOR, que trabaja en la protección digital de niños y adolescentes, en un país donde el 48% de los menores de 12 a 18 años ha reportado haber sido víctima de algún tipo de ciberacoso, según datos de UNICEF 2022. O la de las asociaciones de desarrollo en zonas rurales, que gestionan proyectos productivos donde el Estado tarda años en aparecer.

Todas estas iniciativas tienen algo en común: nacen de la convicción de que la seguridad no se construye solo con patrullas, sino también con oportunidades. Y aunque parezcan pequeñas en comparación con la magnitud del problema, generan un impacto multiplicador. Porque cuando un joven encuentra un camino distinto al de la violencia, no solo cambia su vida: cambia la de su familia, su comunidad, su generación.

Lo que más me sorprende de estas organizaciones es su resiliencia. Porque trabajan con presupuestos mínimos, a menudo dependiendo de donaciones privadas, cooperación internacional o hasta rifas comunales. Y sin embargo logran resultados que, en términos de costo-beneficio, son mucho más eficientes que cualquier megaoperativo policial.

Hay un punto en el que me pongo crítico, y lo he conversado con varios líderes de estas ONG: ¿hasta cuándo seguiremos dependiendo de la buena voluntad de unos pocos, mientras el Estado se cruza de brazos? Porque no podemos romantizar la precariedad. Que una fundación logre sostener un comedor infantil con rifas y voluntariado es admirable, pero también es un reflejo de un Estado que no está llegando donde más lo necesitan.

El Informe Estado de la Nación 2023 fue tajante: Costa Rica está enfrentando la peor crisis de cohesión social en décadas. Y en medio de esa crisis, las ONG son un parche valioso, pero parche al fin. Ellas mismas lo

reconocen: su rol no debería ser sustituir al Estado, sino complementarlo. Lo que falta es una política pública que las integre de manera estratégica, que reconozca su valor y las potencie.

Al recorrer comunidades y ver el trabajo de estas fundaciones, me queda claro que hay semillas de esperanza. Son pequeños faros en la oscuridad, sí, pero si logramos conectarlos, si logramos que el Estado y el sector privado los apoyen de verdad, podrían convertirse en un faro colectivo capaz de iluminar todo el país.

Un líder comunal de Desamparados me lo dijo con la sabiduría simple de quien vive la realidad todos los días: *“Don Jorge, vea, nosotros aquí hacemos milagros con menudos, pero si hubiera plata y apoyo real, haríamos maravillas”*. Y creo que esa es la síntesis de lo que representan estas organizaciones: hacen milagros donde el Estado no llega, pero podrían hacer maravillas si las tomáramos en serio.

LA APUESTA POR LA INSERCIÓN SOCIAL DE EX PRIVADOS DE LIBERTAD

Una tarde de noviembre me invitaron a un taller en la cárcel de San Rafael de Alajuela. Ahí, entre paredes descascaradas y pasillos marcados por la rutina de los candados, conocí a un grupo

de hombres que estaban aprendiendo panadería. El olor a pan recién horneado contrastaba con el ambiente carcelario y, por un instante, parecía que el encierro se difuminaba. Uno de ellos, un muchacho de 28 años llamado Daniel, me contó que había pasado seis años tras las rejas por robo agravado. *“Aquí aprendí a hacer pan, pero lo que más quiero es que me den chance de hacer algo allá afuera”*, me dijo con una mezcla de ilusión y miedo. Esa frase me quedó retumbando: chance. Eso es lo que miles de ex privados de libertad en Costa Rica buscan al salir, y casi nunca encuentran.

El país tiene hoy más de 16.000 personas privadas de libertad y, cada año, alrededor de 3.500 recuperan la libertad bajo distintas modalidades, según datos del Ministerio de Justicia y Paz (2023). La pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es: ¿qué pasa con ellos cuando cruzan la puerta hacia afuera? Lamentablemente, la respuesta suele ser el

rechazo, la estigmatización y, en no pocos casos, la reincidencia. El Informe del Estado de la Justicia 2022 señalaba que casi un 35% de las personas que salen del sistema penitenciario reinciden en delitos en menos de tres años. No porque quieran volver a delinquir, sino porque el camino de la reinserción está lleno de obstáculos invisibles: la desconfianza social, la burocracia y la falta de oportunidades laborales.

Sin embargo, y aquí es donde quiero detenerme, han surgido proyectos de la sociedad civil que se han atrevido a caminar ese terreno espinoso. Fundaciones como Fundación Nueva Oportunidad, Asociación Horizonte Positivo, o iniciativas como Segundas Oportunidades, han desarrollado programas para apoyar a personas que egresan del sistema penitenciario. En sus talleres, los ex privados de libertad aprenden oficios, reciben acompañamiento psicológico y, en algunos casos, consiguen incluso su primer empleo formal.

Un ejemplo inspirador es el de la Fundación Nueva Oportunidad, que desde 2016 trabaja en la capacitación de personas en oficios como barbería, panadería y electricidad. Según sus datos, más de 400 ex privados de libertad han sido atendidos en programas de reinserción laboral, y un 60% de ellos logró sostener un empleo durante al menos un año. Puede sonar como un número modesto, pero en un contexto donde la reincidencia supera el 30%, ese logro significa romper un ciclo.

Recuerdo la historia de Luis, un hombre que salió de la cárcel de La Reforma después de cumplir 10 años por tráfico de drogas. A los pocos días, fue recibido por un programa de reinserción que le ofreció un curso de mecánica automotriz. Con el tiempo, consiguió empleo en un taller en Heredia. Cuando lo entrevisté meses después, me confesó que al principio los clientes lo miraban con recelo: *“yo sabía que en sus ojos leían mi pasado”*. Pero poco a poco, con disciplina y trabajo, fue ganándose la confianza. Actualmente dirige su propio pequeño taller y colabora en charlas para jóvenes en riesgo. Historias como la suya son pequeñas victorias, pero valen oro porque demuestran que la reinserción no es una quimera, sino una posibilidad real si hay apoyo.

Con cárceles cárcel desbordadas y un sistema judicial sobrecargado, invertir en reinserción no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia de eficiencia económica. Pero aún hay mucho por hacer. En la última década, el presupuesto destinado al Instituto Nacional de Criminología apenas creció un 5%, mientras que el gasto en seguridad y represión aumentó más de un 25%. Esa disparidad refleja la lógica predominante: invertir en encierro, no en segundas oportunidades. Y aquí entra el papel crucial de las fundaciones y ONG, que se han convertido en el puente que el Estado no construyó.

Claro, el camino está lleno de piedras. Los empleadores muchas veces se niegan a contratar a alguien con antecedentes penales. Aunque la ley costarricense permite, bajo ciertas condiciones, que se elimine el registro judicial después de cierto tiempo, en la práctica el estigma persiste. El Programa de Naciones Unidas para la Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) insiste en que la reinserción debe ir acompañada de campañas de sensibilización comunitaria, porque de nada sirve capacitar a una persona si la sociedad no está dispuesta a abrirle las puertas.

En medio de todo, he visto brotar iniciativas conmovedoras. En Puntarenas, una cooperativa formada por mujeres que pasaron por el sistema penitenciario produce artesanías con materiales reciclados y las vende en ferias locales. Más allá del ingreso económico, lo que ellas destacan es el sentido de dignidad recuperada. Una de ellas me dijo: *“yo ya no me siento una ex reclusa, ahora me siento artesana”*. Ese cambio de identidad es, quizás, el mayor éxito de la reinserción.

La evidencia internacional muestra que las segundas oportunidades funcionan cuando se trabaja en tres dimensiones: empleo, educación y apoyo psicosocial. Y ahí es donde la sociedad civil ha demostrado ser más ágil que el aparato estatal. Programas que incluyen mentorías, becas de estudio y apoyo familiar logran resultados sostenibles. No es casual que países como Noruega, con índices de reincidencia de apenas un 20%, tengan un enfoque centrado en la rehabilitación más que en el castigo. Costa Rica, aunque muy lejos de ese modelo, puede aprender y adaptarse.

Lo que me queda claro es que la reinserción no puede ser vista como una concesión, sino como una estrategia de seguridad pública. Porque cada ex privado de libertad que logra construir una vida digna es un eslabón menos en la cadena del crimen organizado. Y cada historia de éxito rompe con la narrativa de que “la cárcel sólo sirve para encerrar”.

Aquel día en San Rafael, cuando vi a Daniel sacando con orgullo un pan dorado del horno, pensé que tal vez ahí estaba la clave: ofrecer una oportunidad, aunque sea pequeña, para que alguien recupere la fe en sí mismo. La pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a dar ese chance. Porque, al final, la verdadera medida de nuestra justicia no es cuántos encarcelamos, sino cuántos logramos devolverle al país como ciudadanos plenos.

Después de una charla universitaria me senté a conversar con Verny Montoya. Él, con la calma de quien ha visto las transformaciones sociales desde dentro de las aulas y los foros internacionales, me dijo:

Aquella frase me quedó retumbando porque sintetiza una verdad incómoda: mientras el Estado se enreda en diagnósticos y excusas, son muchas veces las comunidades y las organizaciones de base las que dan el primer paso para transformar realidades.

Y no se trata de discursos huecos. Tenemos ejemplos concretos que muestran que sí se puede cambiar el rumbo, incluso en los contextos más adversos.

EXPERIENCIAS QUE DEMUESTRAN QUE SÍ SE PUEDE

‘El Estado no le alcanza, Jorge, pero el Estado sí puede hacer más. Lo primero que debe hacer es cambiar la narrativa, porque debemos construir en valores positivos’.

Una de las experiencias más conmovedoras que recogí fue la de Karla, una mujer que salió de El Buen Pastor tras cumplir condena por delitos vinculados al microtráfico. Cuando la entrevisté en 2023, me dijo con una sinceridad brutal: *“Yo no esperaba nada. Yo pensé que iba a salir y nadie me iba a dar chance, que iba a volver a vender droga. Pero me metí al curso de costura y después una empresa pequeña me contrató. Ahora llevo dos años trabajando ahí y siento que recuperaré el respeto de mis hijos”*. Esa frase, “recuperé el respeto de mis hijos”, me partió el alma y me reafirmó que la reinserción no se mide solo en empleo, sino en dignidad, en la reconstrucción de lazos familiares, en la posibilidad de volver a sentirse parte de algo más grande.

“Cuando la comunidad participa en la reinserción, los índices de éxito se disparan.”

Pablo Solano, Abogado Penalista

En Alajuelita, por ejemplo, una cooperativa formada por ex privados de libertad se ha convertido en un faro comunitario. Producen pan y reparten parte de lo que hornean en comedores escolares. En sus palabras: *“La gente al inicio nos miraba feo, pero cuando vieron que estábamos ayudando a los chiquitos, nos empezaron a respetar”*. Esa transformación de la mirada social es, quizá, el mayor triunfo: pasar de ser vistos como amenaza a ser reconocidos como aporte.

Y no se trata solo de reinserción después de la cárcel. También hay proyectos preventivos que atacan el problema antes de que se produzca.

También pienso en lo que me dijo Carlos Arguedas sobre la necesidad de proteger la innovación, las ideas y los talentos en nuestro país: *“Costa Rica está llena de inventores, está llena de artistas, pero no se les incentiva para que sigan creando y puedan utilizar esos mecanismos de protección”*. Aunque él hablaba de propiedad intelectual, su reflexión encaja con lo que vemos en la reinserción: tenemos talento escondido detrás de barrotes, esperando una oportunidad. En los talleres de panadería, en las cooperativas de artesanía, en los cursos de electricidad, lo que florece no es solo un oficio, sino la posibilidad de que ese talento encuentre cauce en la sociedad.

Freddy Montero lo explicó de manera muy clara cuando hablamos de migración y juventud vulnerable:

Esa advertencia la hemos visto cumplirse demasiadas veces en barrios de Limón, Desamparados o Puntarenas. Y sin embargo, en esos mismos barrios también hemos visto comunidades organizadas creando equipos de fútbol, talleres de música y espacios de tutoría escolar que mantienen a los niños alejados de la tentación del narco.

Lo que queda claro es que los cambios sostenibles nacen cuando sociedad civil, sector privado y

Estado logran encontrarse en un mismo propósito. El problema es que ese encuentro no ocurre con la frecuencia ni la fuerza que se necesita; el tejido social está debilitado, y hay gran desconfianza hacia las instituciones. Pero esa misma desconfianza no se traduce en apatía total; más bien, ha impulsado a vecinos, fundaciones y colectivos a tomar las riendas.

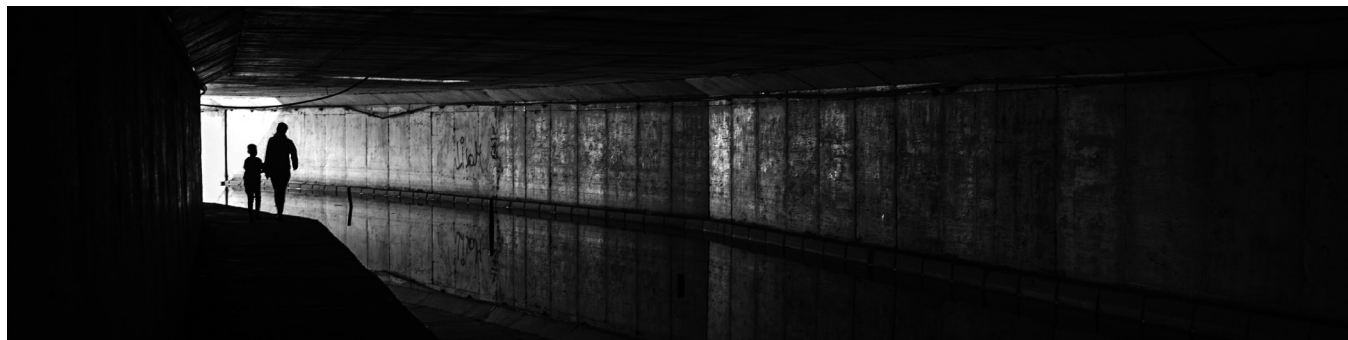
Cuando entrevisté a Virginia Calzada, ex presidenta de la Sala Constitucional, ella me contó algo que conecta con esta idea: *“Lo que hizo la Sala fue empoderar a la gente y decirle: usted tiene derechos. El Estado no se los da, son suyos”*. Esa semilla de empoderamiento se ha traducido en que hoy, aunque la institucionalidad tambalee, la gente sepa que tiene derecho a exigir y a construir. Lo mismo aplica para la reinserción: la persona que sale de la cárcel tiene derecho a rearmar su vida, y la sociedad tiene el deber de no cerrarle todas las puertas.

Las experiencias que sí han funcionado demuestran que no estamos condenados a repetir la misma historia. Lo que falta es decisión política y un cambio de mentalidad colectiva. Como me dijo un joven en un taller de reinserción en Heredia: *“Yo no quiero que me vean como ex reo, yo quiero que me vean como papá, como trabajador, como vecino”*. Y

“Si no creamos oportunidades, si no abrimos espacios de integración, esos jóvenes van a encontrar cabida en el crimen organizado, porque ahí sí les abren la puerta”.

esa es, en el fondo, la lección que estas experiencias nos regalan: que la verdadera seguridad no se construye con barrotes más gruesos, sino con comunidades más abiertas.


En mi recorrido por estos espacios he aprendido algo que quisiera dejar como reflexión: cuando una persona logra reinsertarse, no solo gana ella, gana toda la sociedad. Ganan sus hijos, que ya no crecen viendo la cárcel como destino inevitable. Ganan los barrios, que ven menos violencia y más colaboración. Gana el Estado, que ahorra recursos. Y ganamos todos, porque cada historia de reinserción exitosa es un recordatorio de que, aunque la oscuridad del crimen y la violencia parezca imponerse, siempre hay pequeños faros que nos muestran que sí se puede.



Capítulo 14

La Escuela como Primera Trinchera de Seguridad

**Educación, Cultura y Comunidad
Como Barreras al Crimen.**



*“La escuela es la primera barrera
contra la violencia, pero la hemos
debilitado.”*

Carlos Corrales, Licenciado en Derecho Legal

Nuestros niños y adolescentes se han convertido en el mercado cautivo del crimen organizado: ahí están los consumidores, los distribuidores, los sicarios y las víctimas. Esa realidad me heló la sangre al comprender que el aula, ese espacio donde debería formarse la esperanza de un país, se ha ido transformando en terreno de disputa entre dos proyectos de vida opuestos: uno basado en la educación, la solidaridad y el trabajo; otro atrapado por el narco, el dinero rápido y la violencia.

Pienso en mi paso por barrios de Limón y Desamparados, donde a 50 metros de las escuelas se venden drogas al menudeo. Lo documentó el mismo Estado de la Nación y lo repiten maestros y directores con voz cansada. Ellos saben que no se trata solo de impartir clases de matemáticas o español, sino de librar batallas diarias contra un sistema que muchas veces los deja solos. Una directora me confesó hace un año: *“Jorge, aquí enseñamos a leer y escribir, pero también a esquivar balas”*. La crudeza de esa frase resume lo que muchos no quieren ver: la escuela se convirtió en una línea de defensa frente al crimen organizado.

En contraste, hay ejemplos inspiradores que nos muestran otro camino. En Cartago, un proyecto piloto integró tutorías escolares con programas de arte y deporte en comunidades de alto riesgo. Según la evaluación de la Fundación PANIAMOR, los índices de violencia juvenil en la zona bajaron un 18% en solo dos años. Invertir en la permanencia escolar no es un lujo: es una estrategia de seguridad nacional.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro laboral de cada estudiante, sino la cohesión de toda la sociedad. Si dejamos que los colegios se vacíen, los barrios se llenan de economías ilegales. Verny lo explicaba bien cuando señalaba la criminalización de la pobreza: *“Estamos produciendo inseguridad porque hemos descuidado la educación, la vivienda, los servicios públicos, la política social”*. Cuando la escuela no logra retener a los jóvenes, el Estado pierde su principal herramienta de prevención del delito.

Los docentes lo saben. Lo viven en carne propia. Muchos estudiantes les han contado que tienen que escoger entre hacer la tarea o ir a ayudar en la pulpería porque a la mamá no le alcanza para pagar la luz. Esa realidad nos recuerda que la educación no se sostiene en abstracto; necesita condiciones básicas: alimentación, transporte seguro, apoyo psicosocial. Por eso programas como el comedor estudiantil y las becas de Avancemos no son gastos, son inversiones en seguridad preventiva.

La FAO ha documentado que los comedores escolares mejoran el rendimiento académico en un 20% y reducen la reincidencia. Cada plato de comida servido en la escuela es un muro levantado contra la tentación de la calle. Pero aquí es donde surge la paradoja: sabemos lo que funciona,

y aun así seguimos recortando presupuestos en educación.

La escuela, entonces, no es solo un espacio de enseñanza, es la primera trinchera de seguridad que tenemos como país. Ahí se define si un joven aprenderá a resolver conflictos con diálogo o con violencia, si verá en el esfuerzo académico un camino posible o si terminará tentado por la plata fácil del narco. Y lo más importante: ahí se construye ciudadanía, ese pegamento invisible que mantiene unida a una sociedad.

Cada vez que entro a un centro educativo y veo a un grupo de estudiantes cantar el himno o presentar un proyecto de ciencias, me convengo de que todavía estamos a tiempo. Pero ese tiempo se acaba si seguimos ignorando que la seguridad de Costa Rica empieza en las aulas. La escuela no es un lujo ni un trámite, es nuestra primera línea de defensa. Y si no la fortalecemos, lo que perdemos no son solo generaciones de jóvenes, sino el país entero.

**COMUNIDADES
ORGANIZADAS: TEJIDO
SOCIAL FRENTE AL MIEDO**

Siempre me ha impresionado cómo, en medio de la adversidad, el pueblo tico encuentra formas de resistir y organizarse. He caminado por barrios donde la

violencia parece una sombra inevitable, y, sin embargo, en la esquina más inesperada aparece un grupo de vecinas que organiza una red de cuidado infantil, una asociación que monta talleres de fútbol para niños en riesgo o un comité que se reúne para recuperar un parque que había sido tomado por el narco. Esa es la magia de nuestras comunidades: cuando el Estado flaquea, son ellas las que levantan trincheras invisibles contra el miedo.

En una de esas caminatas por Pavas, recuerdo haber conversado con doña María, una lideresa comunal que ha visto cómo su barrio pasó de ser un lugar tranquilo en los años 80 a uno de los sectores más estigmatizados de San José. Ella me dijo: *“Aquí no esperamos a que venga la policía ni los políticos. Si queremos que nuestros hijos vivan mejor, somos nosotros los que tenemos que movernos”*. Ese espíritu resume lo que investigaciones internacionales llaman capital social: la capacidad de los vínculos comunitarios para generar confianza, cooperación y seguridad.

No se trata de magia, sino de algo sencillo: cuando la gente se conoce, se apoya y trabaja junta, el crimen organizado tiene menos espacio para operar. Sin embargo, construir comunidad en medio del miedo no es tarea fácil. El crimen organizado está reclutando a nuestros jóvenes porque las comunidades se han debilitado, porque dejamos de creer en el concepto de comunidad. La modernidad, la prisa y la desconfianza hacia las instituciones han fragmentado el tejido social. Y en esos vacíos, las bandas criminales ofrecen algo que parece comunidad, pero es control: fiestas con birras financiadas por el narco, ayuda económica para familias sin ingresos, protección a cambio de lealtad.

Por eso resulta vital fortalecer iniciativas que devuelvan la pertenencia a los barrios. En Limón, por ejemplo, la Fundación Limón Futuro impulsó un programa donde se combinaron actividades deportivas con talleres de liderazgo juvenil. En tres años, la tasa de deserción escolar en los distritos participantes bajó un 15% y los incidentes violentos reportados a la policía se redujeron en un 20%. Casos como este demuestran que el miedo no se combate solo con más policías, sino con más comunidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la violencia es un fenómeno social y estructural, y que las respuestas más efectivas son aquellas que involucran a las personas directamente en la solución. Esto significa que la seguridad no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo. Y en Costa Rica, tenemos un instrumento clave que muchas veces está subutilizado: las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Según datos del DINADECO (2022), existen más de 3.500 asociaciones registradas en el país. Imaginemos el potencial si todas tuvieran recursos, formación y acompañamiento técnico para trabajar en prevención del delito.

Pero aquí aparece otra contradicción que me ha acompañado durante años: hablamos de la importancia de las comunidades, pero la inversión pública en organización comunal sigue siendo mínima. Mientras destinamos más de 500 mil millones de colones al año a seguridad y cárceles, el presupuesto de DINADECO apenas ronda los 3 mil millones. Es decir, invertimos 150 veces más en reaccionar ante el crimen que en fortalecer a quienes podrían prevenirlo desde la raíz.

En medio de estas cifras, lo que mantiene viva la esperanza son las historias concretas. Recuerdo el caso de un grupo de jóvenes en Desamparados que decidió recuperar una cancha abandonada. Con ayuda de la comunidad y de una pequeña ONG, lograron repararla y convertirla en un espacio de torneos de fútbol y actividades culturales. Uno de los líderes, Kevin, me dijo: *“Antes aquí se vendía crack, ahora se venden frescos en los partidos”*.

La pandemia de COVID-19 también dejó aprendizajes en este sentido. Cuando el Estado se vio rebasado para llevar alimentos a todos los hogares afectados, fueron las comunidades las que organizaron redes solidarias, ollas comunitarias y comités de emergencia. El Informe Estado de la Nación 2021 resaltó cómo esas redes mitigaron el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables. Es decir, el tejido social no solo previene violencia, también sostiene al país en momentos de colapso.

La pregunta que me hago, y que me gustaría dejar planteada, es: ¿qué pasaría si decidimos invertir en grande en organización comunal? ¿Si cada barrio tuviera recursos para proyectos culturales, deportivos y educativos? ¿Si cada comité vecinal tuviera acompañamiento para gestionar la prevención de la violencia? Estoy convencido de que, en pocos años, los índices de inseguridad se desplomarían, no por arte de magia, sino porque devolveríamos a la gente el poder de cuidar su propio entorno.

En el fondo, de eso se trata todo este libro: de reconocer que la seguridad no es solo un asunto de policías, jueces y cárceles, sino de maestras, entrenadores, líderes comunales y familias que día a día resisten al miedo con solidaridad. Como me dijo doña María en Pavas, con la mirada firme pese a todo: *“La comunidad no se rinde, Jorge, porque cuando uno se rinde, gana el miedo. Y nosotros todavía no estamos listos para rendirnos”*.

ARTE, DEPORTE Y CULTURA COMO ARMAS CONTRA LA VIOLENCIA

jueces, sino chiquillos tocando guitarra en un festival comunal, equipos de fútbol improvisados en una cancha de barrio, o mujeres organizadas para montar talleres de danza y teatro. He aprendido, en las calles y en los informes más serios, que la violencia no se combate solo con represión ni con cárceles más grandes, sino con oportunidades reales para canalizar la energía, el talento y la creatividad que laten en cada persona.

En los barrios de Costa Rica se respira una paradoja: la misma chiquilla que puede terminar siendo reclutada por el narco como “mula” o como campana, podría, con un estímulo distinto, estar brillando en un escenario de hip hop o corriendo en una pista atlética.

“El deporte y el arte no son lujos, son estrategias de seguridad.”

Marlene Luna Alfaro,
Presidente Ejecutiva del IFAM

Lo vi de primera mano en La Carpio, donde un pequeño grupo de vecinos creó la Escuela de Música Sifais. En un barrio que muchos ticos solo mencionan con prejuicio, un salón improvisado con violines, guitarras y tambores se convirtió en refugio. Una de las muchachas, Angie, me dijo un día con una sonrisa que no olvido: “Yo antes pasaba las tardes viendo pleitos en la calle, ahora

paso las tardes ensayando para un concierto. Aquí encontré un motivo para no irme con los que me ofrecían plata fácil”. Esa frase pesa más que cualquier estadística, aunque las estadísticas la respalden

No se trata de romanticismo. La UNESCO ha documentado cómo el arte y la cultura funcionan como herramientas de prevención de violencia en contextos tan difíciles como Medellín, El Salvador o Ciudad Juárez. En todos esos casos, la apuesta por espacios culturales fue acompañada de resultados concretos: reducción de homicidios, mayor cohesión

comunitaria y nuevas oportunidades económicas. Costa Rica, con su tradición pacifista y educativa, debería ser ejemplo en este campo, pero más bien vamos rezagados. Según el Presupuesto Nacional 2023, apenas un 0,4% del gasto público se destina al Ministerio de Cultura y Juventud, muy por debajo del promedio regional recomendado por organismos internacionales.

El deporte es otro terreno donde la prevención del delito encuentra terreno fértil. En Limón, la pasión por el fútbol ha sido durante décadas un motor de identidad, pero también una tabla de salvación. Recuerdo una visita al proyecto Academia de Fútbol Limón FC Joven, donde entrenadores locales se empeñan en rescatar muchachos que la calle ya casi les había arrebatado. Uno de ellos, Steven, me dijo: *“Aquí me enseñaron disciplina. Yo venía a entrenar aunque no hubiera plata para el bus. Mejor cansado por entrenar que cansado por correr de la policía”*. Ese cambio de mentalidad es lo que convierte una cancha polvorienta en un espacio de esperanza.

En Costa Rica, iniciativas como Juntos por el Deporte del ICODER han demostrado que, con pocos recursos, es posible reducir la deserción escolar y aumentar la participación comunitaria. Sin embargo, el presupuesto para el deporte tampoco escapa a los recortes: en 2022, el ICODER recibió apenas el 0,13% del PIB.

El reto está en entender que estas iniciativas no son adornos, sino políticas de seguridad. Cuando invertimos en un festival cultural o en una liga deportiva comunal, estamos invirtiendo en menos balas, menos cárceles y menos madres llorando por hijos perdidos en la violencia.

Como bien decía Verny Montoya en una de nuestras conversaciones:

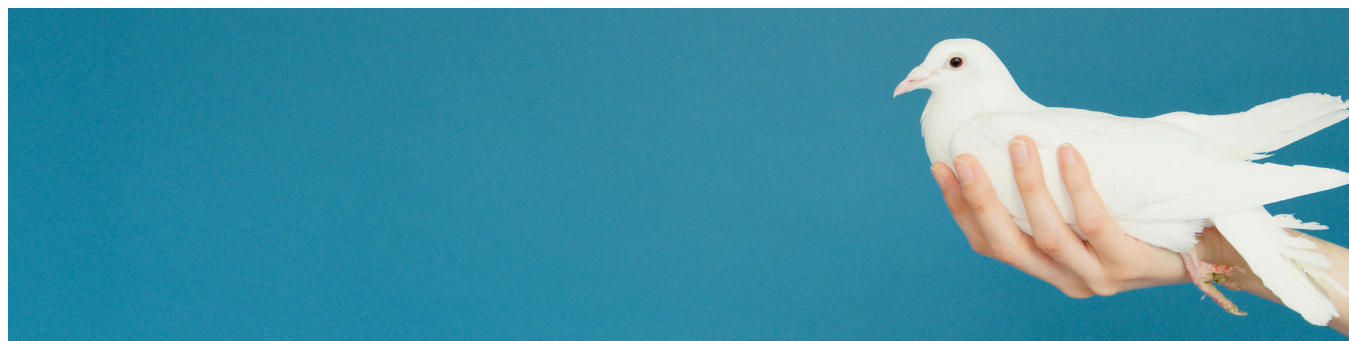
Pero no basta con tener proyectos aislados. El gran desafío es articular estas iniciativas con políticas nacionales. La Política Nacional de Seguridad 2023–2030 habla de prevención y cohesión social, pero si el discurso no se traduce en plata, en infraestructura y en apoyo sostenido, se queda en el papel. Necesitamos que los barrios no dependan de la buena voluntad de una ONG o de un grupo de voluntarios, sino que cuenten con un respaldo institucional sólido.

La cultura también abre un camino de memoria y resistencia. En barrios golpeados por la violencia, los murales pintados por jóvenes no son solo arte, son declaraciones políticas: “Aquí estamos”, “No nos rendimos”, “La calle es nuestra”. Esos mensajes valen tanto como un operativo policial, porque disputan el territorio simbólico que muchas veces el narco pretende adueñarse. El sociólogo francés Loïc Wacquant lo explicó bien: el control del espacio urbano no es solo físico, es cultural. Y en Costa Rica, si no defendemos los símbolos de la comunidad con arte, música y deporte, otros ocuparán ese vacío con miedo.

En el fondo, hablar de arte, deporte y cultura como armas contra la violencia es reconocer que la seguridad se construye con colores, canciones y partidos de barrio tanto como con leyes y patrullas. Es aceptar que cuando un muchacho o una muchacha se sube a un escenario o mete un gol, está diciendo: “*yo también importo, yo también tengo un lugar en esta sociedad*”. Y ese reconocimiento, tan básico pero tan poderoso, es la mejor vacuna contra el crimen.

*“La política social
va primero. Si no
entendemos que la
educación, la cultura
y el deporte son
seguridad, vamos a
seguir repitiendo el
paradigma punitivo
que solo alimenta
el monstruo de la
violencia”.*


Cuando cierro los ojos y pienso en el país que quiero dejarle a mis hijos y nietos, no imagino un Costa Rica lleno de cárceles gigantes ni de retenes policiales en cada esquina. Imagino un país donde cada barrio tenga su centro cultural, donde cada escuela cuente con canchas y talleres artísticos, donde cada niño y niña tenga una guitarra o un balón a mano antes de que alguien le ofrezca un arma. Imagino un país donde, como decía Angie en La Carpio, haya más conciertos que pleitos en la calle. Y entonces me convengo de que sí se puede, siempre y cuando tengamos la voluntad política y social de apostar por lo que realmente construye paz: nuestra gente, su creatividad y su talento.



Conclusión

Un Nuevo Pacto Social por la Seguridad y la Justicia

**El País que Somos
y el País que Podemos Ser.**



*“Un país no se mide solo por sus
cifras, sino por la valentía de
reconocer sus grietas y la decisión
de cerrarlas con justicia.”*

Jorge Woodbridge González, Economista

Costa Rica siempre se ha contado a sí misma la historia de ser un país distinto. El país que somos en la memoria colectiva, la Costa Rica del “pura vida” que tanto repetimos a los turistas y a nosotros mismos. Pero cuando vemos los datos fríos, las estadísticas de violencia, la desigualdad creciente y la fragilidad de nuestras instituciones, tenemos que aceptar que ese relato está lleno de grietas.

Costa Rica atraviesa la peor crisis de seguridad en su historia reciente. Esa no es la Costa Rica que queremos ser, pero sí es la que somos hoy. Y reconocerlo no es pesimismo, es el primer paso para cambiar.

“Costa Rica está ante una decisión histórica: defender su identidad de paz o perderla ante el crimen.”

Rogelio Pardo,
ex Secretario de Defensa de EEUU

En esa misma Costa Rica que enfrenta cifras alarmantes, hay otra que resiste y que busca caminos distintos. Pienso en lo que me dijo Virginia Calzada, ex Presidenta de la Sala Constitucional:

“No podemos perder lo que tenemos, Jorge. Este país tiene un sistema de defensa de derechos

sólido. Lo que necesitamos es repensar el país sin abrir portillos que nos hagan perder lo que tanto nos ha costado”.

Esa visión es clave: no se trata de destruir lo que hemos logrado, sino de actualizarlo, de ajustarlo a los nuevos tiempos.

Y es aquí donde aparece el país que podemos ser. Porque no estamos condenados a convertirnos en un espejo de lo peor de Centroamérica. Tenemos bases que muchos países envidiarían: una democracia estable, instituciones que, aunque golpeadas, aún funcionan, una sociedad civil activa y una tradición de resolver los conflictos por la vía del diálogo. El reto es decidir si esas fortalezas se quedan en el discurso o si las convertimos en el motor de una nueva etapa.

Si el país que somos tolera esa exclusión, el país que podemos ser tiene que enfrentarlo invirtiendo en educación, empleo digno y cultura. Lo que podemos ser también se juega en la política pública de seguridad. El país que podemos ser requiere que la seguridad deje de ser botín electoral y se convierta en una causa nacional.

Como dijo un líder comunitario de Limón en una de las entrevistas: *“Aquí estamos cansados de promesas. No ocupamos más discursos, ocupamos que crean en nosotros y que inviertan en la gente”*. Esa frase debería estar en la entrada de la Asamblea Legislativa, en Casa Presidencial y en todos los ministerios.

El país que somos está en crisis, pero el país que podemos ser sigue al alcance de la mano. No se trata de nostalgia por lo que fuimos, sino de construir con valentía lo que queremos ser. Un país donde la justicia no sea un lujo, donde la seguridad no se base en el miedo y donde las oportunidades no estén reservadas para unos pocos. El pacto social que necesitamos no es un eslogan: es la única manera de que Costa Rica no pierda lo que la hizo especial.

Porque, al final, la pregunta es simple pero profunda: ¿queremos ser recordados como la generación que dejó que la violencia nos robara el alma, o como la generación que se atrevió a reconstruir el país desde la esperanza?

ESCUCHAR TODAS LAS VOCES FUERA DEL BARRIO

En mis recorridos por distintos rincones del país, desde Limón hasta Guanacaste, desde los barrios del sur de San José hasta

las montañas de Los Santos, he aprendido una lección que parece obvia, pero que el Estado a menudo olvida: no hay soluciones posibles si no escuchamos a quienes viven la realidad en carne propia. Costa Rica ha construido sus políticas de seguridad y justicia desde arriba hacia abajo, con documentos técnicos llenos de buenas intenciones, pero rara vez con las voces de quienes cargan día a día con la inseguridad, la falta de oportunidades o la desconfianza hacia las instituciones.

Estamos criminalizando la pobreza, y lo peor es que lo hacemos sin preguntarle a la gente qué necesita. Se diseñan políticas desde el adultocentrismo, desde la visión de quienes nunca han pisado un barrio donde el narco recluta niños. Su crítica es certera. Muchos planes siguen viéndose como recetas importadas o como experimentos ajenos a la realidad cotidiana de nuestras comunidades.

La democracia, para mucha gente, se volvió un ritual vacío. Si la gente no cree que sus experiencias cuentan, difícilmente va a confiar en que el Estado pueda responderle.

En Limón, una madre me decía entre lágrimas: *“A mí nadie me preguntó nada cuando pusieron el operativo en el barrio. Yo no quiero más patrullas; yo quiero una beca para mi hijo, quiero que la escuela funcione, que no se cierre la cancha”*. Esa voz refleja algo que también documenta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2022): las comunidades vulnerables no rechazan la seguridad policial, pero saben que no basta con eso; necesitan inversión social sostenida.

Lo que necesitamos es un nuevo pacto social. No nos quedemos esperando leyes que tarden diez años en aprobarse. Hay cosas que podemos hacer ya, escuchando a todos los sectores; sindicatos, universidades, comunidades organizadas, iglesias, empresarios. Todos tienen algo que decir, pero el reto es lograr que esas voces se traduzcan en acuerdos, y no en una nueva torre de Babel donde cada quien grita sin escuchar al otro.

Las instituciones del Estado están en crisis de legitimidad, pero el tejido social todavía respira. Si queremos soluciones duraderas, tenemos que apoyarnos en ese tejido, no seguir debilitándolo.

Me queda claro que el país que podemos ser solo es posible si se rompe el silencio de quienes nunca han sido llamados a la mesa. Porque el crimen organizado no solo se infiltra con armas y drogas, sino también con la oferta de ser escuchados. El narco le dice a un muchacho: *“vení, aquí sí te ocupamos”*. El Estado, en cambio, sigue distante, abstracto, incapaz de generar ese sentido de pertenencia. Cuando la gente siente que sus voces tienen valor, se logra construir resiliencia frente a la violencia. Costa Rica no puede darse el lujo de ignorar esa evidencia.

Escuchar todas las voces significa abrir espacios reales, no foros simbólicos. Significa que las políticas de seguridad y justicia no se definan solo en los ministerios o en la Asamblea Legislativa, sino en los barrios, en las escuelas, en las cárceles, en los espacios donde la violencia se vive día a día.

Fuera del barrio, en las oficinas de gobierno y en los foros internacionales, seguimos hablando de seguridad como si fuera un tema técnico, lleno de estadísticas y siglas. Dentro del barrio, la seguridad se mide en si podés

dejar que tu hijo vaya solo a la pulpería, en si podés dormir sin miedo a las balaceras, en si tu hija puede soñar con un futuro que no dependa de un narco. El país que podemos ser depende de que esas dos conversaciones se encuentren, que las cifras se junten con los relatos, que la política pública nazca de escuchar antes que de imponer.

Costa Rica está en una encrucijada, sí, pero la brújula no está rota. La tenemos en esas voces que reclaman ser escuchadas, en esas comunidades que insisten en organizarse, en esos jóvenes que todavía sueñan con un futuro distinto. La pregunta es si vamos a tener la humildad y la voluntad de escuchar de verdad. Porque solo entonces podremos decir que hemos aprendido la lección más importante: la seguridad y la justicia no se construyen desde arriba, sino desde el corazón mismo de la gente.

HACIA UNA COSTA RICA MÁS JUSTA, SEGURA Y HUMANA

Cuando pienso en la Costa Rica que heredamos, la que me contaban mis abuelos, me viene a la mente la imagen de un país pequeño pero orgulloso, que abolió el ejército

para invertir en educación, que apostó por la salud universal y que creyó que la paz era su principal escudo. Esa narrativa todavía vibra en la identidad nacional, pero al mismo tiempo choca con el presente.

Costa Rica ya no es un pueblo pasivo; es un pueblo que reclama. Y si ese reclamo no encuentra cauce institucional, lo encontrará en la frustración o en la violencia. La Costa Rica que podemos ser es aquella que se atreva a modernizar su aparato judicial, que use la tecnología para acortar tiempos y que entienda que cada día de mora es una herida en la democracia.

En el fondo, lo que este viaje me enseñó es que el país todavía tiene una oportunidad. Tenemos instituciones golpeadas, sí, pero no derrotadas; tenemos comunidades agobiadas, sí, pero llenas de resiliencia. Y tenemos voces que nos dicen, con claridad, que otro camino es posible.

Como narrador y como ciudadano, cierro con las palabras de Robert Bacon, que me siguen resonando:

“La inteligencia no se trata de apagar fuegos, sino de ver más allá, de anticipar y de construir estructuras que protejan la democracia”.

Ese es el reto. Y si lo asumimos, si dejamos de lado la indiferencia, podremos decir dentro de unos años que Costa Rica supo reinventarse para ser más justa, más segura y, sobre todo, más humana.

*“El verdadero triunfo será que las
próximas generaciones no hablen del
miedo que heredaron, sino de la esperanza
que supimos construir juntos.”*



Reto Seguridad Ciudadana Siglo 21

Por: Jorge Woodbridge González



COSTA RICA:

RETO SIGLO 21

En un país que alguna vez fue ejemplo de paz, la violencia avanza como una sombra que amenaza con oscurecer la identidad costarricense. Reto Seguridad Ciudadana Siglo 21 recorre los desafíos de Costa Rica ante el narcotráfico, la inseguridad y la fragilidad de sus instituciones, mostrando un panorama que no podemos seguir ignorando. Con voces de expertos y ciudadanos, este tomo de la colección Reto Siglo 21 propone caminos para recuperar la confianza, reconstruir la cohesión social y fortalecer al Estado. Una invitación a decidir si queremos un futuro marcado por el miedo o guiado por la esperanza.

Quienes deseen conocer a los participantes y escuchar esas conversaciones pueden visitar el sitio web www.retosiglo21.org donde también se brinda información sobre esta importante iniciativa de ciudadanos comprometidos con la libertad, la democracia y el desarrollo humano integral.

J O R G E W O O D B R I D G E G O N Z Á L E Z

Ingeniero químico por la Universidad de Costa Rica, con estudios en Incae Business School y Ipade. Fue director del ICT, viceministro de Economía (2006-2008) y ministro de Competitividad (2008-2010). Es asesor financiero, fundador del Banco de Fomento Agrícola y profesor en la UCR. Ha dirigido diversas empresas y asociaciones, y es autor de varios libros sobre economía y sociedad.

